

PERIODO 122



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5^a REUNION – 3^a SESION ORDINARIA
7 DE ABRIL DE 2004

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado DANIEL O. SCIOLI
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor MARCELO A. H. GUINLE**

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAR, Graciela Y.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPÓS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO, María T.
 CONTI, Diana
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLEGO, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JAQUE, Celso A.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MARINO, Juan C.
 MARTINEZ PASS de CRESTO, Laura
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel A.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo
 MERA, Mario R.

MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo R.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 OCHOA, Raúl E.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PINCHETTI, Delia N.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 URQUÍA, Roberto D.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALIA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

ARANCIO, Lylia M.
 FALCÓ, Luis
 JENEFES, Guillermo R.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 MARÍN, Rubén H.
 MARTINAZZO, Luis E.
 MÜLLER, Mabel H.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PAZ, Elba A.
 SAPAG, Luz M.

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

MARTÍN, Floriania N.

EN COMISION:

LATORRE, Roxana I.

SUMARIO

1. **Izamiento** de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 2.)
2. **Lectura y aprobación** del **plan de labor**. (Página 3.)
3. **Consideración** sobre **tablas** de los **proyectos** de **ley** modificando el **Código Penal** (S.-40 y 793/04). Se aprueba. (Pág. 3.)
4. **Inserciones**. (Pág. 91.)
5. **Mociones de preferencia**. (Pág. 91.)
6. **Apéndice**.
 - I. **Votaciones**. (Pág. 92.)
 - II. **Sanciones del Honorable Senado**. (Pág. 105.)

III. **Inserciones**. (Pág. 106.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 16 del miércoles 7 de abril de 2004:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

Invito al señor senador por Misiones don Federico Ramón Puerta a izar la bandera nacional y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Puerta procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

PLANE DE LABOR

Sr. Presidente. – Se encuentra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de la fecha.

Por Secretaría se dará lectura.

–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 7-04-04

Tratamiento sobre tablas acordados:

Dictamen en los proyectos de ley del senador Pichetto y de los senadores Bussi y Pinchetti modificando los artículos 13 y 14 del Código Penal. (S.-40/04 y 793/04.)

Dictamen en los proyectos de ley del senador Pichetto y del senador Jeneffes y otros, sobre regulación de la venta de telefonía celular, penalización de la clonación de teléfonos y adulteración de tarjetas de telefonía. (S.-2.979/03 y 1.160/03.)

Dictamen en el proyecto de ley del senador Agúndez s/penalización del juego clandestino. (S.-2.894/03.)

Preferencias a solicitar:

Proyecto de comunicación de la senadora Lescano solicitando informes acerca del Patronato de Liberados de la Capital Federal. (S.-2.343/03.)

Proyecto de ley del senador Agúndez s/creación de tres juzgados nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal. (S.-828/04.)

Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

3

TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – Son tratamientos sobre tablas acordados.

En primer término estaba acordado el proyecto del senador Pichetto en el expediente S.-793/04, de modificación del artículo 14 del Código Penal sobre la libertad condicional.

En segundo lugar, los expedientes S.-2.979/03 y S.-1.160/03, que contienen proyectos de

ley de comercialización de servicios de comunicaciones móviles, o lo que se ha dado en denominar el tema de telefonía celular.

Y el otro es el dictamen recaído en el expediente S.-2.894/03, del senador Agúndez, sobre juego clandestino, cuyo dictamen de comisión también obra aquí.

Esto es lo que hay que habilitar sobre tablas.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

–La votación resulta afirmativa.

–El texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código Penal, el que quedará redactado como sigue:

Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá a los condenados por homicidio agravado (artículo 80); lesiones gravísimas agravadas (artículo 92); violación seguida de muerte (artículo 124); robo agravado (artículos 165, 166 y 167); secuestro extorsivo (artículo 170); incendio y otros estragos dolosos (artículos 186, 187, 188 y 189 bis); delitos contra la seguridad de los medios de transporte (artículo 190), y por envenenamiento y adulteración de aguas potables, alimentos y/o medicinas (artículos 200, 201 y 202).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto es reproducción de mi iniciativa S.-2.238/02, y ha sido desglosado en siete iniciativas diferentes, para facilitar su tratamiento.

En consecuencia, por su actualidad, y por ser comunes a todas las propuestas, paso a reproducir los fundamentos de dicha iniciativa, los que resultan por demás sobreabundantes frente a los hechos públicos y notorios que los argentinos venimos padeciendo en materia de inseguridad:

“Nos encontramos frente a una dramática situación de inseguridad, que nos compele a modificar determinados institutos y normas penales, en bien de la comunidad.

“Institutos y normas penales que fueron modificados a partir de 1984, estableciéndose la tendencia a disminuir el efectivo cumplimiento de la pena, en función de la búsqueda de soluciones resocia-

lizadoras, que hoy, a la distancia advertimos, no han sido alcanzadas.

"En ese contexto, el entonces oficialismo también reconoció la necesidad de modificar las normas de procedimiento penal para 'alivianar' la situación carcelaria, modificando también los institutos de la condena condicional, la excarcelación y el régimen de reincidencia, creando un esquema penal absolutamente flexibilizado, un verdadero 'colador', por donde se escapa la vida de los argentinos.

"Aquellos sistemas correctivos en auge en países desarrollados, a los que hicimos referencia, han sido imposibles de aplicar en nuestro país, tal como lo demuestran las circunstancias, por problemas de infraestructura, de personal especializado y, en definitiva, por la falta de una política criminal adecuada, que hubiere garantizado a quienes delinquen una futura reinserción social, y que hubiere protegido a la comunidad en su conjunto, frente a posibles nuevos embates de la delincuencia.

"La realidad de este momento, teñida de actos de crueldad impensable, asesinatos, secuestros extorsivos, ultrajes de toda clase y un vandalismo a ultranza, hace que debamos variar el temperamento, y que nos encaminemos a lograr que el peso de la violencia no recaiga sobre la sociedad, evitando que el ciudadano común tienda a defenderse por mano propia, ante un Estado inoperante.

"Más aún, cuando la sociedad argentina está dando sobrado ejemplo de cordura frente a tanta violencia, al evitar el ciudadano, salvo contadísimos casos, esa defensa por mano propia, y al seguir depositando su confianza en las autoridades para la solución de este tema, que ya se ha convertido en una cuestión de Estado.

"El actual esquema de nuestra normativa penal no nos permite anticiparnos a la violencia.

"Es más, nos inserta en ella.

"Frente a este panorama, y como ya he expresado otras veces, debemos poner especial énfasis en conjugar los intereses de todos los actores: el bien de la comunidad, que necesita de políticas activas en materia de seguridad; las garantías de procesados y condenados, quienes no deben sufrir cercoamientos indebidos en su libertad y quienes poseen el deber y el derecho a permanecer en institutos carcelarios adecuados, con fines de reeducación social, no lanzándolos nuevamente a las calles sin elementos que les permitan hacer frente a su situación y, finalmente, la probidad de la Justicia, en donde nuestros magistrados puedan contar con las mejores alternativas para hacer frente a la lucha contra el delito, dejando de conducirse con laxitud.

"Tenemos un serio problema carcelario, producto de la escasa política carcelaria que se ha venido implementando, con fundamento, algunas veces, en un garantismo mal entendido, no importa a qué costo para la sociedad, y, principalmente, en la confu-

sión ideológica que el problema de la delincuencia común, en nuestro país, trae aparejada.

"Sabemos que en toda comunidad, lo antijurídico depende del criterio de libertad individual o de defensa social que prime en su legislación. Es la sociedad en su conjunto, la que dice qué individuos y qué conductas son aceptadas como normales, y cuáles no lo son.

"Y hoy, los argentinos reclaman y exigen una solución al problema de la inseguridad, sin detenerse en el debate ideológico y anacrónico que tiñera nuestras ideas, sobre todo desde el regreso a la democracia.

"Ideología de por medio, no hemos sabido situarnos frente al problema, incurriendo en el error de llevar a la práctica esa idea que expresa que los delincuentes sólo son producto de esa visión parcializada de la realidad que atribuye toda la responsabilidad a la sociedad en la formación de los mismos, y en donde todos somos víctimas, incluidos los victimarios, no existiendo penas ni procedimientos que se atrevan a hacer frente al accionar delictivo. El honesto no se diferencia del corrupto; es más, el honesto debe pagar con su intranquilidad, y hasta con su vida, el hecho de no haber sabido adaptarse a esta postura de algunos sectores que justifican el delito, y en función de la cual todos podemos delinquir, total, en definitiva, vamos a ser comprendidos, apoyados y hasta lanzados a la fama, a través de los medios de comunicación, principalmente, de la televisión.

"Parte de nuestra sociedad actual, enmarcada en un quiebre de los valores tradicionales, lleva como estandarte la falta de límites éticos.

"Pero ello debe servirnos de motivo suficiente y no de justificativo, a la hora de poner en la balanza cuál es el bien jurídico protegido que no debe conculcarse y cuál es la conducta que debe reprocharse, con miras a salvaguardar los derechos de las víctimas y de la sociedad toda.

"Creo que hemos abusado del concepto de la marginalidad.

"Cuando un delincuente es apresado y llevado ante la Justicia en el actual sistema, se pone en marcha una maquinaria judicial donde se juzga al delito, como obrar antijurídico en sí mismo: todavía estamos analizando si delinquir es bueno o es malo, olvidándonos del autor material del hecho, que arrastra consigo elementos de peligrosidad en su accionar, y/o que puede contar con una personalidad altamente peligrosa, escondida tras el estigma 'pobreza = delincuencia', que todo lo justifica.

"Esos criterios de peligrosidad tienen que estar incluidos tanto en normas penales de fondo como en los códigos de procedimiento, pues de lo contrario, la actividad legislativa nunca aceptará la realidad imperante y será sólo un reflejo de una situación ideal del legislador.

"Todos quisiéramos vivir en una sociedad sin delito.

"Pero lo concreto es que existe, y a niveles que nos desbordan.

"En esa inteligencia, propongo la presente reforma, en donde nos retrotraemos a los criterios tradicionales de la reincidencia y de la condena de ejecución condicional; se modifica el criterio para gozar de la libertad condicional frente a la comisión de específicos delitos, y se modifica el régimen de salidas transitorias y semilibertad previsto en nuestra normativa sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, dejándose de lado el criterio de la buena conducta dentro del penal, que puede llevar a errores en la concesión de esos beneficios, y si poniéndose el acento en el concepto de que goce el interno, y en la necesidad de que no represente peligro para la sociedad ni para sí mismo, entre otras cosas.

"Todas estas medidas, tomadas de manera conjunta, y junto a otras que he propuesto en el resto de mis iniciativas, en especial, aquellas que hacen a las armas, a la utilización de menores inimputables para delinquir y a la acumulación de las penas, harán que en la Argentina las condenas sean, en los casos que así sea necesario y de una vez por todas, de efectivo cumplimiento.

"Esta reforma de la legislación penal hará que en nuestro país delinquir ya no sea barato, y que podamos diferenciar a quien transgrede esa legislación penal llevado de la mano de la indigencia o de otras situaciones justificantes; del profesional del delito, amparado en la presunta pobreza.

"De qué otra forma, si no, se logra hacer justicia.

"Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción de la presente iniciativa."

Miguel A. Pichetto.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° - La venta de telefonía celular móvil podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas licenciatarias autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad de revendedores y mayoristas que no tengan ese carácter.

Art. 2° - Dichas empresas comercializarán los equipos celulares objeto de su actividad, dejando expresa constancia del número de documento del adquirente y del titular de la línea, en el caso de tratarse de personas diferentes, y de todos los demás datos personales que permitan una clara identificación de los mismos, incluyendo certificado de domicilio. No podrán figurar a nombre de personas jurídicas ni de organismos del Estado. Estas previsiones se cumplirán aun en aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo para su uso con créditos provenientes de tarjetas para telefonía celular.

Art. 3° - Queda prohibida, en el ámbito del mercado interno, la venta, la importación y la exportación temporaria de telefonía celular móvil usada o reciclada, quedando autorizado el Poder Ejecutivo nacional para establecer -por vía de reglamentación- las excepciones al presente artículo, así como las condiciones bajo las que se llevarán adelante, con fundamento, únicamente, en la satisfacción de necesidades básicas e impostergables de la población. Dicha reglamentación no podrá eximir del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente.

Art. 4° - La transferencia de equipos celulares móviles se hará en las condiciones establecidas en dicho artículo 2°.

Art. 5° - La venta de tarjetas de telefonía destinada al uso de equipos celulares móviles, se hará sólo a través de las bocas de expendio autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, y siempre bajo constancia del nombre y número de documento del adquirente.

Art. 6° - Modifícase el artículo 45 del Código Penal, quedando redactado como sigue:

Artículo 45: Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.

Se aplicarán asimismo las penas previstas para los partícipes a quienes, en forma injustificada, o debiendo sospechar, por las circunstancias del caso, acerca de su aptitud para contribuir a un resultado dañoso, introdujeren en el país, portaren, comercializaren, volcaren al mercado interno, acopiaren, proveyeren, suministraren o conservaren en su poder, bienes, materiales, instrumentos o cualquier otra clase de elementos conocida o públicamente destinados o utilizados para cometer alguno de los delitos previstos en este código, posibilitando o facilitando su ejecución, aunque no tomasen parte en la ejecución del hecho.

Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Tanto el Poder Ejecutivo nacional como este Congreso de la Nación se han esforzado por encontrar una urgente solución normativa al problema de la inseguridad y más específicamente, al tema de los secuestros extorsivos.

Resultado de ese accionar conjunto, han sido las leyes 25.742, 25.760, 25.764 y 25.765 que, respecti-

vamente y con fundamento en el denominado Informe Arslanian, han modificado el Código Penal, en lo que hace a la privación ilegítima de la libertad y al secuestro extorsivo; el Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto atribuye más facultades a los integrantes del Ministerio Público; han creado el Programa Nacional de Protección a Testigos e Inputados de Secuestro Extorsivo, y finalmente, han posibilitado un fondo de recompensas, destinado a obtener la mayor cantidad de información para luchar contra este delito.

Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, vemos cómo, en la práctica, el secuestro extorsivo se sigue llevando adelante, facilitado por una serie de conductas que, si bien no forman parte de la ejecución del hecho, o de su posterior encubrimiento, asumen el carácter de conductas predelictuales que posibilitan el resultado.

A través de mi iniciativa S.-2.169, reproducción del proyecto de mi autoría 2.867-D.-99, vengo insistiendo en la necesidad de tipificar dicha conducta predelictual, destinada a la prevención de hechos previos, aunque de menor entidad delictiva, pero que de todas formas contribuye al resultado final, aunque quien los lleve adelante no tome parte en la ejecución del hecho o no preste al autor su colaboración o auxilio en el hecho puntual.

En esas dos oportunidades lo he hecho acotadamente, es decir, he circunscripto mi iniciativa a los delitos contra la propiedad, refiriéndome a la introducción, portación o conservación, en forma injustificada, de materiales o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguno de los delitos previstos en ese título.

No obstante, advierto la necesidad de extender estas previsiones a todos los delitos del Código Penal, en la medida que, por ejemplo, el delito que está causando mayores estragos sobre la población, ello es, el aludido secuestro extorsivo —que atenta contra la libertad de las personas— se vale de una serie de instrumentos o elementos, que circulan no sólo de manera ilegal por el mercado interno, sino que permiten, de manera legal, su utilización como elemento óptimo de colaboración para los delincuentes y para la perpetración del delito.

Me refiero a la telefonía celular móvil, la que es de toda necesidad para llevar adelante el delito de que se trata, en la medida que los delincuentes necesitan el contacto con los familiares de las víctimas para negociar su rescate, sin ser localizados.

Más específicamente todavía, hago alusión al tema de los bolseros y a ciertas condiciones de comercialización de las empresas, que contribuyen en forma directa a la proliferación y recrudecimiento del secuestro extorsivo.

Legalmente, la cantidad de celulares a nombre de una persona puede ser ilimitada, estando permitida su activación a nombre de otro, e inclusive con el sistema de tarjetas.

Este último sistema facilita aún más el delito, en la medida que no se emiten facturas a su respecto.

Se suma a ello la posibilidad de modificar el número de serie del aparato cuando éste es de origen ilícito, hallándonos entonces ante un panorama muy difícil de desarticular.

Estas circunstancias son de público conocimiento. También es de público y notorio el aprovechamiento que la delincuencia hace de las mismas, no sólo en cuanto al delito al que nos referimos, sino respecto de cualquier otra actividad ilícita en que pueda estar incurso quien se encuentra al margen de la ley.

Hay que agregar que, conforme la legislación vigente, para ser partícipe de un delito hay que producir el resultado o contribuir a su producción.

En efecto, refiere Sebastián Soler (*Derecho penal argentino*, tomo II, páginas 275 y ss., TEA 1989), que participar es una forma de actuar. El partícipe contribuye efectivamente a la producción del hecho, haciéndose responsable de ese hecho. Es partícipe quien no puede ser calificado como autor.

Para ser partícipe hace falta una obra en común; como dice Soler, una “comunidad” de acción, que sitúe al partícipe como la parte de un todo, es decir, del delito, y un “conocimiento” de la propia acción como parte de ese todo.

Así planteadas las cosas, es muy difícil enrostrar su conducta a quien, no participando en un hecho específico, comercializa o provee; por ejemplo, celulares, sin adoptar mínimos recaudos acerca de su titularidad, o los posee, sin ser una empresa de telefonía, en condiciones o en un número tal que demuestran que nunca pueden ser para uso personal, ni tampoco se justifican en función de su oficio o profesión.

Esas personas, como mínimo, “tienen” que estar ante la sospecha de que la circulación de los mismos, en las condiciones de su posesión, puede contribuir a la comisión de delitos.

Propongo entonces, una serie de reglas básicas, para evitar que la utilización y circulación de celulares contribuya a alentar la comisión de ilícitos, cualquiera que sean, pero en especial, el secuestro extorsivo: en primer lugar, corresponderá su comercialización sólo a través de quienes estén autorizados para ello, evitando la actividad de revendedores y mayoristas —bolseros— no dedicados al mercado de las comunicaciones; en segundo lugar, las empresas deberán identificar al usuario o titular del celular de que se trate, en forma acabada, debiéndose realizar la venta de las tarjetas de telefonía destinadas a dichos equipos, también en forma individualizada.

Resulta asimismo atinada, entre otras cosas, la prohibición de venta de celulares usados o reciclados, como su importación y exportación temporaria, en la medida que dichas actividades facilitan la concreción de un mercado en donde insertar la telefo-

nía celular producto de ilícitos, y que son nuevamente utilizados en otros delitos, habida cuenta de su virtual blanqueo.

También propongo que las reglas de la participación criminal se apliquen a quienes incurran en aquellas conductas predelictuales que signifiquen la facilitación para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal, a través de una serie de conductas que sirven para abastecer a la delincuencia de los instrumentos necesarios para continuar y perpetuarse en el delito.

En definitiva, estas personas no son parte de una asociación ilícita, y en tal sentido, no matan, no roban, no lesionan, no falsifican, y en definitiva, tampoco secuestran, y sólo pueden ser detenidos en "in fraganti" delito, pero su conducta permite que todos esos hechos se lleven a cabo, pues por ejemplo, el sólo hecho de hacer circular ganzúas, armas y celulares en determinadas circunstancias, entre otros elementos, hace que no puedan estar en desconocimiento respecto del poder ofensivo de los mismos, y en tal sentido, debe analizarse su conducta a la par de quien lleva adelante el hecho punible, pues también ha contribuido al resultado, y sabe, por los actuales índices de inseguridad, que así lo ha hecho.

Por todo lo expuesto, solicito la sanción de este proyecto.

Miguel A. Pichetto.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1° - Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico de un terminal celular, de modo que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del terminal celular o a terceros.

Art. 2° - Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de una tarjeta de telefonía, o accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciatario de telecomunicaciones.

Art. 3° - Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que, a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiriere por cualquier medio o utilizare terminales celulares o tarjetas de telefonía.

Art. 4° - Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que:

1. Cometa alguno de los delitos previstos en la presente ley con ánimo de lucro.
2. Cometa alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes como medio para perpetrar otro delito.

Art. 5° - Cuando los delitos previstos en los artículos precedentes sean cometidos por dependientes de empresas licenciatarias que prestan servicios de telecomunicaciones, o por quienes, atento al desempeño de sus funciones, posean acceso a las facilidades técnicas de aquellas, las penas mínimas y máximas previstas en cada caso serán aumentadas en un doble.

Art. 6° - Cuando los delitos previstos en los artículos precedentes sean cometidos por profesionales de la materia abusando de su ciencia o arte, a las penas establecidas en cada caso se sumará inhabilitación especial por el doble de tiempo del de la condena.

Art. 7° - Si el culpable fuese funcionario público y hubiere cometido el hecho en ejercicio o en ocasión de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Guillermo R. Jenéfes. - Miguel A. Pichetto.

- Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La telefonía móvil celular se ha convertido en los últimos tiempos en un medio de comunicación masivo, de inestimable valor en ámbitos públicos y privados.

Según los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) al INDEC, en la República Argentina 6.708.000 personas utilizan el servicio de telefonía móvil celular, siendo uno de los países en donde con mayor fuerza se ha difundido el uso de este medio de comunicación.

En efecto, en la República Argentina, sobre el total de suscriptores de abonados de telefonía, un 44,8 % han adoptado la tecnología celular.

Sin perjuicio de ello, la expansión de la telefonía móvil celular como un medio masivo de comunicación ha dado espacio a la proliferación de maniobras marginales que ponen en serio riesgo la seguridad de este medio, ocasionando evidentes perjuicios a los millones de usuarios que utilizan el servicio.

En efecto, paralelamente a la difusión de esta forma de comunicación, se han desarrollado cada vez más sofisticadas técnicas, mediante las cuales es posible la alteración, reemplazo o duplicación de un terminal celular, posibilitando la utilización del servicio clandestinamente, obstaculizando el normal uso del mismo.

Diversas tecnologías delictivas

Uno de estos procedimientos ha sido denominado vulgarmente como "clonación de teléfonos", siendo uno de los mayores riesgos -dada la magnitud que ha alcanzado esta práctica- que amenaza

el normal desarrollo de este medio de comunicación, hoy en pleno auge.

Mediante la clonación de terminales celulares, es posible la utilización del servicio de telefonía móvil sin contraprestación alguna, afectando en primer término al titular del equipo involucrado.

En igual medida, a través de la clonación es factible el acceso furtivo a las comunicaciones telefónicas entabladas por el usuario, al duplicarse el número de línea que identifica al equipo de telefonía.

Tal posibilidad implica per se un serio riesgo a la privacidad de las comunicaciones telefónicas entabladas por esta vía, al interceptarse el contenido audible de las mismas a través de los medios comisivos típicos previstos en la legislación proyectada, que por el presente se pretenden prohibir.

La interceptación de comunicaciones a través de la duplicación de un número de línea, supone un serio peligro teniendo en consideración que en la actualidad el servicio de radiocomunicación móvil celular es utilizado, no sólo con fines particulares y empresariales, sino también como una herramienta irremplazable en la función pública, al ser un medio del que se vale tanto el Poder Judicial y su auxiliar la policía, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como también las demás reparticiones públicas para impartir ordenes y directivas.

Por otra parte, la alteración o reemplazo de los números de serie (electrónicos o mecánicos) que identifican a cada terminal celular, son acciones que fomentan el tráfico clandestino de estos equipos, perjudicando a los propietarios de los mismos.

Resulta importante considerar, asimismo, que los grupos de criminalidad organizada tienen a su alcance, a través de la "clonación de teléfonos", mecanismos impunes para proveerse de equipos de telecomunicaciones que utilizan, ilícitamente, el mismo servicio asignado a un usuario legítimo, dificultando la persecución de tales organizaciones al resultar prácticamente imposible identificar —merced a la alteración o reemplazo de los números de línea y/o serie— los terminales celulares de los que se valen para establecer sus comunicaciones con fines ilícitos.

De igual modo, a través de la utilización ilegítima de terminales celulares se afecta al tesoro público, que deja de percibir el correspondiente impuesto, y fundamentalmente, la confianza de los usuarios que esperan tener un servicio de telecomunicaciones al que tienen derecho y que satisfaga sus necesidades.

Paralelamente, desde el año 1997 se difundió en gran escala el uso de tarjetas de telefonía como un medio de abaratar los costos en materia de comunicación, a través de la utilización de este soporte magnético como medio de pago.

La generalización de esta forma de pago es hoy en día muy significativa, siendo utilizado por el 70 % de los usuarios, aproximadamente.

Infortunadamente, el vertiginoso crecimiento de este sistema ha sido acompañado por el también súbito desarrollo de técnicas marginales mediante las cuales es factible adulterar el contenido del soporte magnético, accediendo ilegítimamente al crédito contenido en la tarjeta de telefonía (u otro medio de pago alternativo) en perjuicio de su adquirente.

La perpetración de este tipo de maniobras supone en la práctica un importante perjuicio para los usuarios, que ven diluido el crédito contenido en la tarjeta en manos de sujetos que obtienen un beneficio económico sin contraprestación de ninguna especie.

En igual medida, el desarrollo de estas conductas supone un obstáculo para el progreso de esta forma alternativa de pago, utilizada cada vez con mayor fuerza por importantes sectores de la población que buscan abaratar sus costos a través de la utilización de este nuevo medio pago.

La proliferación de tales hechos —al amparo del vacío legal imperante en la materia— supone un serio peligro para la seguridad de los usuarios del servicio, que se ven desprotegidos ante maniobras de esta naturaleza.

Asimismo, la impunidad de tales maniobras fomenta el desarrollo, en nuestro ámbito, de grupos u organizaciones que se dedican en forma local e internacional a cometer esta clase de conductas.

Tal realidad impone que, desde el punto de vista legislativo, se adopten medidas de política criminal enderezadas a prevenir la comisión de ilícitos de esta naturaleza, que como ya quedó expresado, afectan fundamentalmente a los usuarios del servicio.

Actualización normativa

En este orden de cosas, las especiales características que rodean a esta clase de conductas hace aconsejable la sanción de una legislación especial que de manera específica individualice, con el grado de certeza que exige toda norma penal, las diversas acciones que comprenden el fenómeno de "clonación de teléfonos" y adulteración de tarjetas de telefonía.

En efecto, las particulares condiciones que rodean a este tipo de maniobras no siempre quedan atrapadas en las figuras legales previstas en el Código Penal, que tipifican las diversas defraudaciones e interrupciones al servicio público de comunicación.

En particular, la experiencia pone en evidencia que las maniobras de clonación no reúnen en la gran mayoría de los casos los especiales elementos típicos contenidos en las defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y siguientes del Código Penal, lo que amerita la tipificación de estas conductas en forma autónoma a fin de que no queden impunes, a la luz de la legislación penal actualmente vigente.

Sin perjuicio de ello, la subsunción de conductas de esta naturaleza en las figuras penales mencionadas, conlleva necesariamente —en la mejor de las hipótesis— un esfuerzo interpretativo por parte de los jueces y fiscales que intervienen en los procesos judiciales, que la legislación especial cuya sanción se impulsa vendría a simplificar.

Todas estas cuestiones autorizan que el Poder Legislativo tipifique como delitos penales las maniobras de clonación y adulteración de tarjetas de telefonía, sancionando un marco normativo que posibilite la prevención de hechos ilícitos de esta naturaleza que afectan a los millones de usuarios que diariamente utilizan el servicio de telefonía móvil celular.

La sanción de la legislación proyectada, por otra parte, posicionará a la República Argentina en el concierto de naciones que en la actualidad han proyectado la tipificación como delitos penales de esta clase de conductas (vgr. Chile, Costa Rica, etcétera) siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos (CITEL) en tal sentido.

En efecto, las resoluciones 127, 128 y 148 del citado organismo internacional establecen propuestas para la creación de un sistema normalizado antifraude en los sistemas de comunicaciones convergentes (fijo móvil-IP); intercambio de números de serial electrónico de terminales móviles declarados robados/perdidos y la tipificación del delito de clonación de terminales móviles.

El bien jurídico protegido

De un repaso de los antecedentes fácticos que rodean al fenómeno de la clonación de teléfonos y la adulteración de tarjetas de telefonía, se advierte que las maniobras de esta naturaleza ponen en peligro y lesionan la seguridad y privacidad que necesariamente debe rodear al servicio de comunicación a través de terminales celulares y tarjetas de telefonía.

Así, el bien jurídico que subyace a maniobras que impliquen la alteración, reemplazo o duplicación de un número de línea y/o de serie de una terminal celular, está constituido fundamentalmente por la seguridad y correcto funcionamiento del servicio de telefonía móvil celular, que con conductas como las precisadas se ponen en peligro.

Amén de ello, como ya quedó expresado al inicio de la presente exposición, la duplicación de números de línea lleva insita la posibilidad de que el autor de tal acción esté en condiciones de interceptar clandestinamente el contenido de las comunicaciones telefónicas entabladas por el titular y usuario del terminal celular afectado.

Tal circunstancia supone un serio riesgo para la privacidad de las comunicaciones telefónicas man-

tenidas vía celular, cuyo agravamiento pondría en grave riesgo la solvencia de este medio de comunicación, resultando imprescindible la sanción de una legislación que prevea en forma particular esta clase de conductas, hoy impunes.

Otro tanto ocurre con la conducta de quien alterar, reemplazare o duplicare cualquier componente de una tarjeta de telefonía, y/o acceda a los códigos informáticos de habilitación de créditos con el objeto de utilizar el crédito emanado por un licenciario de telecomunicaciones, puesto que tal conducta afecta no sólo al usuario (que adquirió la tarjeta), sino también pone en riesgo el funcionamiento de este medio de pago alternativo, que hoy en día se encuentra en pleno auge dada la situación económica del país.

En este último caso, nos encontraríamos ante conductas lesivas de la seguridad de las comunicaciones establecidas por medio del uso de tarjetas de telefonía, así como también del patrimonio del usuario que adquirió tal soporte magnético como medio para realizar comunicaciones telefónicas a menor costo.

Los tipos penales

En este sentido, y siguiendo la técnica legislativa que impregna la normativa penal vigente en la República Argentina, así como también los lineamientos de política criminal que ha seguido el legislador en el último siglo, los tipos penales proyectados describen de manera clara e inequívoca las diversas conductas en virtud de las cuales es posible la clonación de teléfonos y adulteración de tarjetas de telefonía.

Clonación de teléfonos celulares

En el artículo 1° del proyecto se prevé la conducta de quien “alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónica, o de serie mecánico de un terminal celular, de modo que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del terminal celular o a terceros”.

En este sentido, las conductas previstas en la norma proyectada constituyen el núcleo de la acción, es decir, el verbo principal que expresa o indica la conducta merecedora de sanción descriptiva de un actuar humano, y cuyo despliegue se pretende prohibir en el presente proyecto.

Así, la conducta “alterar”, primer supuesto previsto en el proyecto, consiste en cambiar la esencia o forma de una cosa.

Por su parte, el verbo reemplazar hace referencia a sustituir una cosa por otra, poner en lugar de una cosa otra que haga sus veces.

En tercer término, el verbo duplicar significa hacer doble una cosa. Multiplicar por dos una canti-

dad. Repetir exactamente una cosa, hacer una copia de ella.

Finalmente, la redacción legal del tipo contiene la expresión "o de cualquier modo modificaré", comprendiendo de esta manera cualquier otra acción o conducta con entidad para lesionar el bien jurídico, que no esté expresamente prevista en la ley.

Tales son las acciones que posibilitan la clonación de teléfonos celulares, cuya previsión legal deviene imprescindible para la prevención de este nocivo fenómeno cuya propagación se pretende coartar con la presente legislación.

Asimismo, la norma contiene en su redacción lo que la doctrina más autorizada en materia penal define como "elementos descriptivos", que son aquellos que integran el tipo objetivo y el autor puede conocer a través de sus sentidos. Como afirma el profesor Bacigalupo, "puede verlos, tocarlos, oírlos, etcétera".

En la norma aquí analizada, los elementos descriptivos son los conceptos "número de línea", "número de serie electrónico" y "número de serie mecánico", que abarcan el número telefónico asignado a la terminal celular, el número de serie único que lo identifica y que se encuentra en el *software* de éste, vinculándolo con el sistema celular a los efectos de que pueda emitir y recibir comunicaciones, y el número de serie impreso en origen en la terminal celular.

Igual categoría reviste la expresión "terminal celular", haciendo referencia a los equipos aptos para ser utilizados a fin de establecer una comunicación vía celular.

Por último, el proyecto exige que la conducta desplegada ocasione un perjuicio al titular o usuario del terminal celular y/o terceros, con la cual la norma proyectada se inscribe dentro de los llamados "delitos de resultado", es decir, aquellos que prevén la lesión de un determinado objeto como presupuesto para la aplicación de la pena.

Como afirma Fontán Balestra, por resultado la dogmática penal entiende "toda mutación en el mundo exterior, producida por el movimiento corporal".

La verificación de un perjuicio como consecuencia de la alteración, reemplazo o duplicación de un terminal, constituye esa mutación o transformación de la realidad que justifica la imposición de las penalidades previstas en la legislación.

En igual medida, maniobras de esta clase poseen entidad para generar, en la gran mayoría de los casos, ostensibles perjuicios económicos al titular del terminal celular clonado (al realizarse consumos marginalmente) así como también al prestatario del servicio, afectaciones patrimoniales que quedan comprendidas dentro del concepto amplio de "perjuicio" al que hace referencia la norma proyectada.

Los distintos elementos que integran el tipo objetivo de la normativa analizada, ya sean las diver-

sas acciones incriminadas, así como también los elementos descriptivos que definen la conducta ilícita, delimitan acabadamente el accionar que se pretende sancionar, honrando el principio de legalidad que debe inspirar a toda norma de naturaleza penal.

En efecto, las conductas allí descritas reúnen las prerrogativas de *lex certa* y *lex stricta* al definir clara, concreta, precisa e inequívocamente las conductas que generan la aplicación de una pena.

La precisión con que está redactada la norma, se inscribe dentro del marco establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual "para que una norma armonice con el principio de legalidad es necesario que, además de describir la conducta reprochable, establezca la naturaleza y límites de la pena, de modo tal que al momento de cometer la infracción su eventual autor esté en condiciones de representarse en términos concretos la sanción con que se lo amenaza" CSJN Contobel S.A. del 18/9/92)...

Con respecto a la autoría, el ilícito proyectado puede categorizarse como una norma penal de carácter general, pues no contiene en su redacción ninguna referencia al autor. En este sentido, y dada la naturaleza de las conductas incriminadas, parece aconsejable recurrir a una fórmula neutra según la cual reunirá las condiciones de autor penalmente responsable todo sujeto que realice la acción conminada con pena.

Adulteración de tarjetas de telefonía

En el artículo 2º del proyecto de ley se prevé la incriminación de la persona que "alterar, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de una tarjeta de telefonía, o accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciario de telecomunicaciones".

La norma en análisis prevé distintas acciones que integran el tipo objetivo, constituidas por los verbos alterar, reemplazar, duplicar, y/o acceder.

Como se ve, las acciones descritas en la ley son las mismas que las previstas en el artículo 1º del proyecto, a excepción del verbo acceder, que puede conceptualizarse como tener acceso, y paso o entrada a un lugar.

Asimismo, la expresión "accediere por cualquier medio" abarca las conductas en virtud de las cuales se acceda al crédito emanado por un licenciario de telecomunicaciones que no esté documentado en una tarjeta de telefonía propiamente dicha, a través de cualquier otro medio alternativo (vgr. vía Internet, telefónica, etcétera).

En igual medida, la figura legal en análisis contiene en su redacción diversos elementos descriptivos que integran la infracción, y delimitan el objeto

sobre el que recae la acción ilícita. Estos son cualquier componente de una tarjeta de telefonía, los códigos informáticos de habilitación de créditos y el crédito emanado por un licenciatario de telecomunicaciones.

Finalmente, se prevé lo que la doctrina más autorizada denomina especiales elementos subjetivos de la autoría, que exigen que el autor haya realizado la acción con una determinada intención, una determinada motivación o un determinado impulso.

En el caso de la norma proyectada, se prevé que la alteración, reemplazo, duplicación o acceso a una tarjeta de telefonía, tenga por finalidad aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado y por un licenciatario de telecomunicaciones.

La presencia de tal elemento en el tipo contribuye a delimitar la finalidad de la conducta, definiendo el contenido del ilícito al prescribir una determinada motivación que en caso de concurrir justifica la imposición de una pena privativa de la libertad en cabeza del sujeto activo.

Adquisición u utilización de terminales móviles o tarjetas de telefonía de origen espurio.

Sentada la conveniencia de sancionar penalmente las conductas descritas precedentemente, y a fin de abarcar cada una de las maniobras que se relacionan con la clonación de teléfonos y la adulteración de tarjetas de telefonía, la legislación proyectada se ocupa de tratar un inescindible eslabón de la cadena, es decir, la conducta de quien adquiere y utiliza terminales móviles y tarjetas de telefonía de origen espurio, a sabiendas de su ilegítima procedencia.

La incriminación de estas conductas posibilitará desalentar la práctica de las maniobras prohibidas por la ley, al sancionarse penalmente a las personas que se valen de equipos de telefonía y tarjetas de origen ilegítimo.

En este sentido, la norma proyectada tiene por objeto no dejar impunes a aquellas personas que, no habiendo alterado, reemplazo o duplicado, usufructúan con equipos y tarjetas de telefonía en estas condiciones, beneficiándose ilegítimamente en detrimento de los usuarios y terceros.

La amplitud de la norma posibilitará sancionar, no sólo a quienes adquieran o utilicen terminales celulares y tarjetas de telefonía alteradas, reemplazadas o duplicadas, sino también a quienes se valgan de tales objetos que hallan sido hurtados (artículo 162 del Código Penal), robados (artículo 164 del Código Penal), perdidos (artículo 175 del Código Penal) u obtenidos mediante fraude (artículo 172 y siguientes del Código Penal).

Por lo demás, cabe destacar que la distinción no es puramente teórica, pues siendo los minutos de comunicación objetos inmateriales, la utilización ilegítima de los mismos a través de un celular o tarjeta obtenida por alguno de estos medios ilícitos, no

quedarían atrapados en las figuras penales mencionadas, pues las mismas tutelan la apropiación de cosas muebles.

Así, la sanción de esta norma posibilitará penar también a quienes utilicen el servicio de telefonía móvil a través de un terminal celular u tarjeta de telefonía hurtada, robada, perdida u obtenida mediante fraude, conductas de suma gravedad que de otra manera quedarían impunes, a la luz de la legislación actualmente vigente.

Desde el punto de vista técnico, el tipo penal contiene en su redacción lo que la doctrina denomina como "elemento normativo", en los cuales la figura se complementa con referencias a la ilegalidad o ilegitimidad del modo de actuar desplegado por el sujeto activo.

Este elemento está constituido por la necesidad de que la adquisición o utilización de terminales celulares o tarjetas de telefonía sea a sabiendas de su procedencia ilegítima, circunstancia que implica una valoración subjetiva por parte del autor.

Agravantes

Teniendo en consideración las conductas descritas a lo largo del presente, el proyecto de ley prevé diversas circunstancias fácticas cuya gravedad amerita que la legislación le brinde un tratamiento autónomo.

En este orden, se prevé como agravante la conducta de quien cometa alguno de los delitos previstos en la presente ley con ánimo de lucro.

Esta agravante tiene por objeto contemplar la conducta de las personas que se dediquen a comercializar terminales celulares y tarjetas de telefonía de origen espurio con ánimo de lucro, elemento este último que importa mayor peligrosidad al bien jurídico que se pretende tutelar en esta legislación especial.

El ánimo de lucro, elemento subjetivo del tipo incluido en la norma proyectada, implica una ultra intención que puede definirse como "el propósito de obtener un beneficio económico" extremo que torna más reprochable la alteración y duplicación de terminales celulares y tarjetas de telefonía, y justifican que el legislador le brinde un tratamiento autónomo penalizando con mayor rigor esta conducta.

Asimismo, se pretende legislar como agravante la conducta de quien cometa alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes como medio para perpetrar otro delito.

Mediante la presente previsión, se proyecta sancionar con mayor rigor a quienes desplieguen alguna de las acciones contempladas en la ley como medio para perpetrar otra conducta ilícita prevista en la legislación vigente.

Supóngase, al solo efecto ejemplificativo, la conducta de quien duplique un terminal celular como

medio para perpetrar una defraudación (simulando la procedencia de determinada llamada o recibiendo una destinada a un tercero); conducta que merece el agravamiento de las escalas penales al violentar paralelamente diversos bienes jurídicos.

Asimismo, y sin pretender abarcar en esta exposición cada una de las hipótesis posibles, debe repararse que la clonación de un teléfono celular puede resultar un medio idóneo para obtener información con el objeto de consumir un secuestro extorsivo accediendo a las comunicaciones de la eventual víctima; supuesto que autoriza el agravamiento de las escalas penales previstas para la figura base.

Participación de dependientes de licenciatarias o quienes tengan acceso a las facilidades técnicas de aquéllas.

Siguiendo una técnica legislativa y de política criminal tradicional en nuestro orden jurídico, se prevé como agravante la participación de aquellas personas que, por su ámbito y competencia funcional, se hallan en mejores condiciones de perpetrar las acciones prohibidas por la ley.

Tal es el caso de los dependientes de las licenciatarias de telecomunicaciones que prestan el servicio, o quienes, atento el desempeño de sus funciones, posean acceso a las facilidades técnicas de aquéllas.

Los conocimientos técnicos y facilidad de acceso a los medios materiales para la realización de maniobras de alteración, reemplazo y duplicación que poseen, ubican a los sujetos señalados en la norma en una posición en la cual se encuentran en mejores condiciones de lesionar el bien jurídico que se pretende tutelar, con lo cual es lógico que la sanción revista mayor gravedad.

Inhabilitaciones especiales

En el proyecto que por el presente se impulsa, se prevé que cuando los delitos previstos en los artículos precedentes sean cometidos por profesionales de la materia abusando de su ciencia o arte, a las penas establecidas en cada caso se sumará inhabilitación especial por el doble de tiempo de aquel determinado para su condena.

La norma en análisis prevé la pena conjunta de inhabilitación en cabeza de aquellas personas que cometen las acciones previstas en la ley abusando de su arte o profesión.

Carlos Creus sostiene que la inhabilitación se aplica "cuando el delito constituye por lo menos una violación de los deberes y generales de conducta que impone el empleo, cargo o profesión".

Núñez, por su parte, entiende que "esta clase de inhabilitación (refiriéndose a las especiales), en su esencia, tiene el carácter de una sanción de seguridad preventiva, pues se aplica para limitar la actividad del sujeto en el terreno en que cometió el delito".

En efecto, la alteración, reemplazo o duplicación de terminales celulares y tarjetas de telefonía, así como también la mayoría de las acciones previstas en la ley, muchas veces exige conocimientos técnicos específicos propios de especialistas en ingeniería, electrónica, telecomunicaciones, y profesiones afines.

Es por ello que la realización de las maniobras ilícitas previstas en la ley por parte de esta clase de profesionales, justifica que junto con la condena el autor sea inhabilitado para ejercer esa profesión, de la cual abusó, desviando sus conocimientos técnicos en procura de lesionar la seguridad de las comunicaciones telefónicas vía celular y ocasionar perjuicios a los usuarios del servicio.

Como afirma Fontán Balestra "Hoy se admite la conveniencia y eficacia de estas inhabilitaciones o privaciones de derechos, cuando se trata de prohibir el goce de algunas actividades a quien ha demostrado, por su conducta criminal, la falta de capacidad para el ejercicio de las funciones más importantes de la vida civil, como también cuando se lo priva de funciones y derechos específicos, que, utilizados abusivamente, permitieron la ejecución de un hecho punible".

Las penas

Como afirma la doctrina, la amenaza que acompaña a las normas penales es, en definitiva, la característica diferencial de las leyes represivas.

Ya en el siglo XIX Vont Liszt definía la pena como el mal que el juez infringe al delincuente, a causa del delito, para expresar la reprochabilidad social con respecto al acto y al autor.

Desde el punto de vista legislativo, tradicionalmente se la identifica como una amenaza contenida en la ley, que tiende a ejercer una coacción psíquica o psicológica sobre los componentes de la sociedad, con el propósito de mantener el orden jurídico establecido por el Estado. La función de la pena en este estadio legislativo se relaciona con criterios de prevención general.

En este sentido, la jurisprudencia de nuestros tribunales sentó el principio según el cual los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional consagran el derecho a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico tutelado.

La interpretación de tales normas constitucionales ha delineado el llamado "principio de proporcionalidad de la pena" (*poena debet commensurari delicto*), según el cual la sanción debe guardar proporcionalidad y equilibrio con la gravedad de la acción y el grado de afectación al bien jurídico tutelado en la ley, de manera tal que se verifique una concordancia entre la acción y reacción.

Asimismo, tal principio de rango constitucional supone la existencia de un equilibrio entre las pe-

nas establecidas en la ley, y las restantes sanciones previstas en el ordenamiento jurídico para conductas de similar orden.

De lo que se trata, pues, es de determinar con precisión que pena resulta adecuada para sancionar las conductas contempladas en el presente proyecto, cumpliendo los fines de prevención general y resultando al mismo tiempo proporcionales y equilibradas con el resto del ordenamiento jurídico vigente.

Pues bien, sobre esta base, y teniendo en especial consideración que los tipos penales receptados en el presente proyecto atienden a velar por el correcto funcionamiento del servicio de telefonía, así como también entrañan un fraude para los usuarios y eventuales terceros que se ven perjudicados por este tipo de maniobras, entendemos que la escala penal de las figuras principales debe ser análoga a la prevista para las defraudaciones legisladas en el artículo 172 y siguientes del Código Penal, es decir, debe oscilar entre un mes y seis años de prisión.

Por su parte, se prevé una pena entre un mes y cuatro años de prisión para la adquisición y utilización de equipos y tarjetas de procedencia ilegítima, escala penal cuya gravedad permitirá cumplir la función de prevención general que la legislación proyectada pretende, posibilitando desalentar la práctica de estas conductas que fomentan la comisión de las dos figuras principales.

Cabe destacar que la pena sugerida para esta infracción puede considerarse intermedia con la prevista para el delito de encubrimiento (artículo 277 del Código Penal), resultando por ende proporcional y armónica con el resto del ordenamiento jurídico vigente, reuniendo el requisito de razonabilidad que exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como parámetro para establecer la proporcionalidad de la sanción.

Con respecto a los agravantes, y toda vez que tales conductas suponen una mayor lesión al bien jurídico inmanente, se proyecta el aumento del mínimo legal, que alcanzaría los dos años de prisión, guardando equivalencia con las penas previstas para las defraudaciones agravadas tipificadas en el artículo 174 del Código Penal.

Por todas estas razones, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.

Definiciones

A los fines de la presente ley, serán considerados "terminal celular" los siguientes equipos: radios y teléfonos celulares inalámbricos, y cualquier otro instrumento, fijos o móviles, aptos para ser utilizados en:

i) Servicio radioeléctrico de concentración de enlaces.

ii) Servicio de telefonía fija local inalámbrica.

iii) Servicio de radiocomunicación móvil celular.

iv) Servicio de telefonía móvil.

v) Servicio de comunicaciones personales.

vi) Servicio de tercera generación y

vii) Cualquier otro servicio prestado o a prestar, que conlleve para el cliente, la utilización de un terminal celular.

Asimismo, y por tarjeta de telefonía, se entenderá todo crédito emanado por un licenciario de telecomunicaciones mediante el cual el usuario o adquirente pueda solventar el costo de las comunicaciones que establezca. La tarjeta de telefonía podrá ser pre o pospaga, virtual o física.

Guillermo R. Jenefes. - Miguel A. Pichetto.
- Jorge M. Capitanich.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º - A los efectos de la presente ley, se consideran juegos de azar, de apuestas mutuas y actividades conexas a todo tipo de actividad de carácter lúdico, que se realice a través de procedimientos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, informáticos o cualquier otro medio, cuyo resultado dependa en forma exclusiva o preponderante del alea, la suerte o la destreza, en la que se participe emitiendo apuestas en dinero o valores, con la finalidad de obtener premios en dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores.

Art. 2º - Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años, multa de cincuenta mil (50.000) a quinientos mil (500.000) pesos e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena:

1. El que organizare la explotación, venta o comercialización de los juegos de azar o de apuestas mutuas y/o actividades conexas, prohibidos expresamente por la legislación o por resoluciones emanadas de la autoridad administrativa competente en el territorio y en la materia; o sin la autorización legal o administrativa de la autoridad competente en el territorio y en la materia.

2. El que, estando autorizado para organizar la explotación o comercialización de juegos de azar o de apuestas mutuas y/o actividades conexas evadiera o desviare el correcto destino de las apuestas recibidas.

Art. 3º - En los casos contemplados en el artículo anterior serán decomisados todos los efectos y los fondos que se encontraren expuestos al juego, y los instrumentos, utensilios y aparatos empleados o destinados al servicio de los juegos de azar o de apuestas mutuas y/o las actividades conexas no autorizadas.

Art. 4º - Los fondos percibidos por el cobro de las multas y el producido de los bienes decomisa-

dos en los términos de la presente ley, serán puestos a disposición de la autoridad administrativa competente en el territorio y en la materia, para ser destinados de conformidad con lo establecido en la legislación local correspondiente.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge A. Agúndez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto que venimos a fundamentar tiene como fin la represión del juego ilegal.

Es de destacar que el presente consiste en una reproducción del dictamen elaborado por la ex Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, despachado con motivo de la presentación del expediente C.D.-148/01, publicado en el orden del día 1.549/01, que ha caducado durante este año parlamentario.

El autor del proyecto ha sido el entonces diputado Daniel Scioli, actual presidente de esta Honorable Cámara legislativa.

Como es sabido, el Estado nacional y las provincias mantienen bajo su tutela la actividad de los juegos de azar, de apuestas mutuas y actividades conexas. Si bien en los últimos tiempos se observa una tendencia a delegar en los privados la explotación de los juegos de azar, ello no debe significar una renuncia del Estado a controlar y regular los mismos.

También es de conocimiento general que los recursos que ingresan al Estado por medio de esta actividad son una valiosa contribución al erario público para engrosar los presupuestos, que permiten desarrollar efectivamente la acción pública en campos muy diversos, como la educación, la salud, el deporte, la vivienda, etcétera.

Ahora bien, tan antiguo como las actividades lúdicas legalizadas por el Estado y al servicio de las nobles causas arriba citadas en el párrafo precedente, emergen en forma paralela los juegos de azar clandestinos que no sólo no cumplen el destino altruista de los legales, sino que financian actividades ilícitas que contrarían el orden público.

Hoy, estos perjuicios que producen los juegos de azar ilegales se han profundizado notablemente, redundando en una proporción inversa que dicta que a mayor juego ilegal, disminuye el juego legal y, por lo tanto, redunda en inferiores ingresos al fisco y en menores acciones positivas de parte de las áreas del Estado que las llevan adelante.

Luego de esta breve introducción al tema y adentrándonos a la ciencia del derecho, como medio de pacificación de los conflictos suscitados en el ámbito de las relaciones sociales de los individuos de una comunidad civilizada, encontramos en nuestro

ordenamiento jurídico positivo diferentes normativas de carácter contravencional, que entienden en el tema.

Así, en el orden nacional, señalamos que el decreto ley 6.618/57 y sus modificatorias, por su competencia original, le han hecho perder a la norma en la actualidad su carácter operativo.

En el orden provincial y en el del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se han dictado diferentes preceptos contravencionales en los que se sancionan estas actividades ilegales.

Por otra parte, debemos destacar un hecho objetivo: tal es que la represión de los juegos ilegales no está obteniendo resultados positivos en su aplicación, ni logrando el fin querido por el legislador.

En consecuencia y a esta altura cabe preguntarse:

1. ¿Merecen las conductas comprendidas dentro del concepto de "juego ilegal", ser objeto de reproche en el derecho penal, para lo cual habrá de tipificarse las mismas como delitos?

2. De serlo: ¿los tipos penales deben contener todas las conductas descriptas en el proyecto?

3. Y finalmente: ¿es competencia de este Honorable Congreso legislar sobre la materia?

Sobre el primer interrogante respondemos afirmativamente, por cuanto el grado de lesividad sufrido por el bien jurídico tutelado, la fe pública, es lo suficientemente gravoso para habilitar el ingreso de dichas conductas dentro del derecho de excepción, que aduna una pena o sanción a quien en forma positiva cumple con la previsión de ley.

De esta manera, en el primer artículo del proyecto, hemos definido el concepto de juegos de azar, de apuestas mutuas y/o actividades conexas y en el segundo, el carácter de ilegalidad que impregna a los mismos, cuando son prohibidos expresamente por la legislación o por resoluciones emanadas de la autoridad administrativa competente en el territorio o en la materia, o sin la autorización legal o administrativa de la autoridad competente en el territorio y en la materia.

Sobre el segundo interrogante destacamos que en el proyecto se encuentran contenidas y descriptas las siguientes conductas:

a) La del vendedor o comercializador ilegal o no autorizado por cuenta propia o ajena.

b) La del vendedor o comercializador legal o autorizado por cuenta propia o ajena que evade o desvía el correcto destino de las apuestas recibidas.

c) La del organizador o explotador ilegal o no autorizado por cuenta propia o ajena; y

d) La del organizador o explotador legal o autorizado.

Frente a ello, hemos creído que resulta más ajustado a derecho que el alcance de la sanción debe

comprender al que evada o desvíe el correcto destino de las apuestas realizadas, sea en carácter de organizador de la explotación, venta o comercialización de los juegos de azar, de apuestas mutuas y/o actividades conexas, ya sea en forma ilegal o no autorizado y/o legal y autorizado.

Y ello así fundado en que esa conducta es la que realmente agrede sustancialmente al bien jurídico tutelado y por lo tanto la que habilitaría el racional reproche del derecho penal.

Lo precedente es sin perjuicio de la existencia de otras conductas tales como: la del vendedor o comercializador ilegal o no autorizado y/o del legal y autorizado que desvíe los fondos de su correcto destino. Adviértase que en esa línea pueden ser contempladas como otras formas de participación criminal (Libro I, título 7 "Participación criminal") del Código Penal de la Nación; nos referimos a las diversas disposiciones contravencionales y/o otras sanciones de índole administrativa; esto último sobre todo para los vendedores o comercializadores legales y autorizados, donde redundaría en el retiro de la licencia de concesión para ejercer la actividad —a veces en forma perpetua—, con lo cual esa sanción representa, de hecho, un perjuicio más grave para el infractor.

Es dable destacar que se propone el decomiso de todos los efectos y los fondos que se encontraren expuestos al juego, así como los instrumentos, utensilios y aparatos empleados o destinados al servicio de los juegos de azar o de apuestas mutuas y/o las actividades conexas no autorizadas.

En otro orden, en el artículo 4º se fija el destino de los fondos percibidos por el cobro de las multas y el producido de los bienes decomisados, el que será el que corresponda de acuerdo a lo que prevea la legislación local.

Finalmente, sobre los aspectos constitucionales que nos planteamos en el tercer interrogante, se ha tenido presente la opinión de notables constitucionalistas como los doctores Félix Loñ, Gregorio Badeni y Arturo García Lema, quienes han sostenido oportunamente que la transformación de las contravenciones en delito por medio de una ley nacional, es perfectamente viable porque el tema constituye materia nacional, quedando el resguardo del poder de policía sobre los contenidos de los actos en manos de los estados provinciales.

Tampoco, al parecer de estas destacadas figuras del Derecho Constitucional, la dificultad para hacer una ajustadísima definición de juegos de azar, importaría otorgarle a la norma un viso significativo de ley penal en blanco, de manera de merecer una sanción posterior de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Jorge A. Agúndez.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: para definir el criterio del debate acordamos en la reunión de labor parlamentaria unificar en general la discusión sobre los tres proyectos. O sea que el miembro informante, el senador Agúndez —presidente de la Comisión—, va a informar en general sobre los tres proyectos y luego cada uno de los senadores también podrá utilizar su tiempo para fundar del mismo modo su postura con relación a las tres iniciativas. Una vez agotado el debate en general, pasaremos a votar en general y en particular cada uno de los proyectos que vamos a tratar esta noche.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. — Señor presidente: estamos de acuerdo con lo expresado por el señor senador.

Simplemente, deseo aclarar que, por una cuestión metodológica, la discusión podrá repetirse en el tratamiento en particular de cada proyecto. Pero la votación y la discusión en general sería una para todas las iniciativas, salvo que exista oposición por parte de algunos señores senadores en hacerlo, sin perjuicio, reitero, de que en la consideración en particular se debata nuevamente.

Digo esto porque es lógico que ello ocurra y, por las dudas, queremos expresarlo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.

Sr. Bussi. — Señor presidente: cuando el señor secretario parlamentario hizo lectura del temario de labor parlamentaria, creó que omitió involuntariamente el proyecto S.-40/04 de mi autoría, por el que se modifica el artículo 13 del Código Penal respecto de delitos sexuales.

Sr. Pichetto. — Correcto.

Sr. Secretario (Estrada). — Correcto. Se ha omitido mencionarlo, pero está incluido en el dictamen juntamente con el proyecto del señor senador Pichetto. Se trata de los expedientes S.-40/04 y S.-793/04.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — También debemos hacer un reconocimiento al aporte y a la tarea de unificación de criterios que hizo el señor senador Agúndez, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

El trabajo desarrollado recoge proyectos del senador Bussi y de quien les habla, sumado el aporte intelectual y la labor realizada por el señor senador Agúndez.

Sr. Presidente. — En consecuencia, existe acuerdo en llevar adelante un debate en general de los tres proyectos y, luego, avanzar en la votación en particular de cada uno de ellos, con sus articulados.

La Presidencia acordó un tiempo de veinte minutos para los miembros informantes y los presidentes de bloque y, luego, de diez minutos para el resto de los señores senadores.

Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: hemos estado trabajando en todos estos temas y creemos que en la Argentina hay una crisis de seguridad.

Hace tiempo que la inseguridad en nuestro país ha traído la intranquilidad y el miedo a la familia argentina. Por ello, como lo veníamos diciendo en reiteradas oportunidades, considero que el Poder Legislativo tiene que brindar su aporte cada vez que hay una situación de crisis, dando respuestas e instrumentos para la actuación correcta por parte de la Justicia.

El Senado, y quien les habla en particular, ha venido sosteniendo que este problema es una cuestión de Estado que involucra y responsabiliza a los tres poderes. Por eso, la orientación de la política criminal tiene que estar en manos del Poder Ejecutivo nacional.

Por lo tanto, si los tres poderes asumimos a través de nuestro trabajo y con mucha dedicación lo que hemos venido desarrollando desde hace tiempo, podremos combatir fuertemente el problema de la inseguridad en la Argentina.

La sociedad quiere percibir tres cosas fundamentales.

En primer lugar, que toda persona que cometa un delito tiene que estar y tiene que ser aprehendido.

En segundo término, que toda persona aprehendida que cometió un delito debe ser condenada. Y, por último, una vez que ha sido condenada, tiene que cumplir su pena.

Esto es lo que no percibe la sociedad. Y en base a eso muchas veces hemos tenido que dar una respuesta rápida desde el Congreso de la Nación y, a veces, los otros poderes no han acompañado esta rapidez de las leyes y de los instrumentos que nosotros les brindamos.

Hemos venido diciendo también que debemos determinar las características de cada una de las crisis.

Creo que en la Argentina hay problemas accidentales que son de fácil solución. Por su parte, considero que también hay crisis estructurales cuya solución es un poco más complicada. Lo más costoso, lo que lleva más tiempo y en lo que hay menos paciencia es con respecto a que el Congreso de la Nación, junto con los otros poderes, empecemos a encarar fuertemente una reforma estructural del sistema penal argentino.

Puede ocurrir que la caracterización de la crisis indique que tan sólo es accidental y, en ese sentido, podríamos hacer una enumeración mencionando la mala actuación policial, la inadecuada investigación sumaria, el pésimo control preventivo, etcétera. Son crisis accidentales. Hacen a la persona que voluntariamente, por acción o por omisión, está cometiendo estos errores, a veces por culpa o por dolo. Pero esto es de fácil solución. Es personal. Se puede sacar a esa persona. Es una situación sencilla de ser resuelta.

El caso de una crisis coyuntural ya es algo un poco más difícil. Estamos haciendo debates continuos sobre varios proyectos solicitados por el Poder Ejecutivo, así como distintas iniciativas de senadores que tienden a dar respuesta a estas situaciones.

Cuando en la legislación penal adecuamos instrumentos ante los tipos de crisis coyuntural modificamos códigos — caso del Penal o el Procesal Penal —, cuyos efectos, a veces, pueden ser contraproducentes, y frente a lo cual es necesario dar una respuesta.

Precisamente, hoy vamos a tratar una serie de cuestiones vinculadas con el servicio de comunicación móvil, al juego clandestino y la limitación a la libertad condicional. Es decir, se trata de respuestas coyunturales que damos a la sociedad argentina por intermedio del Código Penal.

Creo que es digno decir que durante la gestión del ex presidente Duhalde se formó una

comisión antisequestro que no sólo resolvió el tema del delito de secuestro desde el punto de vista penal sino también procesal penal, y también agilizó muchísimas actuaciones por parte de la justicia de instrucción. Como se trataba de un delito interjurisdiccional, que exigía respetar las garantías individuales, lo que se buscó fue hacer mucho más ágil la actividad de la investigación.

Además, tuvimos que aprobar otras iniciativas, como la relativa a la recompensa, la protección de testigos y una modificación a la Ley de Telecomunicaciones. Todo este paquete, trabajado por la comisión asesora que había designado el presidente Duhalde, fue consecuencia de una vocación y de una decisión política del Poder Ejecutivo, que estaba comprometido totalmente en la búsqueda de una solución.

Asimismo, es nuestra responsabilidad decir que el propio presidente Kirchner firmó el Decreto 357, por el cual dio competencia a esa comisión asesora en una serie de temas preocupantes para el país. Fundamentalmente, como hombre del interior, tengo que reconocer que se incluyó el tema del abigeato, asunto bastante difícil en el ámbito de la sociedad rural, en especial en los lugares más despoblados de la Argentina.

Todos esos proyectos fueron tratados. Tengo una lista de las iniciativas que hemos considerado en esta actitud coyuntural que nos tocaba afrontar. Rápidamente, puedo mencionar que en el período 2002/2003 hemos tratado la ley 25.601, por la que se modificaba el Código Penal estableciendo prisión perpetua a quien matare a un miembro de las fuerzas de seguridad; la ley 25.742, sobre reformas al Código Penal en aspectos que hacen a los delitos de secuestros extorsivos y privación ilegítima de la libertad. También la ley por la que aumentamos la pena llevándola a prisión perpetua cuando se tratara de un funcionario policial, o la ley 25.746, de creación en el ámbito del Ministerio de Justicia del Registro de Menores Extraviados.

Además, tengo el deber, por el respeto que siento hacia el cuerpo del que participo, de enunciar los proyectos de ley que hemos sancionado.

Aprobamos las siguientes leyes: 25.760, de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, en aspectos que hacen a los delitos de se-

cuestro y privación ilegítima de la libertad; 25.761, por la que se establece un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes; 25.762, por la que se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas; 25.764, por la que se instrumenta el programa de protección a testigos imputados que hayan prestado colaboración en causas de secuestro; 25.765, por la que se establece un fondo de recompensa para quien aporte datos en causas de secuestro; 25.767, por la que se agravan las penas para quienes cometan delitos con participación de menores; 25.815, por la que se modifican diversos artículos del Código Penal, como el 23 –decomiso– y los 277 y 279 –encubrimiento–, y el artículo 1.027 del Código Aduanero; 25.816, de reforma del Código Penal agravando penas para delitos cometidos por miembros de la Policía, fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario, y la 25.873, de reforma de la ley de telecomunicaciones estableciendo deberes a cargo de los prestadores para contribuir a investigaciones. Y me queda la ley de abigeato –que ya fue sancionada por el Senado y la está tratando la Cámara de Diputados– y la del agravamiento de penas por el robo con armas. Todas estas son iniciativas aprobadas por el Senado y que tendrían que estar siendo consideradas por la Cámara baja.

Evidentemente, se trata de situaciones coyunturales a las que nosotros tenemos que responder. Pero si al mismo tiempo no respondemos ante las situaciones estructurales, no solucionaremos el problema de la gente. Por eso, hay que trabajar en las dos caracterizaciones de la crisis.

Ante la magnitud de la crisis y los actos desgarradores y criminales de los últimos días, la sociedad nos pidió más. Y considero que debemos responderle con más trabajo. Pero quiero aclarar que hemos venido trabajando en todas estas situaciones.

Además, considero que tendríamos que utilizar un elemento aprobado por ambas Cámaras hace más de un año y medio.

Ustedes recordarán cuando pedimos desde la Comisión, en ese entonces, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios la constitución de una comisión bicameral a los efectos de tratar una reforma integral del Código Penal. No podemos seguir emparchando estas cosas, por-

que a veces nos puede salir bien y otras mal pues hay muchísimas leyes dispersas. Incluso no sabemos el equilibrio de penas en virtud de tanta legislación existente y dispersa.

Esa comisión bicameral, cuyo funcionamiento duraría 180 días, sería la encargada de instrumentar una reforma integral del Código Penal y otorgaba a sus integrantes la posibilidad de convocar a los mejores académicos del país y a representantes del Colegio de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Colegio de Magistrados de la Nación y a integrantes de juzgados de ejecución e instrucción penal. O sea que ya en ese tiempo hacíamos la advertencia de que si seguíamos contestando coyunturalmente y no hacíamos nada más, nos íbamos a encontrar con que la mayoría de las leyes iban a estar más fuera que dentro del Código Penal. Esto es lo que nosotros veníamos sosteniendo y es por eso que en esta oportunidad quisiéramos que se comenzara a abordar una verdadera reforma integral del Código Penal.

Finalmente, ¿cuál es la caracterización del tema estructural de la crisis?

Hoy tenemos a una Argentina distinta de aquella en la que se sancionó el Código Penal; no se conocía el conurbano con la cantidad de habitantes que lo ocupan en la actualidad. Es una Argentina de muchos más habitantes que la que había en la época en que se hizo el Código Penal. Es una Argentina en donde, seguramente, no podemos responder —como se lo hacía en esa época— de un modo más general al problema básico de la criminalidad.

Por eso, debemos repensar qué filosofía le vamos a poner a la reinserción social del delincuente, ¿vale o no la pena?, ¿qué vamos a hacer con eso?

Esto de garantista y mano dura es un insulto a la interpretación de lo que necesita la sociedad.

La sociedad quiere que el Estado proteja sus vidas, sus bienes y todos los derechos y garantías que la Constitución Nacional les brinda. Además, tenemos que empezar a discutir qué sistema penitenciario queremos en la Argentina.

¿Qué hacemos con los sistemas penitenciarios provinciales y nacional? ¿Es que esto hace a la autonomía política de las provincias si sabemos que a una persona cuando le dan el auto de

soltura se va a otra provincia a cometer delito y no se va a quedar en la provincia en la que ya está fichado, como se dice habitualmente?

Entonces, cuando veo este gasto inútil de doble sistema penitenciario y al personal penitenciario que no está ni capacitado y cómo convive con alguien al que ve todos los días durante diez o quince años no puedo menos que compartir que, como se dice habitualmente, terminen siendo compadres o parientes. ¡Esos son los que tienen que cuidar a los presos argentinos y es difícil, a veces, tener el poder disciplinario suficiente para controlar estas situaciones! La verdad es que no nos animamos a tratar esas cuestiones. Pareciera que algunas provincias tienen mejores cárceles que otras; sin embargo, muchas veces se dice que se quiere un sistema penitenciario único. La cuestión no es si las provincias tienen buenas instalaciones edilicias ya que lo que hay que entender es que la seguridad ya ha pasado las barreras provinciales hace mucho tiempo y la inseguridad lo ha hecho con mucha más razón.

Hace poco presenté un proyecto para declarar la emergencia penitenciaria. Eso fue hace dos años y el secretario del Servicio Penitenciario de la Nación me contestó que ya habían decretado la emergencia administrativa porque era un problema de plata y no de lo que estamos hablando en este momento.

Por eso creo que si le prestamos atención a estos temas estructurales, sabiendo que estamos en otra Argentina, en una totalmente distinta a aquella de cuando se aprobó el Código Penal, pensaremos en forma diferente sobre cómo debe ser el sistema penitenciario argentino. Seguramente, cuando entremos a reformar íntegramente el Código Penal le podré contestar, por ejemplo, al senador Cafiero que hoy me preguntaba si podemos penalizar al padre que, por negligencia, haya dejado un arma luego tomada por un niño. Yo le decía: "El sistema penal argentino, no, porque es subjetivo, no es objetivo".

Hay responsabilidades civiles en cuanto a ese tema del padre con respecto al hijo menor. Pero no podemos llevar a cabo este sistema porque, aunque podría ser bueno, desgraciadamente el fondo y la filosofía del Código Penal no nos permiten llegar a eso.

Entonces, señor presidente, creemos que hay que mover estas estructuras. Hemos estado ana-

lizando qué es el Patronato de Liberados. Lo nombramos dos o tres veces en el Código Penal. Lo hemos nombrado como diez veces en la ley 24.660. Y resulta que cuando el doctor Pagano, su presidente, vino a la Comisión, nos dijo que en el último año le dieron 700 mil pesos y que en el anterior le habían dado 2 millones. Eso es producto de un subsidio que le da la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realmente no entiendo que tengamos tantas desprolijidades en estos temas. El Patronato de Liberados es el que cuida y contiene a los que liberamos en cuanto a darles, por lo menos los primeros días, algo de plata y la posibilidad de reinserción social con un trabajo. Desgraciadamente, el Patronato de Liberados que tenemos es una asociación sin fines de lucro. Por eso, en el proyecto que hemos presentado pedimos un patronato oficial que dependa del Estado nacional o de los estados provinciales, pero que sea oficial y al que se le den los medios necesarios para que funcione con total amplitud.

Teniendo en cuenta la crisis estructural hablamos acerca de qué policía queremos en la Argentina: ¿las policías provinciales?, ¿las federales? Hoy me hablaron de algunos de los carabineros, en Chile, y me dijeron que andaban bien. No conozco ese tema. Ahora, yo quisiera saber si a la policía le podemos dar los instrumentos necesarios, no me refiero solamente a armarlos para defender a la gente del delito, sino si les vamos a dar cultura y conocimiento a esa gente. Tenemos un déficit bastante grande que debemos afrontar. Alguien me dijo, hoy: "Si podemos intervenir una provincia, ¿por qué no intervenimos a la policía de esa provincia?" Yo dije: "Bueno, yo no lo he pensado. Pero se está pensando así, con un pensamiento más simple, más claro, más directo, y no con tanta vuelta como damos, a veces, sin comprender que las necesidades de la gente requieren respuesta urgente".

También tengo que aclarar que hemos creado muchísimas instituciones y nos duele que no funcionen. Por ejemplo, por el artículo 29 de la ley 24.050 se creó un gabinete interdisciplinario formado por médicos psiquiatras para que estudien si una persona está bien y puede salir, o si es peligrosa para la gente o no. Se van a cumplir diez años y todavía no está formado el gabinete psicofísico. Esto es grave; entonces, no es sólo cuestión de que figure en la ley o no.

En otros artículos de esa misma ley se habla de los jueces de ejecución penal. El año pasado, aquí, en la Capital, 19 mil personas dependían de los jueces de ejecución penal. Había sólo tres jueces de ejecución. Creo que uno de ellos renunció, así que hay dos y una vacante. Pero para que el sistema funcione se necesita un mínimo de seis jueces de ejecución penal; si no, simplemente es un mero formalismo. No gastemos plata en los dos que quedan, porque no van a hacer nada. Pongamos los seis o no pongamos ninguno. Esa es la realidad a la que nos está llevando esta Argentina que queremos, de la que somos responsables todos. Acá no es cuestión de colores políticos ni sistemas de uno o de otro lado o sectores.

Me atrevo a decir, bajo mi responsabilidad, que en los veinte años de democracia nos hemos olvidado de los problemas del sistema penal, de la reinserción social, de los patronatos. Pensábamos que había que terminar con todos los problemas que nos dejaron los gobiernos militares, y nos olvidamos de que esta cuestión ahora empieza a ser importante. Ahora nos damos cuenta de que nos dejaron una policía difícil: una fuerza de 45.000 hombres en la provincia de Buenos Aires, 30.000 en la Capital, que si sumamos los de Córdoba y Santa Fe son un ejército inmenso. La mayoría empezó a los 25, 26 años en las distintas fuerzas de seguridad sabiendo cómo era el comportamiento del superior. Al respecto también tenemos que hacer una muy fuerte reestructuración porque me parece que estamos atrasados.

Todas estas cosas me hacen estar cada vez más convencido de que en las cárceles de la Argentina de hoy, que son producto de varias décadas, entran personas malas pero salen salvajes; y si salen salvajes, se comete este tipo de delitos. Si no cambiamos en forma total, con los tres poderes comprometidos, buscando una justicia que no solamente tenga leyes e instrumentos sino también posibilidad de guardar los expedientes –porque no hay estructura edilicia para que la Justicia se pueda desempeñar, incluso, en algunas provincias todavía no se han constituido los tribunales orales–, habremos hecho un trabajo en vano. Esperamos que sirva este gran ejemplo que nos ha dado el jueves la sociedad, movilizándose con todo respeto y prudencia. Es muy difícil ser prudente desde el dolor, pero en este caso lo ha sido.

Hoy tuvimos la suerte de que el padre del chico asesinado nos dijera que no nos sintiéramos presionados, que trabajáramos con mayor libertad para cambiar las cosas. Tiene mucha grandeza esto que dijo un padre con tanta amplitud y objetividad.

Hoy vamos a tratar tres proyectos de ley dando respuesta, por qué no, al peticitorio. Alguien me decía que no podemos hacer "seguidismo". ¿Cómo no vamos a hacer "seguidismo" si nosotros somos representantes de la sociedad? Por lo tanto, no tengo vergüenza ni "seguidismo" ni nada por el estilo. Estamos haciendo lo que corresponde. Si tenemos que trabajar, así lo haremos, porque la sociedad lo pide. Peor sería la revocación de lo que estamos haciendo porque no sirve.

Hoy vamos a analizar tres proyectos. El primer proyecto se refiere a la modificación del artículo 13 del Código Penal con respecto a limitar la libertad condicional en casos de delitos aberrantes. Seguramente, pueden alzarse algunas voces diciendo que es inconstitucional. Ante las grandes crisis, grandes remedios. Veremos si es inconstitucional. En otras ocasiones también tratamos proyectos en forma rápida, dando soluciones prácticas.

El proyecto se refiere a un solo artículo. Si tenemos que estar varias horas para modificarlo, lo vamos a hacer. Este es el proyecto que rápidamente tuvimos que elaborar. Pero como se refiere a un solo artículo, podemos tratarlo con mayor amplitud. Ayer en la reunión de comisión dijimos que en el artículo 13 del Código Penal, sobre la libertad condicional, se agregaba el inciso 6), que no estaba en el Código Penal, por el cual se establecía el hecho de someterse a tratamiento médico psiquiátrico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia. Esto lo agregamos en esta reforma que hicimos, y es lo que yo les venía diciendo del artículo 29 de la ley 24.660. Esperemos ahora que esto se cumplimente rápidamente.

Decíamos que la libertad condicional no se otorgará a los condenados por los delitos previstos en los artículos 80, inciso 7), cuando se mata para ocultar otro delito; 124, violación seguida de muerte; 142, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte; 167, robo seguido de muerte; 170, secuestro seguido de muerte. Esto es lo que nosotros queremos plantear como

la modificación modular del artículo 13 del Código Penal.

Sé que la Cámara de Diputados está tratando algunos proyectos similares. Pero el que está en labor parlamentaria para el día de la fecha en la Cámara de Diputados es el de la modificación del artículo 15, vinculado con los permisos provisionales de libertad anticipada, referidos al tema penitenciario exclusivamente. Me dieron noticias de que el artículo 13 lo dejarían para la próxima semana. Nosotros vamos a aprobar esto, si la mayoría así lo desea, y luego va a pasar a la Cámara de Diputados. Si en esa Cámara hacen una reforma mejor que la nuestra, con toda dignidad la aceptaremos, si es necesario.

En este artículo habíamos puesto también algo que la mayoría no aceptó, lo cual me parece bien, ya que teníamos nuestras dudas. Me refiero a que los gobiernos provinciales y el presidente de la Nación, en estos delitos aberrantes, no pueden indultar, conmutar o rebajar penas. Los gobernantes son muy propicios —a veces con justicia, otras no— a indultar, rebajar o conmutar penas. A través de este proyecto estamos prohibiendo a la Justicia que, respecto de estos delitos otorgue libertad condicional. Si bien no podemos hacer lo mismo respecto de los poderes ejecutivos, por una cuestión de autonomías provinciales, de todos modos, a través de este proyecto estamos diciendo fuertemente a todos los gobernadores del país y al presidente de la Nación que para este tipo de delitos no indulten, rebajen o conmuten penas. De lo contrario, tendrán que pagar un costo político muy alto. Este es uno de los proyectos que nosotros hemos traído, con todas las objeciones seguramente que podrán hacerse.

Por otra parte, hemos traído el proyecto de juego clandestino que, rápidamente, informaré. Se trata de un proyecto originado en la Cámara de Diputados, cuyo autor es el actual presidente del Senado, que tuvo sanción en el año 2001: C.D.-148/01. En el Senado se le introdujeron algunas modificaciones. Hicimos un nuevo proyecto que caducó. En octubre de 2002 la ex Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios emitió dictamen OD-1.549/02. Como presidente de la Comisión he tenido que reproducir el proyecto respecto del cual habíamos dictaminado, iniciativa del entonces diputado Scioli, contenido en el expediente S.-2.894/03.

¿De qué se trata esto? Yo leí los informes que habían sido producidos en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Si bien es un proyecto simple, me llamó la atención cuando me dijeron que por estos juegos clandestinos, precisamente, no entraban al erario público, por evasión, mil millones de pesos. En realidad, me preocupé porque ese dinero tiene que ir a salud y a acción social, que tanto lo necesitan.

La otra preocupación está vinculada con el aguante del juego clandestino. Ahí está el quid de la cuestión, ya que para ello se necesita de la policía de la zona. Casi con seguridad ese dinero irregular va a parar precisamente a las grandes bandas, para ser destinado a su tecnología y demás.

Seguramente el Poder Ejecutivo sabrá interpretar y reglamentar el juego de azar, pero nosotros creemos que lo recaudado por las multas que se cobran como consecuencia de este tipo de delitos relacionados con el juego clandestino debe ser destinado a la provincia en donde se haya cometido dicha irregularidad. Y éste es un tema importante, porque estamos hablando de mucho dinero, puesto que las multas son muy grandes. De esta manera, la distribución se haría en forma federal para todo el país.

Por otra parte, debido a la situación social por la que está atravesando el país, creemos necesario desincriminar al levantador de quiniela clandestina, a aquél que está todo el día en la calle. Quizás algunos no sepan de qué se trata esto, si es o no oficial, pero nuestra intención es perseguir al capitalista del juego clandestino, que gana muchísimo dinero.

Se hace duro tratar estas leyes, porque siempre buscan la forma de defenderse de ellas y seguramente mañana saldrán a decir que se trata de algo inconstitucional y, como tienen dinero, pueden buscar los mejores abogados y constitucionalistas, pero nosotros vamos a seguir adelante para cambiar esta realidad.

Hemos desincriminado al levantador de quiniela por dos situaciones: una está relacionada con el tema social. Tengo informes del Sindicato de Vendedores de Quiniela que dan cuenta de que son unas quinientas familias las que viven de esto, y al incriminar a los vendedores los estaríamos dejando sin trabajo; además, por más que sepan que es un delito, algunos lo van a seguir cometiendo porque tienen necesidad de

hacerlo. Por ese motivo, nosotros los desincriminamos y establecemos que los gobiernos provinciales tendrán que solucionar el problema a través de las contravenciones, pero le imputamos el delito a la organización del juego clandestino. Y no solamente le imputamos el delito a esa organización, sino también a aquellos que tienen habilitación para la explotación de todos estos juegos pero que desvían las correctas apuestas de la oficial a la clandestina para no pagar impuestos. Esto es algo que queremos desterrar por completo.

También creímos que si criminalizábamos al levantador, que es la persona visible del juego clandestino en la calle, se nos cerraba la estrategia judicial, porque éste podría ser indagado y el solo hecho de que se abstuviera era suficiente para que se acabara la investigación. De esta forma, además de cumplimentar todo el esquema kelseniano queríamos complementar también lo práctico de un proyecto que le va a generar dinero al Estado y hará que se termine este tipo de delitos cometidos por esos delincuentes de guantes blancos.

Además, cabe aclarar que en esta Cámara ya contamos con otros proyectos al respecto que fueron formulados por los senadores Capitanich, Pichetto, Curletti —en este último caso se trata de un proyecto presentado hace bastante tiempo, creo que lo hizo en julio o agosto del año pasado— y también hubo una iniciativa del señor senador Jenefer.

Por otra parte, creo que es necesario buscar la forma de que en esta ocasión sea aprobado el proyecto relacionado con la telefonía celular y el servicio de comunicación móvil. En primer lugar, porque creo que todas estas bandas llevan a cabo toda su estrategia territorial y toda la comunicación utilizando este servicio para que no podamos averiguar en dónde están en forma cierta y concreta. El proyecto fue a la Comisión de Comunicaciones, como cabecera, y a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. De todas maneras, los senadores Capitanich y Pichetto seguramente van a hablar más profundamente del tema ya que son los autores de la iniciativa así como también la senadora Curletti.

Quería decir que nosotros autorizamos a los servicios de seguridad a chequear estos teléfonos. Evidentemente deben hacerlo con prudencia. Si una persona está hablando por teléfono

frente a un banco, ellos pueden pedirle la identificación del mismo. Ustedes saben que tenemos usuarios y clientes de teléfonos celulares. El cliente puede tener varios teléfonos a su nombre pero, ¿quién los usa? Ese es el verdadero objetivo del proyecto. Es decir, llegar a establecer quién los usa; y para eso debemos tener un registro de los teléfonos celulares. También se ha dicho que estas iniciativas pueden ser de dudosa constitucionalidad. De todas maneras, el proyecto apunta a lograr los efectos que buscamos: si un teléfono celular está irregularmente en manos de una persona que no acredite ser su legítimo usuario, evidentemente puede secuestrarse.

Alguno dicen que son atribuciones muy grandes para los servicios de seguridad, pero son las mismas que otorgamos en la ley de desarmado de autos, donde la policía o las fuerzas de seguridad podían entrar a los efectos de verificar todos los libros respecto de los autos desarmados.

Fuera de eso, quiero insistir en un proyecto de la senadora Lescano, sobre el que habíamos venido hablando en general, acerca del Patronato de Liberados. Ya expliqué la necesidad de aprobar este proyecto de comunicación por el cual solicitamos al Poder Ejecutivo que torne oficial el Patronato de Liberados y brinde los fondos necesarios a los efectos de proceder como corresponde de acuerdo a su función.

Por otra parte, en otro proyecto de comunicación les solicitamos a las autoridades pertinentes que hagan todo lo posible para instrumentar y que funcione correctamente el gabinete psicofísico del artículo 29 de la ley 24.050. Asimismo, que todos los gastos que demande la ley 24.660 —en ese mismo proyecto lo decimos— sean atendidos con las partidas presupuestarias pertinentes, porque de lo contrario habremos sancionado una ley que se aplica muy poco en las penitenciarías argentinas.

Como ya dije, pedimos la creación inmediata de tres juzgados de ejecución penal, a efectos de completar todos los requerimientos necesarios para esas personas que hoy por hoy están a la deriva.

Por último, hemos ratificado muchísimas cosas que este Senado de la Nación ha hecho, pero de vez en cuando me gusta decirles para que nos acordemos. Espero que esta Cámara instruya rápidamente a los presidentes de bloque para que empecemos a tratar la reforma

integral del Código Penal, porque es una demanda que fácilmente tiene un año, de modo de contar con una posibilidad concreta. Y decir a los jueces de la República que vamos a trabajar para darles instrumentos, pero que también ellos piensen con mayor practicidad en muchos aspectos. Y decirle al Ejecutivo que todo lo que estamos haciendo es porque asumimos la responsabilidad en conjunto. Pero esa responsabilidad en conjunto tienen que orientarla, precisamente, las autoridades nacionales del país.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: en el día de hoy vamos a tratar, como bien lo explicaba el señor senador Agúndez, tres proyectos. Uno es el de la reforma, en el ámbito del Código Penal, de los artículos 13 y 14, respecto de la libertad condicional. Vamos a tratar el sistema de comercialización de teléfonos celulares y, también, otros proyectos que son de extrema importancia para atender la problemática de la seguridad pública.

La seguridad pública hoy es un tema extremadamente complejo que está instalado en la agenda social de la República Argentina. Es una política que puede denominarse transversal porque, efectivamente, abarca todos los sectores sociales. Es un problema que afecta a todos los argentinos y es necesario establecer, por lo menos, algunas estadísticas importantes.

Desde 1990 hasta la fecha los delitos que se denunciaban en el país eran 500.000 y pasaron a cerca de 1.500.000. Esa es la proyección que tenemos para el año 2004. O sea, un incremento de aproximadamente tres veces en las cifras que teníamos hace catorce años.

En segundo lugar, nosotros tenemos que advertir que existe aproximadamente un número de 210.000 agentes, a través de las distintas fuerzas de seguridad nacional y provinciales; que tenemos un monto total de presupuesto asignado equivalente a 12 mil millones de pesos en el presupuesto consolidado en cuanto a la Nación y a las jurisdicciones provinciales; que tenemos 5,8 agentes cada cien mil habitantes, lo que es superior a la proporción de 3,5 cada cien mil habitantes que tiene el promedio internacional; que efectivamente el 75 % de los delitos, y fundamentalmente de los homicidios y crímenes, los cometen personas de entre 16 y 35 años; y

que, efectivamente, el promedio de edad de quienes ejecutan delitos, y fundamentalmente crímenes, es de menos de 25 años.

Eso denota que hay un problema de expectativa de vida, de esperanza y de falta de contención del sistema político, económico y social en la República Argentina. Y esto se traduce inmediatamente en el hecho de que muchas de estas personas se integren a organizaciones delictivas, que son cada vez más complejas y que cometen delitos cada vez más aberrantes, como crímenes u homicidios de distinta naturaleza.

El sistema penitenciario en la República Argentina está colapsado. Los datos estadísticos indican que hay cerca de 45 mil presos o encausados en el sistema penitenciario federal y en las jurisdicciones provinciales. Y la capacidad estimada es de 31 mil. Por lo tanto, hay un colapso de entre el 17 y el 25 % de sobrestimación respecto de la capacidad instalada.

Observamos claramente que el salario promedio de las fuerzas de seguridad es equivalente a 550 y 600 pesos por agente por mes. Comparativamente, un policía en Florida, al ingresar, tiene 40 mil dólares por año; un jefe, 100 mil dólares por año; y, obviamente, el salario promedio a nivel internacional es muy amplio, en términos de dispersión y en función del ingreso por habitante de los países, pero también lo es entre jurisdicciones provinciales.

Hay provincias que se caracterizan por tener un incremento extraordinario en el número de homicidios. Es un caso típico en la República Argentina. Hay aproximadamente entre tres mil y cuatro mil homicidios anuales. En el año 2001 había tres mil homicidios, de los cuales 1.600 se producían en la provincia de Buenos Aires, de los cuales, a su vez, 1.300 se producían en el conurbano bonaerense.

La provincia de Mendoza es otra de las provincias en donde el índice de criminalidad ha aumentado sustancialmente. Y también hay otras provincias que podemos considerar en algunos lugares específicos, como la provincia de Santa Fe. Este es el problema.

Estamos frente a un conflicto de una magnitud extraordinaria y ante una fuerte demanda social—una gran movilización social—y, por supuesto, debemos trazar una agenda de cumplimiento de una serie de cuestiones.

Por ello tenemos que considerar que el autor

de un delito debe tener una percepción de riesgos que, en primer lugar, radiquen en que si efectivamente comete un delito, lo van a atrapar. En segundo término, debe quedar en claro el cumplimiento de su pena o condena cuando lo atrapan y, por último, la agravación de las penas.

En consecuencia, me parece importante lo que vamos a hacer ahora, pero tenemos muchísimo más por hacer de aquí en adelante. Debemos atacar los problemas desde un enfoque sistémico.

Sin bien aún no hemos dicho nada respecto de los mínimos y máximos de las penas ni del sistema de acumulación de penas—que implica una adecuación profunda desde el punto de vista del Código Penal—ni del equilibrio de las penas en cuanto a los delitos, me parece necesario trabajar en un sendero que nos permita resolver en el corto plazo aquellos problemas que hacen a nuestra responsabilidad legislativa.

Ahora bien, esta situación no se soluciona sólo con leyes. Esto también debe marcar una impronta en el ámbito judicial; lo que implica una reforma profunda en el sistema judicial y, obviamente, en la organización del sistema de seguridad pública, cuya facultad jurisdiccional corresponde en primer lugar a las provincias argentinas. Digo esto porque me parece necesario poner blanco sobre negro.

Personalmente considero fundamental que avancemos en una declaración de emergencia para el régimen de portación de armas: un plazo de 90 días para que exista un decomiso generalizado de armas ilegales. En nuestro país se cometen delitos porque hay objetos que promueven la posibilidad de cometerlos: un arma adquirida ilegalmente, un teléfono celular que permite ser accionado y que—muchas veces—es obtenido ilegalmente, personas contratadas para matar a otras y bandas perfectamente organizadas que operan en la ilegalidad.

Entonces, debemos destruir todas estas células de ilegalidad que constituyen apoyos sustanciales para cometer un delito. Y este régimen de portación de armas no es un problema menor.

Al recopilar estadísticas respecto de la ilegalidad de armas, he tomado conocimiento de que el RENAR planteaba una estimación de entre cien a ciento cincuenta mil armas ilegales. Pero resulta que en la provincia de Buenos

Aires se hablaba de cerca de dos millones de armas ilegales.

Muchos países han sufrido el problema de la ilegalidad de las armas. En 1992, en los Estados Unidos, en Kansas, se estableció una estrategia de decomiso generalizado de armas y los delitos bajaron de un modo sustancial, cerca del 49 por ciento sobre un 65 por ciento de patrullaje para recoger armas de carácter ilegal.

En Indianápolis se determinaron dos zonas: en una de ellas se realizó un rastrillaje con patrulleros y bajó sustancialmente el porcentaje de delitos cometidos —un 40 por ciento sobre un 50 por ciento de patrullajes—; mientras que en otra zona, donde no se patrulló, el delito se mantuvo en los mismos niveles. Lo mismo ocurrió en Nueva York y en otras experiencias internacionales.

Me parece que es muy importante avanzar en la penalización severa y en la no excarcelación de estos delitos, pero también en un sistema operativo de patrullaje, rastrillaje y culminar con la tenencia de armas ilegales.

Respecto a la organización del sistema de seguridad pública, tenemos que plantear claramente que en el ámbito de los municipios se debe establecer una base y estrategia de prevención de los delitos. Las provincias deben adoptar la organización de un sistema de seguridad para los delitos menores y, en el ámbito nacional, una estrategia para la atención de los delitos complejos.

Los delitos complejos —en el contexto de la globalización y de la modernidad— implican actos muy complicados: terrorismo, narcotráfico, migración de carácter ilegal, delitos informáticos, delitos de lavado de dinero, de evasión fiscal, etcétera.

Pero debemos tener coordinación interinstitucional. Hoy, el gobierno nacional destina el 90 por ciento del esfuerzo para trabajar el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el del conurbano bonaerense. Lo que necesitamos es establecer una nueva estrategia y una nueva infraestructura en cuanto a recursos financieros, tecnológicos y materiales, así como a la calificación de recursos humanos.

Las modernas fuerzas de seguridad policial tienden a ser descentralizadas. No existe la estructura jerárquica de oficiales y suboficiales

metidos en oficinas y agentes sin calificación laboral en la calle. Frente a delitos que cada vez se manifiestan con mayor complejidad, los agentes deben ser personas calificadas no solamente en el manejo de armas sino en estrategias de prevención y en posibilitar estrategias de información adecuadas.

Entonces, el problema de la organización del sistema de seguridad pública pasa a ser un tema extraordinario desde el punto de vista de las comisarias, de la subcomisarias, de la infraestructura, de los vehículos, de la tecnología informática. Asociar la tecnología a la eficacia para prevenir y combatir un delito es la clave del éxito del sistema de seguridad pública.

Pareciera que el problema no es solamente de recursos sino de organización de los recursos. El 88 por ciento del presupuesto consolidado del que hablaba hoy, de casi 12 mil millones de pesos, se destina a salarios de personal, que son suficientemente bajos. Solamente el 2 por ciento se destina a tecnología y a capacitación. Así no tenemos capacidad para trabajar adecuadamente a efectos de prevenir y de combatir el delito.

Por eso, como circunstancial miembro informante de la Comisión de Comunicaciones, quiero decir que nosotros propiciamos un marco extremadamente restrictivo y riguroso para la comercialización de los servicios celulares.

Planteamos claramente en este proyecto de ley, en primer lugar, que pueden ser comercializados sólo los servicios de comunicaciones móviles a través de empresas autorizadas.

Queda expresamente prohibida la venta a través de revendedores, mayoristas y empresas no autorizadas.

Planteamos claramente la necesidad de identificar a los adquirentes con datos filiatorios, domiciliarios y personales.

Impedimos que las personas jurídicas y organismos del Estado adquieran mayoritariamente estos teléfonos celulares sin identificación.

Planteamos todas estas previsiones de identificación para la comercialización de las tarjetas.

Plantemos la prohibición expresa de activación o reactivación de equipos de servicios de comunicaciones móviles extraviados o robados sin expresa autorización del propietario.

Prohibimos expresamente la venta, cesión, transferencia, importación y exportación de teléfonos móviles usados.

Prohibimos también la transferencia de equipos sin requisito de identificación.

Reglamentamos que la venta de tarjetas de telefonía se haga a través de bocas de expendio debidamente autorizadas por parte del Poder Ejecutivo, con identificación personal, filiatoria y domiciliaria.

Planteamos la necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones tenga un registro de usuarios y clientes de comunicaciones móviles con los respectivos datos personales, filiatorios y domiciliarios.

Por vía de la identificación de la persona que va a adquirir un teléfono o un servicio de comunicación móvil debe establecerse si ha cometido un delito doloso o grave para dejar constancia en el registro e impedir la comercialización. Se prevé también la actualización en forma permanente de dicho registro.

También se indica la exigencia de reportes para extravío de terminales y denuncia por hurto y robo.

Se hace referencia a la existencia de un sistema de coordinación para compartir la información por parte de las empresas y también para regular la tenencia irregular de los teléfonos celulares. Fundamentalmente, esta tenencia irregular hace que las fuerzas de seguridad puedan efectuar requisas e identificar expresamente aquellos teléfonos celulares que no están en condiciones regulares.

Establecemos también en el mismo proyecto una serie de penalizaciones que van de uno a seis años para la comercialización de servicios de comunicaciones móviles sin ser licenciarios: para aquellos que promuevan la activación o reactivación de servicios de comunicaciones móviles de aparatos robados; para aquellos que promuevan la alteración, la duplicación, el reemplazo de número, línea, serie electrónica y mecánica, componente de tarjeta y códigos informáticos que también tengan aprovechamiento ilegítimo de códigos.

Y, finalmente, propendemos a un aumento de penas para los delitos que sean cometidos por empresas o personal calificado de empresas licenciarias, o también por personal calificado de los órganos de control correspondientes.

Creemos que este es un elemento que permite un salto y un avance cualitativo respecto de la regulación de aquellos objetos que, junto a otros, constituyen mecanismos de apoyo logístico para cometer delitos que cada vez son peores y llevan más dolor a nuestra sociedad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Bussi.

Sr. Bussi. – Señor presidente: en realidad había preparado una ponencia sobre el tema de la reforma del artículo 13 del Código Penal, pero las palabras del senador Agúndez –presidente de la Comisión Justicia y Asuntos Penales– me eximen, por lo meduloso de su análisis, de hacer referencia a mi propia disertación.

Venía muy preocupado a esta sesión. Pero ahora me voy verdaderamente alarmado por las cifras que ha dado el senador Capitanich, las que nos llenan de consternación. Fundamentalmente, porque creo que hay un error de diagnóstico grosero y objetivo por parte del Poder Ejecutivo.

Hace escasos treinta días escuchábamos en la Asamblea Legislativa el discurso de nuestro señor presidente de la Nación, quien expresaba que “la obtención de niveles adecuados de seguridad ha sido una de las preocupaciones centrales” y “por primera vez en diez años los índices indican que se revierte la tendencia a la suba en la cantidad de delitos”. Creo simplemente que mencionar estos párrafos pronunciados por nuestro señor presidente habla claramente de que estamos ante un diagnóstico absolutamente equivocado.

Rescataré solamente dos o tres ideas de las que había preparado para esta sesión, porque creo que la necesidad de producir estos cambios hace indispensable actuar con la mayor celeridad posible. En primer lugar, creo que es un hecho para lamentar que el Congreso de la Nación vaya siempre a la saga de los acontecimientos. Sería bueno que alguna vez actuemos adelantándonos a los acontecimientos para evitar los delitos que hoy estamos lamentando.

Sin embargo, no pienso que sea achacable la responsabilidad únicamente al Poder Legislativo de la Nación. Contrariamente, creo que existen responsabilidades compartidas con el Poder Judicial, porque ha sancionado con benignidad casos que justificaban condenas más severas, o porque excarcelaron u otorgaron la libertad con-

dicional a autores de delitos aberrantes, cuando la ley les otorga la facultad a los jueces de no liberarlos. Sin embargo, creo que la responsabilidad cae, fundamentalmente, sobre el Poder Ejecutivo nacional y sobre los Poderes Ejecutivos provinciales.

Soy legislador desde hace seis años. He cumplido un mandato y medio como diputado de la Nación, ahora ocupo esta banca como senador por Tucumán y he visto con alarma cómo eso que se denomina "garantismo" ha ido ganando espacio en el derecho penal argentino, a costa de las normas rígidas y objetivas que debería haber tenido nuestro sistema penal. Tal vez eso nos haya hecho este tremendo daño que hoy estamos tratando de corregir.

No nos hemos quedado cruzados de brazos. Juntamente con la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales hemos presentado proyectos de endurecimiento de penas, los que no han sido debidamente tratados ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Pero por lo menos vemos que hay una reacción, lo cual nos llena de optimismo.

En cuanto al garantismo, considero que se ha cometido el error de sancionar la llamada "ley del 2 por 1", la generalización de las excarcelaciones y las salidas anticipadas de los condenados, entre otras medidas, lo cual creó un clima propicio para el aumento de hechos delictivos de toda índole.

Recientemente he escuchado al señor presidente de Colombia decir que cuando éramos chicos nos enseñaban que la pobreza es la causa del delito, pero ahora que somos grandes sabemos que es el delito la causa de la pobreza. Y es verdad lo que dice el presidente de Colombia, quien está aplicando medidas de seguridad muy contundentes y efectivas. Esto es así porque cuando hay delito, no hay inversión; cuando no hay inversión no hay trabajo, y cuando no hay trabajo se genera la pobreza.

Las propuestas de endurecimiento de penas han sido ignoradas con el argumento de que algunas estadísticas indican que ello no conduce necesariamente a la disminución del delito. Es así, pero no solamente hay que endurecer las penas sino que —como dijo el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— hay que capacitar a la Policía, hay que darle nuevas normas, nuevos elementos y nuevas herramientas.

Tenemos la idea de que cuando se reprime está mal o si vemos que aparece un chico muerto en una villa miseria, se piensa que se debe haber tratado de un caso más de gatillo fácil; o si la Policía arremete contra una manifestación violenta, tendemos a sospechar de que en lugar de cargar balas de goma están cargando balas de verdad. Y esto también hace a la inseguridad. Tenemos que avanzar sobre las reformas que propuso tanto el senador Capitanich como el senador Agúndez, un ejemplo sustantivo de la fuerza de seguridad en su capacitación y, fundamentalmente, en su remuneración.

Decía recién el senador preopinante que un miembro de las fuerzas de seguridad cobra entre 550 y 600 pesos por mes. Eso es un horror; estamos en manos de personas que están cobrando sueldos de indigencia o, mejor dicho, de pobreza. Hay que corregir rápidamente esos extremos.

Por último quiero rescatar una idea que considero que es importante apoyar. Quedan afuera de las figuras de los institutos que modifican el artículo 13 todos los agravantes del artículo 80; esto es, los agravantes del homicidio, como también en los casos de incendio, naufragio, descarrilamiento, tortura, piratería, envenenamiento, todos ellos seguido de muerte, por supuesto. En consecuencia, si el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales da el visto bueno, podrían ser, sin duda, incorporados en esta misma sesión. Si esto no es así, va a ser motivo de un nuevo proyecto que vamos a presentar a la brevedad.

Con estas simples palabras quiero decir desde el bloque de Fuerza Republicana que vamos a apoyar las tres iniciativas en análisis haciendo un esfuerzo del Poder Legislativo nacional para acompañar a los acontecimientos, exhortándoles, tanto al Poder Ejecutivo nacional como al Poder Judicial de la Nación, para que hagan lo propio.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: sé de la enorme expectativa que ha generado en la sociedad de los argentinos la sesión del día de la fecha, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Por eso trataré de ser breve pero también claro.

En primer lugar, quiero adelantar el voto afirmativo del bloque del Vecinalismo que repre-

sento, a los tres proyectos en tratamiento. Estoy seguro de que estos tres proyectos se van a constituir en una herramienta para contribuir a la atención de este gravísimo flagelo que nos afecta y que es el de la inseguridad.

Sabemos también que no van a ser las únicas leyes que vamos a tratar en este sentido, sino que, como bien ha explicado el senador preopinante, ya han sido aprobadas —algunas con media sanción y otras ya están convertidas en ley— con anterioridad por este cuerpo, pero seguramente con estas normativas que trataremos la semana que viene avanzaremos aceleradamente en busca de la solución del problema.

Tengo que decir que a partir de la marcha del día jueves pasado, días antes y días después de esa marcha, en Buenos Aires y desde Córdoba seguíamos muy de cerca las declaraciones del ingeniero Blumberg.

Y cuando tuvimos la oportunidad de leer el petitorio que nos hacía, francamente nos dimos cuenta de que había una posibilidad muy cierta de trabajar todos en el mismo sentido.

Como sabemos, las armas de fuego son el instrumento para paralizar a un ser humano y dejarlo totalmente indefenso. Coincido en que una persona que está siendo víctima de un delito con una arma de fuego es colocada en una situación tal que le impide distinguir su calibre o si está ante una arma de uso civil o de guerra, por cuanto ha quedado indefensa, entregada. Y conforme las estadísticas, la práctica demuestra que las muertes, en su gran mayoría, se producen por el uso de armas de fuego.

Este es un tema que va a sacudir fuertemente a la sociedad toda, porque tendremos que acostumbrarnos a esta nueva legislación, en la que tener, portar y utilizar una arma conlleva consecuencias y grave castigo penal.

Hoy nos explicaba el ingeniero Blumberg —y lo repitió en otras oportunidades— lo relacionado con la falsificación del documento nacional de identidad, tema respecto del cual desde hace muchísimos años los argentinos tenemos una deuda pendiente. Pero lo cierto es que no podemos seguir teniendo estos documentos; cualquier institución deportiva u obra social posee medidas de seguridad en el momento de expedir su carné identificatorio, recaudos que no se tienen con respecto al documento nacional de identidad. Esta también es una herramienta negativa,

para cometer delitos, para falsificar identificaciones y burlar a la Justicia.

Se ha hablado mucho de la rehabilitación. Y es cierto, nadie se sorprendería al escuchar el estado en que se encuentran los establecimientos carcelarios. Es más, cuando se hace una cárcel con todas las condiciones de la ingeniería mundial en la materia, con el tiempo queda absolutamente en desuso por la sobrepoblación. Entonces, el desafío y la exigencia constitucional de la rehabilitación pasan naturalmente a un segundo plano.

En nuestras cárceles los procesos de rehabilitación son prácticamente nulos. Y tal vez éste es un enorme desafío en el que no habrá posibilidad alguna de echarnos la culpa. En efecto, todos tenemos una parte de culpa y todos tenemos una parte de la solución en nuestras manos.

Estoy seguro de que las fuerzas policiales y de seguridad están necesitando un enorme debate pero, fundamentalmente, rápida respuesta. No voy a enumerar aquí lo que todos nosotros estamos imaginando. Pero sabemos que sin recursos, sin personal capacitado, estrategias ni línea de conducción, esto no va a resolverse.

También sabemos que el problema de la inseguridad es de todos. Aquí, alguien habló preventivamente de la responsabilidad de los municipios y de los gobiernos provinciales y nacional. Y acá tiene que ver la política de coordinación. A veces, un patrullero no puede entrar a un lugar porque el señor intendente hace años que ni siquiera se digna a pasar una motoniveladora para hacer posible su tránsito o porque es un lugar con yuyales de más de dos metros de altura, sin iluminación, que son foco para todo esto. Por lo tanto, los gobiernos locales y provinciales deben prevenir lo que el día de mañana van a hacer los jóvenes que seguramente incursionarán en el marco del delito.

Creo que el desafío es grande; están en juego la prevención, la educación, la capacitación y, por supuesto, el trabajo muy fuerte con la población carcelaria, haciéndolos sentir parte de un proceso en el que tienen derechos y obligaciones que cumplir y posibilidades, desde su lugar de detención, de ir generando respuestas a favor de ellos mismos y de la comunidad toda.

La marcha del jueves fue un claro mensaje que la sociedad de los argentinos queríamos

expresar acerca de la inseguridad. Desde hace tiempo que en la Argentina se habla de la inseguridad, pero reconozcamos que a partir del jueves pasado, con la multitudinaria marcha organizada por el ingeniero Blumberg, el tema se ha instalado en todos los rincones del país. Resolverlo no es tarea fácil, pero sí un compromiso de todos. En la medida en que trabajemos en consecuencia veremos un horizonte mejor.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. — Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar nuestro reconocimiento a todos los ciudadanos argentinos que el jueves pasado se han manifestado pacífica y espontáneamente en Buenos Aires —en la plaza del Congreso— y en las diferentes ciudades a lo largo y ancho de la República, para reclamar la atención de los poderes públicos en lo que respecta a un bien social insustituible como es la seguridad, la protección de la vida y de los bienes de las personas.

Estas expresiones colectivas, además de representar un ejercicio del derecho constitucional de peticionar, han tenido un rasgo esencialmente positivo y constructivo, porque además han hecho llegar a este Congreso y a los poderes del Estado propuestas que están contenidas en el petitorio que se nos entregó.

Digo esto porque esos argentinos se merecen un desagravio. La señora Hebe de Bonafini ha dicho que esas personas representan a la derecha fascista de la Argentina, expresiones que la verdad no me sorprenden de parte de quien apoya a grupos terroristas como ETA y Al-Qaeda.

Lo que estos argentinos preocupados por el país han hecho la semana pasada fue prestarle un servicio a toda la sociedad reclamando la atención de todos nosotros sobre un tema esencial y básico como es la seguridad; y lo han hecho en ejercicio de sus derechos constitucionales, de la mejor manera y de la forma más positiva, porque no sólo se manifestaron sino, como decía recién, nos hicieron llegar propuestas.

Hoy, en virtud de ese petitorio, este Congreso —a través del Senado y de la Cámara de Diputados— se reúne para comenzar a tratar los proyectos de ley que se nos piden. Concretamente, el Senado va a tratar hoy tres iniciativas. Una, se refiere al registro de la telefonía celular que utilizan los delincuentes para comu-

nicarse —de hecho en el país hay actualmente más aparatos celulares que de telefonía fija—; otra, se vincula con la represión del juego ilegal, que es un medio de financiamiento de la delincuencia; y la última norma se refiere a la modificación del artículo 13 del Código Penal en el tema de la libertad condicional. Sin duda que seguiremos esta tarea legislativa la próxima semana, dando respuesta a la totalidad de los puntos que están incluidos en el petitorio.

Pero digamos con claridad que la Argentina necesita una política integral en materia de seguridad, aunque este tema no sólo se soluciona con leyes, que creo que todos estamos dispuestos a sancionar —y digámoslo también con claridad—, superando las diferencias que tenemos y que quedaron en claro en este mismo recinto hace muy poco tiempo, cuando tratamos el pliego del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero la sociedad nos demanda que seamos capaces, aun con las diferencias que tenemos, de articular por consenso una política de Estado en materia de seguridad, que permita un esfuerzo continuado a lo largo de los años, para que la Argentina vuelva a ser un país seguro, en el cual la vida y los bienes de las personas se respeten, tal como manda la Constitución y la ley.

Y decía que una política integral en materia de seguridad requiere no sólo de leyes. Acá hay que encarar también una profunda reestructuración de las diferentes fuerzas policiales. Por supuesto que es un capítulo independiente y especial el de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sucesivos gobiernos, ministros de seguridad y jefes de policía han fracasado en la conducción de la principal fuerza policial de la Argentina. Pero ésta es una tarea que debemos comenzar ya; y habrá que hacerlo de una manera que, con el esfuerzo de todos, sea efectiva, porque el reclamo de la sociedad ha dicho, con una inusitada fuerza “basta”.

En esto hay que señalar también —y lo debemos decir quienes venimos del interior del país— que no hay fuerza nacional alguna que pueda suplantar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso es esencial su reestructuración y ser efectivos en esta tarea. Fijense ustedes: la policía de la provincia de Buenos Aires cuenta con 45 mil hombres; Gendarmería Nacional —la principal fuerza de seguridad del Estado nacio-

nal-, tiene 17 mil hombres. Por lo tanto, quienes vivimos en la frontera de la Argentina, cada vez que se dispone el traslado de efectivos de Gendarmería nacional al conurbano bonaerense empezamos a vivir una situación de desprotección en nuestras fronteras, con un sensible aumento del contrabando y del tráfico de drogas.

En consecuencia, habrá que realizar también una tarea de reestructuración y de mejoras en las policías del resto de las jurisdicciones de la Argentina, que frente al crecimiento del delito necesitan más efectivos, equipamiento adecuado y capacitación profesional.

A su vez, habrá que fijarse una política respecto de la Justicia, porque los juzgados penales, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, están colapsados por el aumento del número de delitos. Tan así es que sabemos que las causas que en definitiva se terminan considerando y tramitando son aquellas que se las considera como urgentes, porque son las que en la jerga de los abogados se denominan "causas con presos". Y en muy pocas causas llega a dictarse sentencia. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de inversión en la Justicia, tanto en la federal como en la de los diversos estados provinciales.

En cuanto al servicio penitenciario, todos sabemos cuál es la realidad. El plan federal de construcción de cárceles no se cumple. A lo largo y ancho del país las cárceles están superpobladas y los presos se alojan en las comisarías; incluso, en mi provincia hubo que alojar presos federales en contenedores situados en dependencias de Gendarmería Nacional.

Entonces, también es imprescindible invertir en materia penitenciaria, pero para todo esto se necesita un plan, un programa, una política de Estado y un esfuerzo continuo durante mucho tiempo para obtener resultados concretos.

Esta tarea requiere una articulación entre los gobiernos nacional y de las diferentes provincias, más allá del esfuerzo que pueda hacer el Congreso sancionando las leyes que las circunstancias requieren.

Es esencial esa política de Estado; esto lo ha dicho la gente en la manifestación del jueves pasado y también lo han puesto de manifiesto las miles y miles de personas que han estado firmando petitorios estos últimos días en las plazas, en las esquinas, en los quioscos y en todos

lados. Ese petitorio refleja el estado de la gente y de la opinión pública.

En definitiva, esa opinión pública y esos ciudadanos argentinos creen que el tiempo de las palabras está agotado y que es tiempo de hacer; ¡hagámoslo ya, señor presidente!

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Solicito que se verifique qué senadores están anotados para hacer uso de la palabra y que se proceda a cerrar la lista de oradores, para tener una idea de la hora de cierre de debate y votación.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se cerrará la lista de oradores...

Sr. Urquía. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Urquía.

Sr. Urquía. – Solicito que se me incluya en la lista de oradores.

Sr. Presidente. – A continuación daré lectura a los señores senadores que se encuentran anotados.

Le corresponde hacer uso de la palabra a la señora senadora Vilma Ibarra y luego harán lo propio los señores senadores Conti, Salvatori, Giustiniani, Avelín, Terragno, Fernández, Yoma, Gallego, Massoni, Menem, Urquía, Caparrós, Escudero, Perceval, Fernández de Kirchner, Losada y Pichetto.

Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros vamos a respetar...

Sr. Presidente. – Discúlpeme, señor senador. ¿Usted quiere hablar después, señora senadora?

Sra. Ibarra. – No, perdón. Antes me habían pasado una lista en la que tenía tres oradores antes de mí. Igualmente, no tengo ningún inconveniente en hablar ahora. Desde Secretaría Parlamentaria me hicieron llegar otra lista.

Sr. Presidente. – Continúa con el uso de la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: habíamos acordado que por bloque hablaría la menor cantidad de senadores posibles. Nosotros, siguiendo ese criterio, hemos sido muy prudentes y vamos a seguir siéndolo. Evidentemente, existe una desproporción en cuanto a la cantidad de

oradores de cada uno de los bloques; de todos modos —y además no tenemos autoridad para hacerlo— no vamos a impedirle el uso de la palabra a senador alguno. Simplemente, me parece que existe una urgencia para votar estos proyectos de ley y, si sigue la lista de oradores, seguramente será muy difícil de cumplimentar el propósito.

Sr. Presidente. — Se agregó la señora senadora Colombo; y hasta que no se cierre la lista de oradores, está abierta. El bloque de la Unión Cívica Radical me indicará si quiere incorporar más oradores...

Sr. Losada. — No, señor presidente. Dijimos que íbamos a ser pocos oradores.

Sr. Presidente. — Entonces, estaríamos de acuerdo en cerrar la lista de oradores.

Sr. Pichetto. — ¿Quiénes se agregaron, señor presidente?

Sr. Presidente. — El señor senador Urquía y la señora senadora Colombo.

Sr. Pichetto. — Propongo que se cierre la lista.

Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Quiero aclarar que en particular haré uso de la palabra con relación a un artículo.

Sr. Presidente. — Sí, en particular; la que lei es la lista de oradores para la discusión en general.

En consideración el cierre de la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: le solicito que haga cumplir lo acordado y que el criterio del tiempo se utilice con prudencia. En este sentido, quedamos en hacer uso de la palabra por espacio de diez minutos, a fin de producir lo que realmente importa, que es la sanción de las leyes.

Sr. Presidente. — Todos han cumplido con el tiempo de diez minutos, salvo el señor senador Agúndez, que como miembro informante

habló algo más de 20 minutos. Los demás han cumplido con su tiempo.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Entiendo que habíamos quedado en que los presidentes de bloque tenían 20 minutos y el resto de los senadores, diez. Así había sido acordado en la reunión de labor parlamentaria.

Sr. Presidente. — El miembro informante y los presidentes de bloque tienen 20 minutos y los demás senadores, diez. Hasta ahora, los senadores que hablaron usaron los diez minutos salvo los presidentes de los bloques que podrían haber usado más, usaron diez.

Tiene la palabra el señor senador Urquía.

Sr. Urquía. — Señor presidente: lo mío es en particular. Por lo tanto, si quiere eliminarme de la lista en general, inclúyame en la discusión en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: convoca este debate el grave problema de la inseguridad. Los ciudadanos masivamente reclaman a la dirigencia que se haga cargo de este problema y que aporte soluciones efectivas para que sus vidas puedan desarrollarse sin la amenaza constante de ser víctimas de delitos violentos.

En un país que está enfermo de impunidad no es malo tener un correcto diagnóstico de las causas, a efectos de poder acertar en las soluciones. No se trata sólo de repartir responsabilidades —que las hay— sino de saber qué nos pasa y por qué, para poder aplicar políticas efectivas de corto, mediano y largo plazo.

En los tiempos actuales —y poniendo como ejemplo al secuestro—, los familiares en principio dudan de concurrir a hacer la denuncia a la policía; dudan de la efectividad de ésta y de su sistema investigativo. Pero lo más alarmante es que en principio dudan de que aquel policía que les pueda tomar la denuncia, esté vinculado con las bandas de secuestradores y utilice su cargo como un mecanismo de trabajo en una asociación ilícita con los secuestradores.

También se duda de la eficacia de muchos jueces y fiscales; los honestos, los que pretenden investigar generalmente están desbordados de causas en un sistema judicial colapsado. En muchos casos, el sistema judicial —en particular

su máxima cabeza: la Corte Suprema de Justicia de la Nación— es visto como uno de los grandes responsables de la impunidad en la Argentina. Esta es la mirada que de sus instituciones tiene la ciudadanía argentina.

Por otra parte, si se logra individualizar a los culpables y hay una condena, se va a un sistema penitenciario degradado y también sospechado de enorme corrupción. Finalmente, si hay libertad anticipada, en general se otorga en forma automática y el control posterior a través del Patronato de Liberados suele ser acotado o nulo. En efecto, cuando recibimos los informes respecto de las autoridades del Patronato de Liberados, surge que hay provincias en donde el patronato es unipersonal y donde prácticamente no se hace un seguimiento de las libertades anticipadas. Por su parte, el Patronato de la provincia de Buenos Aires está en el peor de los mundos; y el de la Ciudad de Buenos Aires está absolutamente desbordado por la cantidad de temas por seguir.

Finalmente, se llama a la dirigencia política, para que se haga cargo de las soluciones, que en muchos casos también tiene gente sospechada de participar de estas redes delictivas, de connivencia con el ícono de gran parte de la policía más corrupta como es la bonaerense y de manipular la impunidad. O sea, ésta es una clara crisis institucional en la cual estamos inmersos.

Alguien se ha ocupado de hacer el listado de las leyes sancionadas por el Congreso en los últimos tiempos. Más de doce leyes son de fondo y sólo en el tema de secuestros incluimos la figura del arrepentido, creamos un fondo de recompensa para quienes aporten datos útiles a los efectos de esclarecer los secuestros, extendimos la actividad interjurisdiccional y permitimos las órdenes de allanamientos a través de sistemas informáticos. Hemos dictado enormes cantidades de leyes sobre esto. Tenemos en tratamiento, además de las que en simultáneo se están tratando en la Cámara de Diputados, otras siete iniciativas en revisión y, sin embargo, fijémonos cómo son los índices de esta clase de delitos.

Quiero significar con esto que las causas profundas de la inseguridad no se van a resolver solo con leyes. Las leyes concurren a esto, pero en un país que ha degradado sus instituciones

hasta el límite en que lo hizo la Argentina y que ha hecho de la impunidad su principal hecho cultural, este tema no lo vamos a resolver solo con leyes.

Se ha hablado mucho sobre los avances en materia de seguridad que han hecho ciudades muy importantes como, por ejemplo, Nueva York. Uno se puede preguntar qué pasaría allí si tuvieran casi el 60 por ciento de la gente bajo la línea de pobreza, un nivel altísimo de indigencia y números rondando el 15 por ciento de desocupación. No sé si se caminaría tan tranquilo por las avenidas de Nueva York.

En las grandes urbes latinoamericanas de estos países emergentes, con enorme pobreza y enorme caudal de exclusión acumulado durante décadas, hay caldo de cultivo para estos sucesos violentos. Por ejemplo, pensemos en Río de Janeiro.

Sin duda se necesitan leyes que tenemos que dictar con mucha lucidez, previendo sus efectos, estadísticas en mano, porque es mucho más deteriorante votar leyes haciendo supuestos gestos ante la sociedad que esperar mientras en el fondo, por lo bajo, sabemos que no van a tener el efecto esperado para atacar la inseguridad.

Hay trabajos que se pueden hacer ya y hay otros que son a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la lucha contra las mafias enquistadas en el poder. En esto, la policía bonaerense es un ícono donde se mezclan funcionarios corruptos de todos los poderes y las fuerzas de seguridad en una trama compleja de corrupción y delitos.

Resulta que a algunos que abortaron procesos de limpieza y de reformulación de estas fuerzas de seguridad con discursos facilistas de mano dura y de balazos por la espalda, con el objeto de ganar una elección hoy los tenemos que escuchar predicar sobre cómo se combate la delincuencia. Sin embargo, fueron ellos los que nos dejaron la bomba explosiva de la bonaerense para que estallara en el marco de la emergencia política y social del país. Una bomba que ya nos afecta a todos los argentinos.

Recordemos también lo que pasa con las fuerzas de seguridad en Santiago del Estero y en muchas otras provincias donde se han dado casos de corrupción. Incluso, hasta podríamos mencionar a la Policía Federal. Pero éstas son las instituciones que tenemos y de las cuales

nos tenemos que hacer cargo a través de políticas de mediano y largo plazo.

Digo estas cosas porque se ha escuchado a algún colega que ha hablado de que esto es responsabilidad primordial del gobierno nacional. Pero en un país que, como dije, ha hecho de la impunidad su principal hecho cultural, se ha enseñoreado también la impunidad política y la impunidad cultural. Hemos padecido una enorme cantidad de crímenes de lesa humanidad, y los que estuvieron más ligados a esos hechos son quienes quieren venir a hablarnos de cómo se combate la delincuencia.

Si algo pudimos empezar en este proceso fue el de dar pelea contra la impunidad; empezar a revisar qué es lo que pasó en nuestra Corte Suprema; empezar a terminar con la impunidad política y empezar a revisar y a transparentar las instituciones y la forma de designación de jueces y de ministros de la Corte.

La Corte Suprema ha manejado presupuestos fabulosos y sin control. Sin embargo, la Justicia está desbordada, poco modernizada y en los lugares más estratégicos prácticamente carecen de recursos para hacerla eficiente. Acá también hubo impunidad.

El Servicio Penitenciario está en el peor de los mundos y sospechado de corrupción. La serie televisiva "Tumberos" era apenas una caricatura de lo que todos sabemos que pasa con dicho servicio, donde los reclusos trabajan para muchos carceleros a fin de lograr los informes que luego les permitan la libertad anticipada.

Los patronatos de liberados funcionan sin gente capacitada, sin fondos y, en algunos casos, sin gente. Hay provincias donde no existen y hay otras donde tienen a una sola persona trabajando para seguir todas las libertades condicionales. No hay seguimiento de las libertades anticipadas en este país.

Finalmente, quiero aclarar que aquí no se trata de hacer un debate sobre los derechos humanos. No hay oposición entre derechos humanos de delincuentes y de ciudadanos decentes que desarrollan su vida pagando sus impuestos, trabajando o estudiando.

Los derechos humanos son eso: humanos. A la humanidad le costó muchos años de cárceles, torturas, prisión y muertes entender que los derechos humanos son humanos. Los que so-

mos creyentes entendemos que la vida lleva algo de divino y otros llegan a pensarlo por otras vías. Pero de lo que estamos seguros es de que los derechos humanos son propios de la condición humana. A partir de ahí, quienes cometan delitos deben ir a las cárceles y los ciudadanos decentes tienen derecho a vivir en paz y a ser protegidos para desarrollar sus vidas.

Asimismo, las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo, como lo establece la Constitución. Pero me pregunto: ¿qué sociedad no quisiera resocializar a quienes infringieron la ley y considerar un éxito reincorporarlos para una vida de bien? Ante una demanda generalizada sobre la inseguridad, inmediatamente se deben tomar algunas medidas. Pero la renovación de las instituciones asaltadas por mafias enquistadas en el poder —que se beneficiaron de esta impunidad— es un trabajo de mediano y largo plazo que requiere vocación y decisión política por parte de la dirigencia, inversión de recursos y dictar leyes a las cuales se les apliquen los fondos y se les creen los aparatos necesarios para llevarlas a la práctica. De nada sirve dictar leyes que crean institutos a los cuales no damos los fondos ni los capacitamos ni los controlamos.

El Senado tiene hoy en consideración tres proyectos de ley que fueron estudiados a las apuradas. Sinceramente, hemos llegado a este recinto con dictámenes emitidos un poco a las corridas. Pero, personalmente, quiero abordarlos en forma diferenciada.

En primer lugar, deseo hacer mención del proyecto que impide que se le otorgue el beneficio de la libertad condicional a los condenados por delitos aberrantes; entre los cuales se incluye al homicidio *criminis causae*, al abuso sexual seguido de muerte, a la privación ilegal de la libertad seguida de muerte, al homicidio en ocasión de robo y al secuestro extorsivo seguido de muerte intencional.

Para abordar este tema, creo que hubiese correspondido, en primer término, un debate serio y profundo sobre el instituto de la libertad condicional y la forma en que se aplica en la Argentina.

Mayoritariamente, la doctrina del país —y también la jurisprudencia— ha establecido que la libertad condicional no es una gracia o un derecho que tiene el condenado sino que es una

facultad que dan los magistrados cuando se cumplen determinados requisitos y condiciones de cumplimiento. Se toma como una parte del cumplimiento de la pena, que se hace en una forma excarcelada, pero con un seguimiento y control donde hay que seguir ciertas pautas de conducta. Ello implica que si no se cumplen, se la debe cumplir nuevamente en el sistema carcelario.

En el derecho comparado, nuestra ley de ejecución penal —según los grandes doctrinarios— es buena; no es una mala ley. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay dos jueces de ejecución penal absolutamente desbordados.

El problema es cómo implementamos nuestras leyes, porque los argentinos somos esencialistas en hacer buenas leyes que definitivamente fracasan y funcionan mal.

El instituto de libertad condicional figura prácticamente en casi todos los códigos del mundo de los países modernos. Ha dado excelentes resultados en Inglaterra, en Bélgica y en Holanda. Pero, claro, la Argentina no es Bélgica ni Holanda ni los argentinos somos belgas ni holandeses.

Sr. Pichetto.— Pido la palabra.

Sr. Presidente.— El señor senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Ibarra.— Sí, señor presidente.

Sr. Presidente.— Por una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto.— A los fines de hacer una reflexión, quiero mencionar un claro ejemplo de lo que implica la libertad condicional en la Argentina.

Un ejemplo paradigmático para que la señora senadora evalúe lo que significa este instituto es Alejandro Puccio, procesado por secuestro extorsivo seguido de muerte. A los amigos los levantaban, los secuestraban y, después, los mataban. Estuvo diez años preso en la Argentina y después obtuvo el beneficio de la libertad condicional y hoy tiene salida transitoria y alegremente está en la calle y va a trabajar. ¡Esto es extraordinario! Claro, en el medio está el caso Aulet y el caso Manoukian; dos asesinatos a sangre fría de amigos personales.

Ese es el instituto que hoy queremos modificar.

Sr. Presidente.— Continúa en uso de la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra.— Efectivamente, existen casos muchísimo menos conocidos y que son más graves aún: asesinatos a mansalva, a sangre fría, de gente mucho menos conocida porque, a veces, se hacen conocidos los casos más resonantes, los que recogen los medios. Sin embargo, se llegan a libertades condicionales otorgadas en condiciones absolutamente sin control.

Todos sabemos lo que ocurre en muchos de estos casos. Lo dijeron acá incluso las autoridades del Patronato de Liberados. Comentaban cómo en los institutos penitenciarios los carceleros obligan a trabajar a los condenados, incluso con fines absolutamente delictivos, a fin de comprar luego el informe favorable para obtener la libertad condicional. Después, obtenida esa libertad condicional, que de última es sólo una reducción de pena, se termina en una instancia en la que no se controla nada, ni siquiera el cumplimiento de las pautas ni su reinserción social.

Creo que lo que tendríamos que haber hecho es una revisión integral del tema de la implementación del instituto de la libertad condicional. Digo esto porque hoy vamos a sancionar que deje de funcionar este instituto —que en la práctica es una reducción de pena— para algunos delitos que consideramos aberrantes, pero se sigue otorgando en forma absolutamente irregular, sin control y comprando al Servicio Penitenciario el informe favorable a través de hechos delictivos para una innumerable cantidad de delitos que siguen azolando a la ciudadanía argentina como, por ejemplo, el robo a mano armada.

Considero que este tema de la implementación de la libertad condicional tiene que ser un asunto de política de Estado. De hecho, hoy no lo vamos a derogar para todos los delitos. Lo estamos haciendo para aquellos que, como política criminal y a nivel sociedad, percibimos como los más agraviantes, pero no estamos resolviendo el problema de la delincuencia ni un instituto que funciona definitivamente mal en la Argentina.

Con respecto a los otros dos proyectos, quiero adelantar también mi acompañamiento en forma general, aunque voy a solicitar algunas modificaciones en particular.

Tengo una preocupación muy seria con el tema del juego clandestino.

Comparto en general el espíritu del proyecto, pero creo que el tipo penal que estamos creando es abierto y, además, corremos el gravísimo riesgo de que va a ser delito en una jurisdicción lo que no lo es en otra. Además, las legislaturas provinciales van a poder crear un delito. Si hoy una jurisdicción, por ejemplo, la provincia de Mendoza, declara prohibidas las máquinas tragamonedas habrá creado el delito para aquel que comercialice máquinas tragamonedas. Mientras tanto, en otra provincia en la que esta permitido, no será delito.

Esta percepción de que los delitos pueden serlo en una jurisdicción y no en otra es un tema gravísimo para la dogmática penal. Por otra parte, desde ya estoy absolutamente segura de que no son las legislaturas provinciales las que tienen competencia para crear delitos.

Creo también que hay un problema con la imposición de pena. Se ha puesto la inhabilitación especial y, al respecto, digo que no hay autorización para hacer cuestiones ilegales. Entonces, al que explota ilegalmente, ¿lo vamos a inhabilitar especialmente a qué? Esto es como inhabilitar a una curandera para ejercer el curanderismo. Se lo puede inhabilitar a un médico para ejercer la profesión o a un comerciante para ejercer el comercio; ahora, a alguien que hace algo ilegal no lo podemos inhabilitar especialmente para que haga algo ilegal. Algo ilegal no se puede hacer nunca. Entonces, creo que es un error de técnica legislativa.

En lo que hace al proyecto en materia de telefonía celular, lo voy a acompañar porque es un proyecto necesario, aunque la reglamentación va a ser muy importante porque será de difícil implementación en algunos aspectos.

Sí quiero alertar sobre un artículo que me preocupa mucho, y lo adelanto ahora porque quiero ver si tenemos alguna alternativa. Me refiero al artículo 8º, que permite el control de las fuerzas de seguridad para ver quién es el tenedor irregular —esto es, quien no es el titular del teléfono— y el decomiso por parte de la policía.

No quisiera que a través de esta norma, por ejemplo, fuéramos proveedores de aparatos de telefonía celular para la policía bonaerense. Quiero que pensemos este tema. He hablado con un técnico de una universidad y es realmente algo gravísimo. Teniendo los aparatos se cambia el número de identificación y se puede

usar durante un año. Se pueden utilizar las líneas y clonar los aparatos. Entonces, la verdad es que existiría la posibilidad de que, por ser tenedor irregular —esto es que uno le dio a otro el celular—, la policía pueda secuestrar el aparato y, en consecuencia, me pregunto qué va a pasar con esos aparatos secuestrados por la policía hasta tanto uno vaya a buscarlo, haga el trámite y demuestre que estaba prestado.

Tengo la percepción de que convertimos en proveedores de celulares en forma irregular —para ser clonados o cambiada la identificación de clientes— para sectores de la policía muy sospechados en este momento considero que eso no es bueno y tendríamos buscar una alternativa a esta redacción o, por lo menos, poner controles muy específicos. Tal como está redactada la norma, creo que sería nocivo sacar el artículo 8º.

Las demás observaciones las formularé en el tratamiento en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. — Señor presidente: el diagnóstico de la senadora Ibarra me ha evitado profundizar en el tratamiento en general, pues lo comparto totalmente.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Conti. — Simplemente diré cosas sueltas —algunas técnicas y otras no—, sabiendo que si en algo considero que sí puedo opinar —con humildad— es en derechos humanos y en derecho penal. Por lo menos, esa ha sido mi formación dogmática.

Quiero aclarar que no creo que sea en vano que el Congreso Nacional esté hoy reunido. Tal vez seamos tardíos, a veces vagos y otras ineficaces, pero no tanto como para que las dictaduras nos hayan disuelto. Por lo tanto, celebro que el Congreso Nacional esté de pie tratando de trabajar cada vez más, y preservándonos de futuros gobiernos fascistas y dictatoriales como los que tuvimos en el pasado reciente.

Me complace haber visto los esfuerzos que hicimos desde distintas posturas ideológicas para acercar posiciones, atender el reciente reclamo legítimo y popular, asumir la crisis de inseguridad e intentar bajar no la inseguridad sino la sensación de ésta por parte de nuestro pueblo,

que no es proporcionalmente concordante con las estadísticas que tanto conoce el senador Capitanich.

Considero que estamos inaugurando un nuevo debate, en donde empezamos a escucharnos todos, y donde queda en claro que si queremos hacernos cargo del desafío de esta democracia —que es resolver el hambre y la inseguridad, como dice siempre el senador Pichetto— tendremos que ser más amplios en todos los sectores del Estado nacional. De esa manera, permitiremos que sigan vivos la señora Hebe de Bonafini y el señor Bussi, aunque pensemos totalmente diferente. No me refiero al senador sino a su padre, y digo esto porque en los dos casos se trata de personalidades estigmatizadas de nuestra cultura argentina.

Entonces, me gustaría que no sea tan pasional ni oportunista el discurso...

Sr. Bussi. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Conti. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Bussi.

Sr. Bussi. — Señor presidente: no tengo ánimo de entrar en un debate de este tipo, máxime estando hoy presente el señor Blumberg.

Simplemente quiero manifestar que es incomparable una figura con la otra. El general Bussi ha sido elegido en nueve oportunidades por el pueblo de Tucumán. Quisiera saber a cuántas elecciones se ha presentado la señora Hebe de Bonafini.

Por lo tanto, considero que la comparación, además de ser antipática, es absolutamente irracional.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. — Señor presidente: no creo que sea sólo el voto popular el que legitima la dignidad de una persona. Ni siquiera el padre del senador confió en el voto popular para matar gente, porque él no fue electo en ese momento cuando cometió esos crímenes, y adquirió responsabilidad por esos cargos.

Entonces, con el perdón del señor Blumberg, quiero aclarar que no estoy sesionando sólo para él, con quien por supuesto me solidarizo. Estoy sesionando para mi pueblo. Por lo tanto, quiero explicar algunas otras cuestiones.

Las estadísticas que aquí se han expuesto y el diagnóstico que se hace de las instituciones argentinas son valederas. Pero el derecho penal humanitario no surgió en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo por las estadísticas miradas de ese lado, sino por el recorrido de las cárceles, los lugares de encierro y los hospicios y se comprobaba que el derecho penal era un instrumento de control social al servicio de los más poderosos y en depreciación de los más pobres.

He hecho esfuerzos y concesiones al firmar los dictámenes que hoy están en tratamiento, pero no son concesiones a mis convicciones éticas o morales ni a mi ser garantista ni a mi condición de abogada penalista humanitaria. Las concesiones que he hecho son a mi formación dogmática, la que adquirí durante la dictadura, de la que fui víctima, y durante mi recorrida por el mundo, virtud y ventaja que tengo por haber sido de una clase media como la que ahora nos está reclamando y de la que formo parte.

Cuando en los foros internacionales, ya sea en épocas de dictadura o después de ella, se debatían cuestiones de derechos humanos, en Europa se discutía si una señora podía entrar a un supermercado con un caniche. Los casos que llevábamos los argentinos consistían en si había violación de derechos humanos cuando a una mujer la habían hecho parir con picana en la ESMA y luego su carcelero se apropiaba del chico. Pero en ese momento muchos argentinos, de muchas instituciones argentinas, callaban. Entonces, esto irrita pasiones como también el hecho de que Axel haya muerto y, más aún, si lo fue por inoperancia de quienes representan al Estado, por connivencias políticas o por intereses espurios. Pero es que el derecho penal y nuestras cárceles no están llenas de los poderosos que matan; están llenas de los pobres que son usados para matar o por haber cometido delitos de bagatela.

En la provincia de Buenos Aires hay procesos penales por tentativa de hurto de un peso. Y en ese caso, los tres poderes del Estado están poniendo sus recursos para abordar tremenda tontería. Eso es algo que existe; no echemos la culpa al garantismo o a la mano dura. Ya sabemos que la mano dura es puro verso de barricada. Mostrar una varita en la mano, ¡por favor! ¿Eso hace digno a un legislador?

Hoy estoy orgullosa del Congreso. Sé que este gobierno nacional va abocarse al tema dentro de las posibilidades de un país que está en crisis económica y financiera. Sé que tratará de seguir adelante y de revertir la cultura moral de los argentinos; sé que va a trabajar en un plan nacional de seguridad. Y sé que los poderes ejecutivos locales que quieran seguir de pie se van a abocar a sus planes políticos criminales de sus territorios, en concordancia con el gobierno nacional. Mientras tanto, algo podemos hacer para que la sensación de inseguridad no genere tanto temor, tanto miedo y tanta sensación de indefensión.

Comparto los señalamientos respecto de a quién le damos facultades y para qué cuando sancionamos leyes que intentan regular con buena voluntad ciertos problemas existentes. Pero un celular no es lo mismo que un arma; un arma no es lo mismo que un arma de fuego. Todas estas cosas hacen al sentido común. Entonces, dar facultades a las policías para incrementar y propiciar conductas que están arraigadas en los argentinos, como la pequeña coima, de arriba para abajo y de abajo para arriba, lo revisaría.

Pero algo que me preocupa es la utilización de la palabra inconstitucional porque parece que con esa palabra podemos obturar cualquier cosa y no quiero votar cosas inconstitucionales. Entonces, me preocupa la reformulación o la modificación del artículo 13 del Código Penal.

Muy bien dijo la senadora Ibarra que la libertad condicional no es una gracia. La libertad condicional es parte de la pena, sólo que se cumple en libertad, con custodia del Poder Judicial —que sabemos que es deficiente—, pero es parte de la pena. La gracia la pueden dar, por nuestra Constitución, el presidente de la Nación con un indulto, por más que sea un residuo que queda de la época monárquica, y los gobernadores de provincia con la conmutación de pena.

La libertad condicional que queremos acotar tiene que ver, entonces, con decirle a los jueces que esos delitos que consideramos aberrantes —que no son todos los contenidos en el artículo 80 del Código Penal, es decir, los homicidios agravados; porque lo que causa inseguridad no es la madre que mata al hijo o el hijo que mata al padre, ya que estos delitos, en general, están relacionados con un vínculo patológico especial

y, tal vez, el hijo que mata al padre o el padre que mata al hijo no andan matando por ahí—, son los que están conmocionando a nuestro pueblo y a nosotros mismos y respecto de los cuales establecimos pena perpetua. Por eso, lo que les estamos diciendo a los jueces es lo siguiente: “Señor: de ahora en adelante usted no puede dar la libertad condicional.”

Nuestro sistema penitenciario, si se cumpliera nuestra ley de ejecución, prevé un sistema progresivo. Incluso, el que tiene perpetua, a los quince años, podría empezar a hacer salidas transitorias, aunque nosotros limitemos la posibilidad de la libertad condicional. Si llega un momento en que ese interno está dando fehaciente prueba de que está en condiciones de volver a convivir en paz en una sociedad organizada, y quiere hacerlo, los ejecutivos nacional o provinciales tienen la otra parte de la pena, la pena estatal —que no es la pena judicial, la pena completa—, consistente en la facultad de perdonar y conmutar penas para que vuelvan a su casa a convivir con nosotros.

Por lo tanto, yo no veo óbice constitucional alguno para limitar la facultad de los jueces de otorgar libertades condicionales en un sistema judicial y penitenciario que no está funcionando. Y espero que esto se haga muy público, porque puede ser que la pena no constriña a alguien que quiere matar, pero que sepan que de ahora en adelante el que secuestra y mata, el que roba y mata, el mata para ocultar otro crimen, el que viola y mata, se va a pudrir en la cárcel.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.

Sr. Salvatori. — Señor presidente: creo que con las exposiciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra tenemos un panorama claro para fijar posiciones en cuanto a nuestro pensamiento y nuestra íntima convicción.

Pregunto y me pregunto quién, en la República Argentina, puede estar a favor de la impunidad, de los delincuentes que roban, matan, violan y secuestran a nuestros seres queridos sin importar edad ni sexo.

Dicen que el Congreso está actuando bajo presión. Pero yo afirmo que es una verdad a medias, ya que numerosos proyectos, que pormenorizadamente ha explicado el miembro informante, senador Agúndez, ya han sido trata-

dos por esta Cámara, y la respuesta a esa multitudinaria movilización de hace unos días es lo que sin duda queremos plasmar hoy a través de una expresión de este Senado.

Estoy plenamente convencido de que vamos a aprobar este paquete de leyes, pero sé que este paquete representa sólo el inicio –para decirlo gráficamente, el puntapié inicial– de un plan estructural, estratégico que nos debemos, fundamentalmente consensuado entre los tres poderes del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, con énfasis en la prevención del delito.

Como lo han dicho en este recinto, y lo ratifico, este no es un problema ni de mano dura ni de garantistas, ni de izquierda, ni de centro ni de derecha. Este es un problema de la gente, y nosotros somos representantes de la gente. Por lo tanto, tenemos que buscar las soluciones.

Por los motivos expresados, anticipo mi voto positivo para los proyectos en consideración.

Sr. Presidente. (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en nombre del bloque del Partido Socialista adelanto el voto positivo respecto de los expedientes S.-2.979/03 y 1.160/03, sobre regulación de la venta de telefonía celular móvil, y con relación al proyecto de ley contenido en el expediente S.-2.894/03, sobre penalización del juego clandestino. Por el contrario, votaré negativamente el proyecto de ley contenido en los expedientes S.-40/04 y 793/04, sobre modificación del artículo 13 del Código Penal.

El proyecto sobre juego clandestino pretende tipificar como delito una actividad que en el ordenamiento jurídico actual constituye una contravención. El negocio del juego clandestino, como se ha explicado aquí, mueve más de mil millones de pesos anuales, lo que permite el financiamiento de actividades ilícitas, como secuestro, lavado de dinero, corrupción policial. En este momento la represión del juego ilegal vía contravención no ha tenido resultados positivos en su aplicación. Por eso entendemos que el grado de lesividad del bien jurídico protegido es lo suficientemente gravoso como para habilitar la incorporación de dichas conductas en el Código Penal. Se procura con esto perseguir y reprimir fundamentalmente a quienes son los organizadores de la explotación, venta y comer-

cialización del juego clandestino, es decir, aquellas conductas que agreden sustancialmente al bien jurídico tutelado y que habilitarían el reproche del derecho penal.

La senadora Vilma Ibarra ha planteado algunas cuestiones sobre la constitucionalidad de la norma que estamos aprobando. Entiendo que en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se han hecho consultas con distintos constitucionalistas que, en general, han sostenido que la transformación de la contravención en delito a través de una ley nacional es perfectamente viable, y que queda resguardado el poder de policía de las jurisdicciones provinciales.

Con respecto al proyecto de ley sobre telefonía celular, basado en iniciativas presentadas por los senadores Pichetto y Jencfés, que limita de la venta de tales servicios a las licenciatarias, que prohíbe la actividad a revendedores y mayoristas, que establece que se deje constancia expresa de los datos de los titulares de las líneas, que prohíbe la activación de líneas denunciadas como robadas, que penaliza la clonación, etcétera, no tenemos objeciones ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista político que desaconsejen el acompañamiento del presente proyecto. Consideramos que puede ser un instrumento para combatir el delito.

Entrando en el análisis de los proyectos S.-40/04 y 793/04, de modificación del artículo 13 del Código Penal, debo decir que con la limitación de la libertad condicional se desvirtúa un instituto reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual vamos a votar negativamente. Ello, como se dijo aquí en distintas intervenciones, va de la mano del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que plantea el propósito de la reinserción social de todo condenado.

Cito a la senadora Ibarra cuando manifestaba los problemas de déficit de financiamiento y de funcionamiento de los patronatos de liberados, y también acerca de los problemas del seguimiento que tienen los fiscales con respecto al cumplimiento de este instituto.

De todos modos, el fondo del problema que discutimos en este caso es el absoluto fracaso del sistema penitenciario nacional. Dijo el miembro informante, senador Agúndez, casi gráfica y brutalmente: “Entra un delincuente y sale un salvaje”. Todos compartimos ese diagnóstico que el senador hizo. Se trata, justamente, de dar

respuesta adonde está la causa de ese problema: el sistema penitenciario.

Si bien entiendo que hay que rescatar experiencias positivas de los talleres de trabajo, de los sistemas de educación en determinados penales, sabemos que esas son las excepciones positivas, porque la norma es la otra, la que aquí también se manifestaba. La expresaron senadores preopinantes de distintas provincias, entre la que se encuentra también la mía, donde las comisarias se han transformado en cárceles y el estado de los presos es absolutamente inhumano. Entonces, ese diagnóstico que hacía el senador Agúndez tiene su explicación absoluta. Por eso creo que, en nuestro sistema penitenciario el problema es presupuestario y es conceptual, por ello debería haberse abordado desde esa perspectiva.

Quiero terminar con algunas reflexiones generales acerca del tema de la seguridad. Hace tiempo que la seguridad es el principal tema de preocupación de los argentinos. Todas las encuestas lo manifiestan desde hace muchísimo tiempo y debemos darle una respuesta como política de Estado. Estoy absolutamente convencido de que, frente a una situación tan compleja, en primer lugar hay que reflexionar en el sentido de que no se le puede dar una respuesta simple, una respuesta facilista. Este interrogante tan complejo está vinculado con un sinnúmero de causas, que son las que tenemos que atacar, pero si hay una causa fundamental que debemos atacar es el tema de la corrupción y de la impunidad, que es la madre de toda esta situación de inseguridad en el país.

Cuando fue el crimen de Cabezas, se puso sobre el tapete el problema de la bonaerense; cuando fue el doble crimen de La Dársena, la respuesta tuvo que ser la intervención a los tres poderes de una de las provincias argentinas. Y hoy, la importante movilización de un pueblo estupefacto ante un crimen terrible como el de Axel, hace que este Congreso esté analizando todas estas leyes.

Comparto también lo mencionado por el miembro informante en el sentido de que hace más de una década que se viene sancionando una cantidad de leyes ya integradas al plexo jurídico nacional y de que la espiral de violencia en la República Argentina ha aumentado considerablemente.

También adhiero a las cifras que mencionó el senador Capitanich; ahí vemos la situación de ese joven sin trabajo que se encuentra en la esquina de un barrio con un narcotraficante o un vendedor de droga que lo tiene a mano. Esa es una de las causas fundamentales que hay que atacar en el país.

Evidentemente, son necesarias una articulación y una respuesta eficaz de los tres poderes del Estado: del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Por otra parte, se necesitan una reforma de la Policía y una depuración en ésta para poder dar efectividad a esa respuesta; y también se necesita una articulación de los tres estamentos de los Poderes Ejecutivos: del nacional, de los provinciales y de los municipales.

Todos sentimos que la democracia nos ha enseñado muchas cosas. Creo que no existe compensación posible entre seguridad y garantías, porque cuando caen las garantías aumenta la inseguridad. Esto se ha dicho con ejemplos muy concretos. Además, creo que en la democracia la seguridad y las libertades son absolutamente compatibles. Por eso, la marcha que se realizó el jueves en todo el país nos dejó como enseñanza que, en primer lugar, hay una sociedad movilizadora que quiere participar activamente; que ya no reclama en sus casas, sino que sale a la calle a plantear su reclamo, lo cual es muy positivo; y, en segundo lugar, que lo hace en paz y reafirmando que solamente en democracia y con la Constitución se puede construir una sociedad de convivencia para no volver al far west.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. — Señor presidente: desde este bloque unipersonal de Cruzada Renovadora de San Juan no haré uso de los veinte minutos que me corresponden, sino de la mitad de tiempo y, si puedo, trataré de ser aún más breve.

En primer lugar, quisiera basar esta posición de apoyo a los proyectos de ley que estamos considerando en un refrán español que dice que tres cosas son menester para justicia alcanzar: tener razón, saberla pedir y que la quieran dar. Me baso en esto, señor presidente, porque no podemos desconocer que hoy este Congreso está sesionando motivado, fundamentalmente, por esta cruzada por la vida, por esta cruzada por Axel que se desarrolló el jueves

pasado en esta Capital y en toda la República Argentina.

La gente tiene razón y se basa en ese refrán que mencioné y que dice que para poder alcanzar justicia hay que tener razón, hay que saberla pedir y hay que estar dispuesto a darla. El pueblo, el conjunto de ciudadanos argentinos, viene a reclamar aquí –y es lógico que vengan al Congreso–, ante los representantes del pueblo, para decir que está viviendo con inseguridad y para decir que las familias tienen que vivir encerradas detrás de las rejas de sus propios hogares por la violencia desatada.

En realidad, la cruzada que se ha desarrollado por Axel es un símbolo; representa no sólo a Axel, sino también a Lucila, a Leandro, y sigue la lista; la mayoría son jóvenes víctimas de delitos, víctimas inocentes que conmueven al país y a los legisladores.

Es muy cierto lo que acá se ha dicho en cuanto a que este Congreso ha estado atento a esta situación: en los años 2002 y 2003 se han sancionado innumerables leyes que establecieron mayores penas. Se han agravado las penas para los delitos cometidos utilizando menores y también para los hechos donde se produzca la muerte de policías o de agentes de seguridad.

Asimismo, bien se dijo acá que al legislar sobre el delito de secuestro extorsivo y privación ilegítima de la libertad se estableció la figura del arrepentido y se modificó el Código Procesal y Penal en lo que se refiere a los allanamientos, al tema de la jurisdicción y se instrumentó un acortamiento de los plazos y también se estableció protección al testigo y a los imputados que hayan prestado colaboración en ese tipo de causas y se creó un fondo de recompensa.

Pero, evidentemente, todo eso no alcanza. La sesión de hoy será un aporte más de los que tendremos que seguir haciendo para sentar las bases, por lo menos, de una sociedad en la que todos nos sintamos responsables, particularmente, aquellos que cumplimos una función pública. Y nadie se debe sentir ofendido: ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni los gobiernos de provincia, ni el Poder Judicial, porque hay un reclamo popular legítimo. Tienen razón en lo que piden y lo han sabido pedir, porque lo hicieron dentro de los cauces democráticos. Quienes estuvimos presentes en esa manifestación hemos observado la madurez y la responsabilidad

de un padre que, desde el dolor y pese a todas las circunstancias y el marco en que se hallaba, mantuvo la cordura y el respeto por las instituciones para plantear su petitorio. Precisamente, solicito que quien ha recibido formalmente el petitorio planteado por el señor Blumberg –o sea, la Presidencia de este Senado– lo incorpore a este debate y a la versión taquigráfica de esta sesión.

Reitero que nadie se debe sentir ofendido ni menoscabado. Por el contrario, todos nos debemos sentir cada vez más comprometidos: el Poder Legislativo fijando una política legislativa como la que ya hicimos y que hoy estamos ratificando, comprometiéndose a seguir legislando en el mismo sentido; y el Poder Ejecutivo tratando de generar un programa, una política global e integral que determine un sistema de seguridad que aborde todas las cosas que hoy se están diciendo y que son percibidas por la sociedad: la impunidad, la corrupción y las mafias organizadas desde sectores del poder que en lugar de proteger a los ciudadanos están involucradas en estos hechos que nos avergüenzan como país y como institución.

Para poner en práctica esa política global se deberán tocar muchos aspectos de las estructuras. Esa es la tarca que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo, acompañado del Poder Legislativo y, por supuesto, del Poder Judicial, que es el tercer pilar del Estado. Me refiero al establecimiento de políticas en materia de empleo y de asistencia y, por qué no decirlo, al tema de la educación. Últimamente se produjo una quiebra en el sistema educativo que marcó la ruptura de la familia, que es desde donde se transmiten los valores. Ese proceso debe continuar en la escuela, que hoy está quebrada; por algo actualmente tenemos bajos resultados en materia de educación. Precisamente, la mayoría de los jóvenes que tienen problemas de deserción escolar pertenece a esa franja de la juventud que no trabaja, que no estudia y que, muchas veces, está dedicada a ciertos vicios y en situación de pobreza y vulnerabilidad. Justamente, es la misma franja de la juventud que, de acuerdo con los informes estadísticos, presenta mayores índices de delincuencia.

Ese es el compromiso que debemos asumir para que, como decía Viviane Forrester en su libro *El horror económico* –hablando de las

políticas neoliberales—, no se produzca el horror económico donde hay miedo al miedo. Eso es lo que tienen en este momento muchas familias en nuestro país, porque esto ya se llevó muchas víctimas inocentes. Sobre esas víctimas se levanta este símbolo, esta cruzada por la vida de nuestros hijos, como la han denominado quienes concurren a la manifestación del jueves próximo pasado, reclamando legítimamente que nos aboquemos, que nos ocupemos y que sigamos trabajando para construir una sociedad distinta.

Entonces, en ese concepto, ratificando el compromiso de todos, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos realizar una profunda revisión de la Policía y en particular la de la provincia de Buenos Aires, porque no podemos dejar de decir que la mayoría de los delitos se comete en esa jurisdicción. Las estadísticas así lo indican; la mitad de los cinco mil argentinos víctimas de delitos habitaba la provincia de Buenos Aires. Esa realidad es la que nos conmueve.

Es verdad que tal vez podemos perfeccionar muchas normas como también que ha habido un compromiso para legislar con más detenimiento alguna de las leyes que se encuentran pendientes de aprobación, pero tenemos que hacer algo. Este es el puntapié inicial que continúa la tarea que venimos realizando y que, lamentablemente, no ha alcanzado puesto que la inseguridad se cobró una nueva víctima. Y este símbolo de jóvenes que podían darle mucho al país, como nos dijo el señor Blumberg esta mañana en la reunión de comisión, es algo que debemos recatar. Y hubo muchos más que ya hemos perdido.

De modo tal que —siguiendo ese concepto— vamos a acompañar los tres proyectos de ley en consideración, ratificando nuestra voluntad de abocarnos con toda dedicación a trabajar en los temas que restan para alcanzar una solución en este aspecto, acompañar al Poder Ejecutivo en sus iniciativas y exigir al Poder Judicial la aplicación de las normas que este cuerpo se dispone a sancionar.

Sr. Presidente (Guinle). — Se ha informado por Secretaría que la presentación ha ingresado formalmente bajo el registro P-22/04 el 1º de abril a las 19 horas.

Tiene la palabra el señor senador Terragno.

Sr. Terragno. — Señor presidente: anticipo mi voluntad de acompañar los proyectos en consideración que avanzan en la dirección que se ha fijado el Senado y subrayo que no me molesta el impulso que le ha dado a esto Juan Carlos Blumberg. No me molesta porque en medio de su inimaginable dolor, no mostró sed de venganza, no llamó a la gente a armarse en defensa propia, no convocó a colgar delincuentes, no propugnó que incorporásemos al Código Penal la pena de muerte y ni postuló soluciones antidemocráticas sino que ejerció —con sensatez y prudencia— el derecho de peticionar ante las autoridades y actuó como un factor de contención y morigeración de sectores exaltados que planteaban soluciones extremas. Naturalmente, eso no me compromete a coincidir en cada uno de los puntos de su petitorio pero sí a analizarlos con el máximo cuidado y respeto.

Tengo una disidencia con quienes plantean el problema de la inseguridad vinculándolo al agravamiento de las penas. El doctor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación el domingo 25 de mayo de 2003 y, cuarenta y ocho horas más tarde, su ministro de Justicia doctor Gustavo Béliz, estaba en el Congreso de la Nación pidiendo que sancionáramos el denominado “plan antisecuestros”. En esa oportunidad nos dijo que el presidente quería que ese sea el primer proyecto que aprobara el Congreso.

El miércoles 28, tres días después de haber asumido el nuevo gobierno, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del Código Penal agravando las penas para los secuestros, y una semana después aprobamos esa ley aquí. Al día siguiente, el diario “Clarín” tituló: “Inseguridad, rápido tratamiento legislativo. Aprobaron la ley que impone penas más duras para los secuestradores.” El cuerpo de la noticia informaba: “Desde hoy, los secuestradores deberán enfrentar penas más duras cuando sean condenados.” Eso es lo que ordena la ley votada anoche por el Senado y que se convirtió en la primera sancionada por el Congreso desde que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia. La norma legisla sobre uno de los temas más sensibles de la sociedad e intenta limitar los secuestros mediante la amenaza y castigos más duros.”

“La Nación”, por su parte, anunció la instrumentación de medidas para frenar la delincuencia mediante la modificación de cuatro artículos

del Código Penal. Publicaba ese diario: "Fue aprobada la ley anti secuestros. La norma sancionada por el Congreso aumenta las penas para algunos casos de secuestros y crea la figura del arrepentido. Aval de Diputados a un programa de protección a testigos y a un fondo de recompensas."

La pena mínima aumentaba un 60 por ciento, de 5 a 8 años. La máxima, un 150 por ciento, de 10 a 25 años. Esa ley, que recibió el número 25.742, fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 19 de junio y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial. Rige desde el 20 de junio de 2003: doscientos setenta y un días después fue secuestrado Axel Blumberg.

La reforma penal que inauguró la era Kirchner fue sancionada para evitar la laxitud de los jueces y, sobre todo, para emitir una señal al crimen organizado. Las nuevas autoridades estaban dispuestas a enfrentarlo. Pero en verdad la recta aplicación del Código Penal habría bastado para mandar a la cárcel de por vida a quienes cometen delitos como este. En el artículo 80 del Código Penal dice desde siempre que corresponde la pena de prisión perpetua para el que mate con alevosía, o teniendo dos o más cómplices, o por no haber logrado el fin que se propuso.

La experiencia de todos los países indica que en el caso de la delincuencia organizada las penas sirven para aislar a los delincuentes, impidiendo que sigan causando daño a la sociedad, pero no sirven para disuadirlos de delinquir. No a los delincuentes profesionales ni al crimen organizado. Para aislar a los antisociales por un tiempo o de por vida, según la gravedad del delito que cometan, se necesitan funcionarios idóneos e intachables, fuerzas policiales profesionales con una exquisita capacidad de investigación y exentas de toda relación promiscua con el crimen organizado, el narcotráfico, la prostitución, el juego clandestino y una legislación procesal que no sobreproteja a los imputados, la rápida designación de jueces para cubrir las vacantes que se produzcan, una reorganización judicial que dé mayor actividad al sistema y un régimen carcelario con capacidad para contener a una población creciente y dar oportunidad de reeducarse y capacitarse y realizar, aun desde la cárcel, tareas sociales.

No comparto las tesis abolicionistas ni una mala interpretación del garantismo que provee

salvaguarda a quienes violan la ley. No creo que se pueda interpretar el crimen como una consecuencia natural e inevitable —no por lo menos en el ámbito individual— de la pobreza y de las condiciones sociales desfavorables.

Creo que el derecho penal es indispensable. Sin embargo, no es el principal recurso del cual se dispone para combatir la delincuencia. Los factores socioeconómicos, que no deben ser una causa de inmovilismo, no pueden ser ignorados.

El paisaje social de la Argentina es desolador. Veinte de cada cien habitantes no tienen empleo. De los que tienen la suerte de tenerlo y la gracia de estar "en blanco", el 65 por ciento gana menos de 700 pesos netos por mes. En esa situación hay dos millones y medio de personas. Se calcula que los trabajadores "en negro" son tres millones y ganan el 40 por ciento menos que los que están en blanco. Treinta y seis de cada cien habitantes están sumidos en la pobreza. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano viven seis millones y medio de pobres. Quince de cada cien habitantes sufren la indigencia. En Capital y el conurbano hay 2.400.000 indigentes.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires hay 2.800 chicos de la calle; más de 7 por manzana. La delincuencia no es la condición inevitable de la pobreza, ni la pobreza es la causa única del delito, pero hay una correlación innegable.

Como no tengo mucho tiempo para seguir explayándome, solicitaré la inserción de unas estadísticas que considero importantes. De acuerdo con esos datos, la población carcelaria de la Argentina —según el último censo— es de aproximadamente 45 mil personas, de las cuales el 95 por ciento son varones, el 95 por ciento son argentinas, el 70 por ciento son jóvenes, el 79 por ciento tiene educación elemental o ninguna, el 73 por ciento no tenía pareja estable y el 62 por ciento estaba desocupado o subocupado. Creo que el perfil es muy claro.

Ahora bien, cuando se insiste en la necesidad de promover el desarrollo económico como condición para resolver nuestros problemas sociales, hay quienes dicen que eso es "economicismo" o "reduccionismo". Cuando se subraya la importancia de redistribuir el ingreso, hay quienes dicen que eso es un resabio de ideologías superadas. Pero detrás de algunas de esas críticas hay ánimos de defender intereses ilegítimos.

El Código Penal es una tarifa que determina el precio de cada delito. Según ese código –aun antes de algún endurecimiento de penas que se pueda sancionar en estos días–, para el marginal que asalta a mano armada –así robe 10 pesos–, el precio es de 5 a 15 años de prisión; para el juez que vende sus sentencias es de 4 a 12; para el funcionario público que “mete la mano en la lata” es de 2 a 10; para el empleador que retiene los aportes previsionales a sus empleados* y luego se los guarda es de 2 a 6; para el funcionario público que cobra coima es de 1 a 6, y para el empresario que coimea es de 1 a 6. Sin embargo, el clamor es aumentar las penas por el asalto a mano armada.

La simple portación de armas de fuego sin autorización es reprimida con 6 meses a 3 años; y uno de los reclamos ha sido elevar las penas. Creo que es correcto penar con dureza la portación de armas así como aplicar criterios muy restrictivos para la autorización de esa portación. Pero eso no debería hacernos creer que el problema se reduce a quienes andan “calzados”.

En 2003 hubo 3.453 homicidios dolosos en el país, de los cuales 2.052 fueron perpetrados con armas de fuego. En el mismo año se registraron 3.176 homicidios culposos en el tránsito, no muertes accidentales; homicidios por actitud negligente, antirreglamentaria e irresponsable de los conductores de vehículos. A menudo esto no se ve porque, en general, el automóvil es conducido por quienes temen la inseguridad y, rara vez, por aquellos que son acusados de la inseguridad.

Algo similar ocurre con ciertos delitos que parecen no comprometer la propiedad ni la tranquilidad. La ley 24.769 establece penas de prisión y reclusión para quienes evaden impuestos u obligaciones previsionales así como para los empleadores que retengan aportes y se guarden el dinero o empresarios que cobren indebidamente subsidios u otros beneficios fiscales. No obstante ello, el año pasado contra 20 mil robos se registraron 18 delitos de esta naturaleza; delitos que parecen no contar. Por lo tanto, creo que ese punto hace al trasfondo de la inseguridad.

Por eso me parece bien que aprobemos las normas que hoy estamos debatiendo, así como considero correcta la sanción de aquellas que hemos tratado.

No creo que haya que ser blando en la lucha contra el delito; pero me parece que nos engañamos mucho si no tenemos en cuenta cuáles son las complejas causas de esta ola de delincuencia que estamos viviendo.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: indudablemente, ante una situación de inseguridad es importante el debate que hoy nos convoca. Y así lo estamos abordado: con absoluta sensatez y en forma integral.

– Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Fernández. – Pero más allá de reacciones espasmódicas y de sentimientos de culpa respecto de errores del pasado, se me ocurre pensar que esto no se neutraliza con una vertiginosa actividad legislativa sino con un enfoque a fondo contra lo que efectivamente se me ocurre el mal más grande de la Argentina. No se trata del endurecimiento de penas sino del tema de la impunidad. Porque más allá de la eliminación de institutos como el de la libertad condicional, creados para distinguir al reo que ha demostrado voluntad de reinserción en la sociedad; más allá de implementar una ley vinculada con la telecomunicación; más allá de abordar el tema de tenencia o portación de armas, me parece que nosotros debemos abordar un debate integral contra la impunidad.

Yo creo que el señor Blumberg, con absoluta buena fe y –por supuesto– con legitimidad, reclama modificaciones en el cuerpo normativo, pero detrás de esa gran demanda en realidad su clamor es poner un punto final a la impunidad: “nunca más” a la impunidad en la Argentina.

Es cierto que la situación coyuntural es grave, dolorosa y que existe un estado de sensibilidad frente al cual, indudablemente, no se puede ser indiferente. Pero creo que no es muy distinta la demanda por terminar con la impunidad y garantizar justicia que formula este padre que la de otros padres; que las de las madres que en su momento fueron identificadas como “las madres de Plaza de Mayo”; que la del caso “María Soledad”; que la del caso “José Luis Cabezas”; y la de tantos otros casos en los que, en

realidad, se planteó el mismo reclamo pero ante los cuales la sociedad se comportó de manera distinta.

Aquí no se trata de otra cosa que de analizar las causas. Digo esto porque el delito se incrementó en forma absolutamente alarmante en sintonía con algunos procesos que se dieron en la Argentina. Los conglomerados urbanos —fundamentalmente el conurbano de la provincia de Buenos Aires—, se incrementaron. Parece ser que hubiera un determinismo histórico y geográfico, pero en realidad no es así. Ese hacinamiento se generó por causas puntuales y concretas; las mismas que generaron concentración económica y el más sórdido proceso de exclusión social.

Lo afirmado no es dogmático ni es una afirmación personal sino que consta en todos los guarismos y porcentajes de las áreas de seguridad, tantos nacionales como provinciales.

Otro dato significativo es que la tasa de delincuencia se fue incrementando en el país a raíz de algunas condiciones sociales y de la pérdida de ciertos valores individuales en una Argentina donde, efectivamente, un grupo empezó a sufrir estos claros efectos de la exclusión social.

Si nosotros tenemos en cuenta —y esto no significa pretender justificar nada, sino analizar las verdaderas causas de los procesos que estamos viviendo— que en la franja de jóvenes de entre 14 y 25 años, dos o tres de cada diez no tienen educación, no tienen participación en ningún proceso cultural, no tienen trabajo y ni siquiera participan de actividades deportivas; con más, que dentro de ese guarismo el 30 % se encuentra en estado de absoluta vulnerabilidad, el sentido común nos indica que para el salto de esa marginalidad o vulnerabilidad a la delincuencia hay un paso muy pequeño.

También es importante destacar que el incremento de los índices delictivos en este país están vinculados con la ley de estupefacientes, fundamentalmente con la norma relativa a las libertades individuales y también con los delitos cometidos contra la administración pública. Esto tampoco es casual. Hay sectores concretos.

En su análisis de las problemáticas de este país Carlos Nino sostiene que hay una tendencia recurrente de la sociedad argentina a la ilegalidad; es decir, a ignorar las normas jurídicas, morales y sociales. Este vicio nefasto —que se

percibe a diario— se vincula estrechamente con la ineficiencia, y contribuye a explicar la evolución del país en el curso del siglo XX.

La lucha contra estos sectores se dio en distintas etapas. El Humanismo siempre luchó por la evolución, al igual que los Estados modernos. En consecuencia, luchar contra la impunidad es pelear contra corporaciones que sacan provecho de la fragilidad social. Pero esta lucha no la podemos dar en forma aislada. Las leyes son justas o injustas, no podemos hablar de leyes “duras” o “blandas”.

Creo que el problema de la inseguridad está relacionado con la impunidad de algunos sectores corporativos, con sectores que están ocultos detrás de bambalinas y con el enmascaramiento de este tipo de cuestiones.

El tema de hoy no es menor y tiene que ver con causas añejas y no con un problema normativo. Se trata simplemente de que nosotros, efectivamente, tenemos que abordar una lucha sin cuartel contra uno de los males mayores de la Argentina: la impunidad, la cual está vinculada con cosas concretas.

Un editorial de “La Nación” decía que sólo el 6 por mil de los delitos tienen procesamiento y condena, y que solamente llegan a los procesos el 30 % de los delitos. Es decir que un 70 % de los delitos que ni siquiera se denuncian porque no se cree en la aprehensión y el castigo de la delincuencia. Y esta actitud tenemos que revertirla no sólo desde actitudes legislativas sino también desde las coherencias cívicas.

La marcha del otro día será todavía mucho más importante si apostamos —desde una actitud coherente—, a revalidar algunas cuestiones que en la Argentina siguen estando vigentes. Recuerdo que cuando analizábamos la piratería del asfalto, los sectores de las cámaras empresarias nos decían que el sistema de corrupción policial era tan grande y la impunidad tan absoluta, que no había compañía aseguradora que garantizara este tipo de siniestros. O sea que existía una connivencia con sectores que supuestamente debían brindarnos protección y seguridad.

Concretamente, creo que la marcha cívica que acompañó al padre de Axel nos tiene que ayudar no sólo a modificar leyes, caso contrario, la estaríamos malinterpretando. La debe-

mos aprovechar para que esta lucha contra la impunidad y por la justicia sea la de todos.

Algunos sectores de la prensa me preguntaban dónde iba a encontrar esta situación a los senadores. Yo me imaginé no como legislador —porque uno está sentado circunstancialmente en estas bancas— sino como padre, apoyando solidariamente a un padre desgarrado y también luchando por el país de la libertad, parafraseando a Gieco. Por ese país de la libertad en el que convivimos todos, porque no se trata de un problema de interpretaciones o cualquiera partidario sino de sentido común. Y para que el país de la libertad exista debemos terminar radicalmente con la impunidad, que es el mal de todos los tiempos.

No se trata de un problema de normas sino de conductas colectivas. Contra la impunidad debemos luchar todos, los que compran en Warnes y los que denuncian y luego actúan en el retroceso del delito.

Me parece importante que la coherencia sea legislativa, política y empiece a ser cívica, para que nunca más vivamos procesos como los que hemos sufrido, que tienen mucho que ver con acompañamientos silenciosos y a veces hasta cómplices.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: con la autorización de la Cámara me extenderé un poco más de los diez minutos que me corresponden.

Como todos los ciudadanos, me siento convocado por una de las más formidables manifestaciones de indignación popular y de reclamo de justicia que se reconozca en la historia contemporánea de la Argentina. Y la militancia de un padre, que supo activar el funcionamiento de los poderes públicos buscando una respuesta a ese reclamo de justicia. Pero no sería completa la motivación que me trae acá si no dijera que también vengo por el mandato de las mamás y de los papás de las víctimas de la violencia y del delito en mi provincia.

A su vez, vengo en nombre de las Madres del Dolor, organización riojana que agrupa a las madres de las víctimas de jóvenes riojanos que han muerto y cuyas causas se encuentran durmiendo en tribunales.

Pero hoy, además de venir convocado por la memoria de Axel, por el papá de Axel y los dos-

cientos mil argentinos, vengo por la memoria de Christian Ruiz, un joven de veintidós años que fue detenido cuando pegaba afiches en contra de la candidatura del partido oficial de La Rioja y que apareció luego “suicidado” con una manga de su camisa en una puerta de la celda de la dependencia policial.

Entonces, también vengo en nombre de Christian. Y acá está la foto que me mandó su mamá, cuando se le estaba haciendo la autopsia, en donde se ven las lastimaduras de la picana eléctrica, del ahorcamiento y de la asfixia, en todo el cuerpecito de veintidós años, que fue asesinado por oficiales de la policía de La Rioja, que luego, a los tres meses siguientes, mataron a otro joven, Aldo Luna, que lo confundieron con un joven que había estado detenido y que fue testigo de la golpiza que le dieron a Christian Ruiz. Pero resulta que arrestaron a otro Luna, con algún pretexto, y también lo asesinaron en dependencia policial. Apareció colgado con una bufanda, en marzo en La Rioja. ¡Se imaginan en marzo en La Rioja, una bufanda! Pero sí; apareció “suicidado” desde la ventana de su celda, con una bufanda. También asesinado por oficiales de la policía provincial.

Señor presidente: vengo también en nombre de Hugo Peña, que apareció “suicidado” con el cordón de la zapatilla en la puerta de su Fiat 147, después de que había estado detenido en dependencia policial.

Vengo en nombre de Rita Narbona, una joven catéquista, de Chamental, La Rioja, que luego de circunstancias que nadie sabe apareció su cuerpo momificado, con la aparente intención de eliminar huellas. Habrá pasado por las manos de especialistas.

Vengo también en nombre de Romero Pagés, un cadete de la policía. La madre entregó a este joven para hacer un curso de capacitación y se lo devolvieron “suicidado”. Era abanderado de la policía.

Y gracias a Dios que no vengo en nombre de esta señora que molieron a golpes en el día de ayer, porque fue a cobrar un alquiler. Parece que el inquilino era amigo de un oficial de la policía y, entonces, la metieron presa y la molieron a golpes. Hoy sale en el diario la desmentida de la policía de La Rioja, que publica un informe médico en donde dice que es falso, que no la golpearon. Pero resulta que la pericia se

hizo sobre otra persona, que no tiene nada que ver con la que había sido golpeada; solo que tenía el mismo apellido. De este modo se pretendía "truchar" una pericia médica. Esto es de hoy.

Y digo que gracias a Dios no vengo en nombre de ella, porque si hubiese muerto hoy estaríamos en presencia de otro "suicidio" en dependencias policiales de La Rioja.

¿Qué es lo que une todo esto? Que son homicidios cometidos por oficiales de policía, que no solamente están en libertad sino que han sido ascendidos en sus carreras por el poder político. Y esto lo sabe toda La Rioja; fueron ascendidos por el gobierno provincial.

Entonces, cuando leo lo que plantearon algunos gobernadores de las provincias en esta ola de indignación popular, legítima, en torno al asesinato de Axel y veo algún titular que dice: "Solá pide más plata y más policías", o cuando Maza, el gobernador de mi provincia, hoy viene a pedir 189 millones a la Nación, pienso que el problema no se soluciona —por lo menos en mi provincia—, con plata o con más policías, ni tampoco con las iniciativas que vamos a aprobar hoy —que las voy a votar favorablemente—, porque no tienen nada que ver con los delitos, la inseguridad y el temor que sienten los ciudadanos de los dos tercios del territorio argentino.

¿Por qué digo esto? Porque si bien el secuestro extorsivo es un delito que conmociona quizás en la Capital Federal, en el conurbano bonaerense y en alguna que otra provincia —como Córdoba o Santa Fe—, en el resto del país no existe como tipo delictivo; allí hay asesinatos, que generalmente son cometidos por los oficiales de la policía. Entonces, reitero, los problemas de la seguridad no se solucionan con más presupuesto, con más dinero.

Señor presidente: cada día que pasa, por obra de la recaudación impositiva, los gobiernos provinciales tienen más dinero, pero resulta que cada día hay gobiernos más ricos y pueblos más pobres y miserables en la mayoría de las provincias argentinas. Y simplemente doy un ejemplo. Cuando los funcionarios nacionales utilizan las partidas presupuestarias que votamos nosotros y dicen que se cumple con el federalismo enviando la plata que pide cada gobernador, ¿hay un control de a dónde va a parar ese dinero, cómo se aplica el gasto? Por lo menos, que sepa

el pueblo adónde va a parar toda esa plata, que es el producto de su esfuerzo y de las provincias argentinas.

• Fijense un solo dato. Al menos en lo que hace a mi provincia, en los últimos tres años, el gasto en la administración central, que es burocracia política, creció el 85 %. Y, sin embargo, cayó el de seguridad un 30 %, el de Justicia un 25 %, el de educación un 42 % y el de salud un 35 %. Entonces, se financian las burocracias políticas de los feudos provinciales a costa de la seguridad, la Justicia, la salud y la educación de los pueblos.

Por lo tanto, como hombres de las provincias argentinas que representamos no tenemos solamente la responsabilidad de tratar los delitos federales. En este sentido, el secuestro extorsivo es un delito federal, y por eso quizá registra uno de los índices más alto de eficacia en cuanto a su esclarecimiento, porque es de jurisdicción federal. Pero los otros delitos, los que preocupan a la inmensa mayoría de los pueblos provinciales, atañen a las jurisdicciones locales y quienes los cometen son los que tienen la responsabilidad de llevar seguridad a la gente, ya que la mayoría de ellos son cometidos por oficiales de la policía.

Y a esto hay que sumarle el agravante de que las herramientas de promoción social y de asistencialismo —que teníamos que legislar y que tanto el gobierno de Duhalde como éste continuaron utilizando—, como son los Planes Jefas y Jefes de Hogar, son utilizados por personal que se desempeña en las comisarias y no en tareas de limpieza sino como escribientes, seguridad y custodia, tal como pude comprobar en una dependencia de mi provincia a la que me invitaron a visitar los otros días, y que estaba a cargo de dos policías y cinco personas, que cobraban un subsidio de 150 pesos. Esta es la seguridad en pueblos de la inmensa mayoría de las provincias argentinas.

Claro, los gobiernos provinciales vieron la veta de la mano de obra barata y descalificada, que no les cuesta —no tienen que hacer los aportes ni pagar obra social—, para hacerlos cumplir funciones de policía, de enfermería, de enseñanza, etcétera. ¿Cómo no va a estar degradada la función del Estado en las provincias argentinas?

Sr. Presidente. — Senador Yoma: la senadora Maza le pide una interrupción.

Sr. Yoma. — Con todo gusto.

Sr. Presidente. — De todos modos, le advierto que ya pasaron los diez minutos. Usted pidió una extensión, pero...

Sr. Yoma. — Ya termino.

Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Maza.

Sra. Maza. — Señor presidente: le solicito al senador Yoma que se aboque al tema en debate y no traiga la interna de la provincia cada vez que habla, porque lo que estamos tratando ahora es el aumento de las penas a los delincuentes, sea quienes fueren: policías o no. Entonces, le pido que por favor se limite al tema que estamos tratando.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: le quiero decir a mi distinguida colega que la foto de estos chicos muertos, asesinados por la policía del gobierno al que ella pertenece, no es una interna. Estos son asesinatos cometidos por policías que han sido ascendidos por el poder político. Acá no hay interna. Este año no hay elecciones; nadie está en campaña. Estamos diciendo la verdad. Si no, no vengo acá. Yo represento al pueblo de una provincia. No solamente voy a legislar e interesarme por delitos federales. También necesito hacer honor al pueblo que represento y atender sus necesidades.

Por eso mi reclamo no solamente está dirigido a los gobiernos provinciales cómplices y apañadores del delito, a los jueces socios de los malos policías y a los sistemas políticos corruptos y feudales, que cada día necesitan más recursos —y los sacan de la seguridad, la Justicia y la alimentación de la gente—, para poder financiar ese aparato corrupto, sino también a los funcionarios del gobierno nacional. En efecto, ellos no pueden seguir disponiendo de los dineros públicos de la Nación, que votamos en el presupuesto, sin tener un efectivo control sobre su aplicación, porque la autonomía de las provincias es del pueblo de las provincias y la Nación tiene que garantizar que ese dinero se destine a los fines para los cuales ha sido votado por este Congreso. La autonomía no es para que no se controle a los gobiernos provinciales. Ese es un mal concepto de las autonomías. La autonomía es de los pueblos, para que se garantice la calidad de vida.

Las madres de estos chicos, que desde hace cuatro y cinco años dan vuelta a la plaza en La Rioja, exigiendo la misma justicia que el papá de Axel requirió días atrás en la Plaza del Congreso.

Sr. Presidente. — Senador Yoma: la señora senadora Martínez Pass le solicita una interrupción.

Sr. Yoma. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Martínez Pass.

Sra. Martínez Pass. — Señor presidente: la semana pasada tuve la gran suerte de participar en el III Congreso Mundial de Familias, en México Distrito Federal.

Quiero solidarizarme, porque puntualmente lo que se necesita es que se aprueben estas iniciativas, que son más que necesarias.

Yo también soy de una provincia, que es rica en recursos, pero pobre por la desocupación. Por suerte quizás ahora, a partir de algunas medidas del Poder Ejecutivo, vamos a poder potenciar la producción y riqueza de la provincia de Entre Ríos.

También quiero decir como madre, que mis hijos —que son seis—, tienen un capital social interno importante, que es la familia. La familia existe antes que las leyes, antes que los gobiernos. Todos esos chicos delincuentes y jóvenes de la Argentina y de tantos países del mundo carecen de familia.

Cuando a veces vemos un chico que viene a mi casa a buscar alguna ayuda y llega sin calzado... También el padre de Axel representa a toda esa familia que hoy está padeciendo, porque ve el arma, la intimidación.

Entonces, hay que aprobar esto que es eminente y necesario. Porque la juventud que hoy está en las cárceles también es una realidad. La falta de la figura paterna en los hogares también es una realidad...

Sr. Presidente. — Senadora...

Sra. Martínez Pass. — Pero simplemente, la provincia de Entre Ríos está en la frontera con el Uruguay. Y cuando uno ve, por ejemplo, que hoy aprobamos un puente vecinal entre las ciudades de Salto y Concordia, y a veces escucha que la gente tiene miedo de que los delincuentes crucen para el otro lado, porque las leyes en el Uruguay son más ordenadas, también

es un sentimiento que tenemos todos los argentinos; y que sufrimos.

Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: las figuras que tratamos acá se refieren a delitos que son de jurisdicción federal. Pero la mayor parte de los delitos son de jurisdicción local, que persiguen las policías y Justicias provinciales, con lo cual también es necesario que planteemos qué vemos como solución frente a eso.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior desde 1992 prevé el Consejo de Seguridad Interior –que tiene como funciones el coordinar con las policías provinciales las políticas de seguridad, equipar a las policías provinciales y funcionar de manera coherente combatiendo el delito organizado que va de jurisdicción a jurisdicción–, pero éste no se reunió en 2001 ni tampoco en 2002; la última vez que lo hizo fue en diciembre de 2003. Nunca más se reunió.

Reitero: no solamente el pueblo del conurbano bonaerense está sufriendo y está angustiado por la inseguridad sino también el pueblo de todas las provincias del país.

En lo que hace a los tipos delictivos que estamos tratando, reitero que los voy a apoyar, aunque con algunas dudas desde el punto de vista práctico. Al respecto ya manifesté mis dudas cuando se trató la última ley antisecuestro. En esa ocasión voté en disidencia ese proyecto, porque entendía que iba a traer problemas entre jueces y fiscales al otorgarles a estos últimos la conducción de la instrucción. De hecho, en el caso dolorosísimo de Axel lamentablemente se dio lo que yo planteaba.

La lamentable actuación del fiscal, el cuestionamiento a su actividad, la superposición y el tironeo de jurisdicciones y de competencias con el juez fueron los elementos constitutivos de este drama que hoy está viviendo la familia argentina con el asesinato de Axel.

Creo que esto hay que corregirlo. O se avanza en la profundización del sistema acusatorio o volvemos a lo de antes. Pero este tironeo entre jueces y fiscales, cuando está en peligro la vida de una persona secuestrada, es de altísimo riesgo para los ciudadanos.

Y esto lo dije cuando se sancionó esa ley; me opuse a su sanción, advertí los problemas que

íbamos a tener. Y de hecho, ayer la Cámara Federal de La Plata, con el voto de los doctores Frondizi y Schiffrin, declaró la inconstitucionalidad de la ley antisecuestros votada por este Congreso, porque les otorga a los fiscales facultades que son de los jueces.

En este tipo de temas –insisto– no podemos experimentar; busquemos hacerlo en otro tipo de delitos. Que experimentemos en el juego clandestino quizá hasta puede ser viable o correcto, pero cuando se trata de secuestros, en donde está en juego la vida de una persona, no se pueden experimentar procedimientos o tipos penales, porque sucede lo que ocurrió lamentablemente con Axel; y lo que va a seguir ocurriendo si no se define quién tiene la competencia y la dirección en la investigación de un procedimiento.

A pesar de las dudas que tengo voy a votar afirmativamente el proyecto, esperando que el Poder Ejecutivo lo reglamente correctamente, teniendo en cuenta ciertas cuestiones, como por ejemplo el caso de la telefonía celular. Obviamente, hay situaciones en las que el fenómeno del delito en el conurbano bonaerense no tiene nada que ver con la telefonía celular. En las poblaciones rurales de todo el país las tarjetas se venden en los almacenes y hay quienes van al pueblo para comprar unas cuantas tarjetas y las revenden en las escuelas, hospitales y centros de salud.

Nosotros no vamos a lograr que Telecom abra una delegación en Vinchín o en Jagüé, provincia de La Rioja, para vender tarjetas; y me imagino que el Poder Ejecutivo contemplará estas situaciones en la reglamentación para que ésta sea flexible y no cree más problemas de los que ya genera.

Por otro lado, en cuanto al juego clandestino, ¿quién duda de que detrás de éste está la policía y que es una de las cajas de esa institución, junto con la trata de blancas? Si no atacamos de raíz el problema y si la conducción política de los estados provinciales no lo asume como propio y lo sigue transfiriendo a otros, por más que aquí agravemos las penas lo único que vamos a lograr es que vayan presos los quinieleros y que los oficiales de policía que los envían sigan manejando el juego clandestino o que se arme el mercado negro de celulares y de tarjetas, en el que seguramente habrá algún oficial de policía detrás.

Todo esto ocurre en las provincias. No soy fóbico de los policías; al contrario, tengo un enorme afecto y respeto por la policía de mi provincia y por la inmensa mayoría de policías honestos que ganan dos pesos con cincuenta y arriesgan su vida. Pero los oficiales de policía que en varias provincias están protegidos por el poder político, son los que delinquen y que están generando inseguridad. Eso es responsabilidad de los jefes políticos de las provincias; no del gobierno nacional ni de este Congreso, que constantemente sanciona leyes agravando las penas; se trata del ejercicio pleno del poder que le dio el pueblo en beneficio de la gente.

De la manera en que ustedes están tratando estos temas acá —me refiero a usted, señor presidente, con todo respeto, y a los presidentes de bloques— es como se cometen los errores en los que hemos incurrido. De esta forma hemos cometido el error de dar a los fiscales la dirección de los procedimientos de secuestros, porque hoy están peleados los jueces con los fiscales.

Cuando se produce el secuestro de una persona que está en situación de riesgo de vida primero tienen que atender las internas de los jueces y fiscales y después ver qué pasa con la vida de ese ciudadano. Pero eso sucede porque no se permiten el debate y el análisis profundo de los temas, ya que únicamente se sancionan los proyectos para dar las respuestas legítimas que hay que dar, pero ello no puede ser en desmedro de un análisis profundo y medurado de cuáles son las causas y las herramientas para la lucha contra el delito.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. — Señor presidente: hoy estamos sesionando para tratar una serie de iniciativas que intentan dar soluciones parciales a un problema que preocupa a la ciudadanía y que ocupa a la dirigencia política.

No estamos comenzando un camino, porque debo ser justa y decir que yo me he incorporado hace muy poco al Senado, pero, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, este cuerpo ha trabajado durante los últimos tres o cuatro años tratando de generar distintas leyes con la intención de hacer frente a los nuevos y mayores casos de delitos que se perpetran contra la propiedad y las personas.

En honor a la brevedad, quiero anticipar que comparto en general los proyectos, pero no comparto casi nada de lo expresado por mi colega el senador Yoma, porque no comparto la visión de que todas las policías y todos los gobiernos provinciales son ineficientes en lo que respecta a la seguridad y a la aplicación de las leyes. Y como además soy hija de policía —de la vieja policía de territorios nacionales— tengo un profundo respeto por estos trabajadores que arriesgan cotidianamente su vida en beneficio de la sociedad, generalmente muy mal pagos y, muchas veces, muy maltratados.

No me voy a explayar demasiado porque ya lo han hecho sobradamente los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, pero dejo sentado que voy a votar afirmativamente la propuesta de modificación al Código Penal en cuanto a las limitaciones a la concesión del beneficio de la libertad condicional.

También suscribo el cambio de ciertas faltas contempladas en los códigos de faltas provinciales. Me refiero al delito del juego ilegal o clandestino y a las irregularidades en que pudieran incurrir los agentes del juego legal al traspasar apuestas al juego ilegal, ya que no desconozco —como tampoco lo desconoce ninguno de los que aquí están sentados— la relación directa que tiene la utilidad superlativa que producen el juego ilegal en el país y su transferencia casi automática a la financiación de actividades delictivas y al mantenimiento de determinados statu quo, sobre todo aquellos relacionados con la explotación sexual de las mujeres, de los niños, de las niñas y de los adolescentes.

En cuanto a la regulación que se está planteando para el mercado de la telefonía celular, señalo que la comparto en general, no obstante lo cual tengo algunas dudas en particular. Concretamente, me preocupa cómo ha quedado redactado en el dictamen de comisión el artículo 4º de este proyecto, que establece que se prohíbe la venta, cesión y/o transferencia de teléfonos celulares.

En este sentido, voy a plantear una situación casi doméstica: me parece irracional que yo no pueda ceder un teléfono mío a uno de mis hijos. Asimismo, me parece una incoherencia que en el artículo 4º se establezca esa prohibición y en el 5º se diga que está permitida pero acotada a determinadas leyes. Aquí caben dos alternati-

vas: o no se prohíbe o se acepta la transferencia. Por consiguiente, creo que debería suprimirse el artículo 4°.

También me preocupa, como lo sostuvo el señor senador Yoma, la prohibición de la venta de tarjetas de telefonía celular. Los que venimos del interior de las provincias que constituyen la Nación conocemos una realidad: el aislamiento de poblaciones muy pequeñas que, a través de la telefonía celular o fija, han logrado comunicación con el resto del mundo. Para ellos todavía no ha llegado Internet, porque resulta muy caro; se trata de gente que está muy lejos de la General Paz y del conurbano bonaerense. Muchas veces, un teléfono celular –generalmente, los viejos teléfonos celulares conocidos como “ladrillos”– es el único modo de comunicación de nuestros puesteros, de la gente de las pequeñas poblaciones y de las escuelas rurales a las que no llega el tendido de líneas y no disponen de teléfonos fijos.

Realmente, no me imagino cómo el Poder Ejecutivo nacional va a poder ordenar y determinar un registro único de expendedores de tarjetas de crédito telefónico. Creo que esto es absolutamente efectista, poco práctico y de pocas posibilidades de aplicación.

De lo contrario, estaremos sometiendo a la gente que está radicada en los lugares más inhóspitos, a los pobres que no pueden pagar un abono mensual de telefonía y que solamente utilizan la tarjeta de crédito telefónico para llamar en caso de emergencia, a que no pueda contar con un servicio que hoy –en el siglo de las comunicaciones– es absolutamente necesario. No obstante ello, plantearé estas objeciones en el tratamiento en particular.

En definitiva, en general estoy de acuerdo con las normas que se están proponiendo, ya que estaremos avanzando algunos pasos para darle a la Nación nuevos instrumentos en la batalla contra la inseguridad. Pero también quiero decir que no estaríamos cumpliendo con nuestro mandato si creemos que con la aprobación de estos proyectos damos una solución integral al problema de la seguridad.

Con la misma convicción con que voy a votar, también voy a decir que no estoy dispuesta a sancionar espasmódicamente leyes que no resuelven problemas globales porque no estaría cumpliendo acabadamente con el rol que me ha

otorgado el pueblo de mi provincia! Pasado este momento de alto impacto emocional al que todos estamos sometidos, en el que un padre desgarrado por el dolor pide decisiones de los cuerpos legislativos, deberemos sentarnos a trabajar con todos los sectores –el Poder Ejecutivo nacional a la cabeza– y con los Poderes Ejecutivos provinciales a fin de definir una política de seguridad en serio que garantice el funcionamiento de todas las pautas contempladas en esta temática. No podremos hablar de seguridad si no tenemos una policía equipada, instruida y con el presupuesto adecuado.

No comparto lo dicho por el senador Yoma. El presupuesto de la policía hoy está fundamentalmente destinado a pagar los salarios y el equipamiento es muy difícil para las provincias. La incorporación de nuevas tecnologías es mucho más difícil y la generación de capacidades de cuerpos criminalísticos es peor aún.

Por otro lado, tenemos que trabajar seriamente sobre el problema penitenciario. Hoy, el sistema penitenciario es la universidad del delito; quien entró por un delito menor termina haciendo un máster en un delito de alta gravedad.

Por último, deberemos encontrar la forma de que, sin inmiscuirnos en las facultades del Poder Judicial, se logre dictar medidas para que la Justicia cumpla acabadamente su rol. Pero también a la policía le debemos garantizar un equipamiento que hoy –hay que admitirlo– les está vedado.

Con este compromiso, voy a votar los proyectos en consideración.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – Señor presidente: el padre de Axel cumplió su obligación moral y transformó el dolor en acción para resguardo y solidaridad con otros padres y sus hijos.

Las doscientas mil o más personas que actuaron cumplieron con su obligación y nosotros vamos a cumplir con lo que corresponda dentro de un marco legal, claro y concreto.

Subyace en el sistema penal argentino la tipicidad traída de la doctrina germánica. En consecuencia, tenemos que analizar las leyes y los artículos para ver si los jueces estarán en condiciones de interpretar nuestra decisión. Además, quiero recordar que la palabra de los legis-

ladores es la que muchas veces define el sentido de las sentencias de los jueces.

Junto con el bloque voy a votar favorablemente la modificación del artículo 13 del Código Penal. Pero entiendo que es una parte de un todo. En consecuencia, como considero que deben modificarse otros artículos y otras normas, voy a hacer entrega de un fundamento escrito para que sea integrado al Diario de Sesiones y supla las palabras que podría señalar y que, en este caso, no van a ser sustanciales ni necesarias.

El artículo 13 es concreto y expreso. Está bien definido. Podemos estar de acuerdo o no acerca de si la técnica penal es correcta, pero igualmente vamos a votar favorablemente.

Con respecto al segundo tema que vamos a tratar —y señalo que ya la documentación pertinente se insertó en ocasión del tratamiento en la comisión—, voy a hacer las siguientes observaciones directamente relacionadas con el articulado, ya que el objetivo esencial de todo esto era que, a través de la técnica, se pudiera determinar y definir quién hizo uso de un celular. Podemos poner todo lo que nosotros queramos, pero lo fundamental es saber si todas las decisiones van a dar a la Justicia indicios suficientes para conocer quiénes están actuando.

Aclaro que el artículo 1º fue modificado. Parecía que transformaba en monopolio toda una serie de situaciones, pero por suerte ha quedado claro.

Entendemos que el artículo 5º —no el 4º, como dijo la senadora preopinante— debe sacarse e integrarse al 2º, porque genera la confusión que manifiesta la propia senadora.

El artículo 5º dice: “La transferencia de los equipos o terminales móviles se hará en las condiciones establecidas en el artículo 2º de la presente ley”. Pero fíjense que se pensó que estaba autorizando y modificando el artículo 4º. El artículo 5º tiene el mismo sentido. Se trata de las mismas condiciones que el 2º, que se remite a las empresas que comercialicen equipos o terminales móviles.

Sr. Presidente. — Senador Massoni: el senador Yoma le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Massoni. — Con todo gusto.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: recién estaba hablando con la senadora preopinante acerca de la cuestión que está planteando el senador y, en ese sentido, creo que se pueden salvar algunos problemas de interpretación o de aplicación que pudiese tener la ley, con un último artículo que diga: “La vigencia será después de la reglamentación”. De esta forma, que sea el Poder Ejecutivo el que reglamente la operatividad de estos artículos para evitar que se generen problemas no buscados por la norma.

Sr. Presidente. — Senador Massoni: el senador Capitanich le pide otra interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Massoni. — Cómo no, señor presidente.

Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: creo que todas las observaciones que se han formulado son razonables y pertinentes. Pero me parece que podemos tener una solución alternativa, que es la de establecer lo siguiente en el artículo 4º: “Prohíbense la venta y/o cesión, la importación y la exportación temporaria de equipos o terminales móviles usados”, y dejar el artículo 5º redactado como está, de manera tal de no tener el concepto de transferencia en los artículos 4º y 5º anulándose entre sí. De esta forma, ambos remitirían a las características que tiene el artículo 2º a los efectos de su identificación.

Sr. Presidente. — La Presidencia propone terminar el debate en general.

Continúa en uso de la palabra el senador Massoni.

Sr. Massoni. — Por una cuestión de economía procesal he realizado esa manifestación, hecho que podrá ser solucionado en el momento en que se analicen los artículos.

Ahora bien, haré un análisis general para no hablar otra vez innecesariamente.

El artículo 6º —que pareciera otorgar facultades al Poder Ejecutivo— dice: “La venta de tarjetas de telefonía destinada al uso de equipos o terminales móviles se hará sólo a través de las bocas de expendio autorizadas por el Poder Ejecutivo”. ¿Qué significa esto? ¿Que el Poder Ejecutivo solamente deberá fijar las condiciones para asegurar la identificación personal, filiatoria y domiciliaria, limitando su facultad, ya que no va a seleccionar sino a fijar las condicio-

nes para que cualquier persona pueda actuar en el mercado en lo que hace a su comercialización?

Considero que debe hacerse un análisis mucho más profundo de este punto porque no queda claro.

Por su parte, en el artículo 3° se prohíbe la activación o reactivación de equipos. Y aquí me parece necesario hacer un agregado al párrafo a los fines de aclarar este punto, cuyos fundamentos se encuentran en la disidencia parcial oportunamente presentada.

Finalmente, reitero que en el artículo 6° resulta necesario definir claramente la función del Poder Ejecutivo: si seleccionará a quienes van a vender o dará las condiciones objetivas para que, aun en los pueblos, pueda actuar cualquier comerciante o interesado.

Po otro lado, el artículo 9° alude a un tema delicado, porque establece facultades a las fuerzas policiales y de seguridad para verificar la condición de usuario y cliente del servicio de comunicación móvil y, en caso de comprobarse la tenencia irregular, proceder al secuestro del equipo, dando debida intervención a la autoridad judicial o al Ministerio Público competente. Colofón de todo esto es que la policía no puede secuestrar porque no tiene el dato; en caso contrario, nos encontraríamos ante situaciones irregulares de difícil manejo.

En consecuencia, considero que se debe avanzar aceleradamente en el tema de la seguridad. Además, debemos aclarar que las garantías no son individuales sino para toda la sociedad y que el contenido de la norma constitucional es el resultado de más de dos mil años de presencia del hombre sobre la Tierra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: estamos sesionando en un clima que pocas veces hemos vivido en este Parlamento. Lo hacemos con el corazón angustiado por la situación planteada por un padre dolorido por el cruel asesinato de su hijo. Este padre no se queda sentado, reclama justicia, se presenta ante todos los medios de comunicación y moviliza a gente que responde espontáneamente para acompañarlo en su dolor. Y hemos visto esta manifestación que por sus características, prácticamente, no tiene parangón en la historia del país. La ciudadanía

ha venido al Congreso a reclamarnos que hagamos lo que tenemos que hacer para terminar con este clima de inseguridad que vive el pueblo argentino.

Por ello me parecen lamentables ciertos comentarios que han vertido algunos sectores que son perfectamente reconocibles, tratando de menoscabar esta marcha, sectores que hablan de una marcha de la clase media, sectores que dicen “Mirá la ropa que usan”, sectores que utilizan cualquier argumento para tratar de descalificarla.

Yo digo: ¿puede haber algo más legítimo que un padre que reclama justicia por el asesinato de un hijo? Los que alguna vez hemos pasado por situaciones similares, como la del secuestro de un hijo, podemos comprender la angustia del padre de Axel. Si tuvimos la suerte de que nuestro hijo regresara con vida, él no la tuvo y comprendo su dolor, infinitamente mayor que la angustia y el dolor que pudiéramos haber sentido.

¡Esto es tan legítimo, señor presidente! Por eso me ha parecido lamentable que acá se quieran traer cuestiones de la interna de una provincia, porque no están a la altura del reclamo del padre de Axel. Acá hemos venido con un temario para tratar cuestiones que hacen a la seguridad ciudadana por casos concretos. No hemos venido a dilucidar internas provinciales ni a dilucidar los fondos que se remiten o no, o la coparticipación.

En honor a eso no voy a entrar en ciertas cuestiones. Sólo quiero dar un dato.

Mi provincia, a la que se quiere menoscabar –y sé que el próximo paso va a ser pedir la intervención–, es la que tiene menor cantidad de delitos en el país después de Tierra del Fuego. En este libro que acaba de salir y que obra sobre mi banca tengo las estadísticas sobre inseguridad ciudadana. El último dato de 2002 indica que en mi provincia hubo sólo dos homicidios dolosos. La provincia de San Luis está a la par, también con dos homicidios dolosos; Tierra del Fuego no tuvo ninguno. Todas las demás tienen cifras superiores.

Entonces, si vamos a hablar de estos temas tenemos que hacerlo con seriedad, no tratando de disminuir el nivel de una discusión que tiene que ser en serio y debe servir para solucionar el problema de la inseguridad, que nos angustia a todos los argentinos.

Señor presidente: parece que uno de los problemas que afronta la sociedad argentina es que se han perdido o disminuido los frenos inhibitorios que se tienen frente al delito. Han caído. No hay escrúpulos. Por eso, es cada vez más creciente la criminalidad. Lo que tenemos que ver es por qué han disminuido esos frenos inhibitorios que una persona normal tiene frente al delito. Hay muchas causas. Muchos dicen: "Es la droga". Sí; efectivamente, la droga disminuye los frenos inhibitorios. El alcoholismo también los disminuye, pero también hay otras causas.

Se habló de la pobreza y de la marginalidad. Es cierto. También sirven para explicar ciertos tipos de delitos; aunque no todos. No se me va a decir que el secuestro y el asesinato de Axel fueron cometidos por gente que tenía hambre o era menesterosa. Todos estos delitos —hay bandas, están armados y cuentan con logística— no tienen nada que ver con la pobreza. ¡Es un insulto a los pobres decir que estos delitos los comete la gente pobre! Son cometidos por delinquentes natos, salvajes, bestias humanas que asesinan a un chico indefenso, como un mensaje que hay que tener en cuenta para el próximo secuestro, es decir que deben pagar porque si no van a matar al secuestrado.

Señor presidente: debemos ver que llegamos a esto porque creo que no tenemos una política en materia penal ni criminal.

Hemos venido emparchando el Código Penal, lo cual no es bueno. Pero también es cierto que lo hemos hecho con requerimientos de tipo espasmódico. Si matan a policías, sancionamos leyes agravando las penas para los que matan policías; si roban vacas, elevamos la pena para los que cometen abigeato; si roban autos, agravamos las penas vinculadas con el robo de automotores... Pero no es así como se tiene que legislar. Tiene que haber una política penal, criminal y carcelaria. Eso es lo que está faltando y lo que deberíamos darnos.

Se actúa con mucha improvisación, y un ejemplo de ello es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con el cambio de los ministros de Seguridad a cada momento. Se trata de cambios improvisados que denotan la inexistencia de una política de seguridad definida.

Lo mismo sucede en el orden nacional. Muchas veces hemos visto anuncios que están más dirigidos al marketing político que a lograr la

efectividad de las medidas. En junio de 2003, el ministro Beliz se reunió con el ministro de Seguridad de Buenos Aires e impulsó la creación de un Estado Mayor Conjunto Metropolitano para combatir al delito. Pero todavía no hay resultados o, al menos, no los conocemos.

En noviembre del año pasado, después del carcerazo por la aparición —mutilado— del muchacho de apellido Belluscio, nuevamente se anunció en la provincia de Buenos Aires otra serie de medidas que también incluía al Estado Mayor Conjunto Metropolitano, el cual ahora —otra vez— se quiere relanzar.

Se trata de acciones espasmódicas con las que no se conseguirá absolutamente ningún resultado. Son anuncios para el marketing político, como cuando dos días antes de las elecciones salió en los diarios "Bajaron un 5 por ciento los delitos", pero dos meses después aparece publicado que, contrariamente, los delitos habían aumentado. Y así vamos errantes por el camino sin encontrar una solución, porque no hay una política definida. Hay muchas otras cosas que también influyen en este aumento de la criminalidad que nos conmueve.

La inseguridad tiene dos aspectos: uno es el objetivo, es el riesgo que tenemos todos de ser víctimas de un delito; y el otro es el subjetivo, es la sensación que tenemos de que vamos a ser víctimas de un delito, es la inseguridad y la incertidumbre, que afectan la calidad de vida, la credibilidad de las instituciones y hasta la economía. Por lo tanto, tenemos que encarar la situación con un sentido integral y decir las cosas por su nombre.

En el año 2003 el ministro Beliz anunció cuarenta medidas en el marco de un plan fenomenal. Sólo citaré dos de ellas para que vean que a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Una de las medidas era un premio por productividad a los comisarios, es decir, cuanto más delinquentes "cazaran" tendrían un premio mayor. En consecuencia, ¿qué garantías hay de que no vayan a fabricar delitos para tener el premio?

La otra era que las comisarías tenían que hacer un mapa del delito para compararlo con el que hagan los vecinos. ¿Se imaginan a los vecinos haciendo un mapa de los delitos, que requiere técnica, soporte informático, etcétera? Con medidas de este tipo no creo que va-

yamos a avanzar mucho en la eliminación de la inseguridad.

Pero hay otras cosas. Existen ciertas teorías en danza –de juristas y penalistas– que son minimalistas en el derecho penal, son abolicionistas del derecho penal. Y eso también tiene efectos, porque pareciera que el derecho penal es un pecado. Hace pocos días estuvo acá el doctor Julio Maier, cuando tratamos el proyecto vinculado con la Corte Penal Internacional, y vertió conceptos que me dejaron azorado. Dijo: “A pesar de haberme dedicado al derecho penal toda mi vida, no creo en el derecho penal. Ha contribuido a solucionar muy poquitas cosas o directamente no he solucionado absolutamente nada. La pena nace, prácticamente, como un reconocimiento de esa organización que tenemos, que significa atribuir al soberano conductas que, si las realiza otro, serían antijurídicas”. Pone como ejemplo la pena de muerte. “La pena de muerte no es más que un homicidio, no consiste en otra cosa que en matar a otro directamente. La privación de libertad, si la realizo como juez, si la dicto en una sentencia, en realidad, es lo mismo que si me llevo a alguno de ustedes a casa y lo encierro.”

Yo no ataco a este hombre, pero si él enseñó derecho penal durante cuarenta años, supongo que alguno de sus alumnos habrá sido juez, y probablemente tengan en cuenta estos principios cuando apliquen el derecho penal. El doctor Maier dijo: “El derecho penal elige a las víctimas, elige a las personas sobre las que va a hacer recaer los efectos del delito y, además, las víctimas son señaladas de antemano, no digo individualmente, pero el núcleo de donde parten es, en general, de quienes tienen menos posibilidad de defenderse frente a esta agresión que significa el derecho penal”. Para el doctor Maier el derecho penal es una agresión.

También conocemos otros fallos. En ocasión de la audiencia pública del doctor Zaffaroni vimos el fallo Tiraboschi, en donde no se consideró violación cuando un hombre –una bestia– tomó a una criatura y la hizo practicar *fellatio*. Se dijo que jurídicamente era un atenuante el hecho de que se la haya hecho practicar en la oscuridad y, por lo tanto, no hubo violación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que transmitimos a la sociedad cuando hay jueces que no aplican el derecho penal como corresponde?

Sr. Presidente. – Señor senador: le agradezco que vaya redondeando.

Sr. Menem. – Sí, pero le pido la misma tolerancia que ha tenido con otros colegas.

Sr. Presidente. – Adelante unos minutos más.

Sr. Menem. – No se trata de garantistas o no garantistas, como aquí se ha dicho. Acá se trata de a quién vamos a proteger. Es un problema de protección de los derechos humanos de todos, y no de algunos.

Cuando hablamos de derechos humanos yo digo que también tienen derechos humanos los uniformados, porque acá parece que estar uniformado es un pecado. También ésta es una causa por la que se le pierde el respeto a la policía, porque parece que tener uniforme es estar manchado. ¿O acaso no pasó el otro día en el acto de la ESMA, cuando escupieron a los cadetes que estaban haciendo guardia allí? Esos chicos todavía no habían nacido cuando fue el golpe. Los escupieron, los denostaron, los insultaron y hasta casi los agredieron porque tenían uniforme. Entonces, todos estos comportamientos son los que tenemos que tratar de corregir, porque tiene que haber una política de Estado en materia de seguridad.

No se trata de que cada uno lleve agua para su molino, no puede haber partidismo en cuestiones de política de seguridad. Todos tenemos que estar en la misma línea, y así como tenemos una política de Estado en algunas cuestiones de política exterior, tiene que ser también en seguridad, ni más ni menos, como en educación. A pesar de que pasen los gobiernos deben seguirse los caminos trazados en estas materias.

En materia carcelaria es una vergüenza. Fíjense que las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz son las únicas que se construyeron después de muchos años. Nosotros estamos sancionando leyes, endureciendo penas, restringiendo libertades, pero, ¿dónde vamos a poner a los presos si no se hacen cárceles? ¿Hay una política? ¿Está previsto hacerse? No sé. Si la hay, por lo menos, no la conocemos.

Entonces, son todos estos temas los que debemos discutir. Y discúlpeme, presidente, porque usted me está apurando y eso me pone nervioso. Pero, como decía, hay muchas otras cosas que se pueden decir. Por ejemplo, creo que ha

sido un gravísimo error pasar las fuerzas de seguridad al Ministerio de Justicia. Ha sido un gravísimo error. Siempre estuvieron en la órbita del Ministerio del Interior. En todo el mundo es así, o al menos en el 90 por ciento es así.

¿Qué tienen que ver las fuerzas de seguridad con el Ministerio de Justicia? El ex presidente Duhalde lo hizo por motivos coyunturales: porque estaba Juan José Álvarez, que es la persona que le merecía confianza y quería entregarle a él todas las fuerzas de seguridad. Pero creo que, por las mismas razones personales, tendríamos que haberlas traspasado de nuevo a la órbita del Ministerio del Interior. Es más, ya se tendría que haber convocado el Consejo de Seguridad. Más aún, se tendría que haber convocado al Comité de Crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior, porque estamos viviendo en una emergencia en lo que hace a la inseguridad. Nada de eso se hace. ¿Por qué? Porque no se lo siente. El Ministerio del Interior, que está en contacto con las provincias, es el que tiene que motorizar el Consejo de Seguridad previsto por la Ley de Seguridad Interior.

En todo lo demás, presidente, creo que es bastardear el tema hablar de mano dura o mano blanda. Me parece que tenemos que dar el marco legal. De esto se trata: de dar el marco legal para que el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza, aplique el derecho. Si damos el marco legal para que aplique el derecho, no puede haber mano blanda ni mano dura, simplemente tiene que aplicarse la ley como corresponde. Este es un tema que no sólo nos atañe a nosotros, sino también a los jueces, al Poder Ejecutivo y a los que dirigen el sistema carcelario. Es un tema integral. Por eso digo que acá no hay soluciones parciales. No puede haber soluciones parciales. Tienen que ser integrales y todas ellas tienen que formar parte de una verdadera política de Estado que fijemos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que la haga cumplir el Poder Judicial y que dure no obstante el cambio de gobierno. Esto es lo que pienso.

Por ello, en cuanto a estas dos normas que vamos a sancionar comparto plenamente tanto la que restringe la libertad condicional como la de telefonía, que tiene muy buenos propósitos. Una parte ya está legislada, a otra hay que hacerle algunas correcciones para que realmente cumpla con los fines para los cuales ha sido ideada.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Catamarca.

Sra. Colombo. — Brevemente, señor presidente, quiero expresar la adhesión de los senadores del bloque del Frente Cívico y Social a los proyectos de ley en consideración.

Con relación al primero de los proyectos, que limita la libertad condicional ante delitos o crímenes aberrantes, debo decir que vamos a acompañar la iniciativa, porque la realidad demuestra que existen tales crímenes aberrantes: secuestros seguidos de muerte, violaciones seguidas de muerte, homicidios o muertes para ocultar la comisión de delitos o pruebas, robos seguidos de muerte. De manera que esto conforma una realidad objetiva ante la cual debe rendirse este debate, que se ha transformado en un verdadero campo de fuerzas entre posiciones antagónicas que, tal vez, deben encontrar un punto de síntesis que permita avanzar en las reformas estructurales, de fondo, que proponía el miembro informante, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Sin perjuicio de ello, cada uno de nosotros, por supuesto, tiene una posición tomada respecto de este tema del que tanto se habló, entre halcones y palomas, o entre garantistas y no garantistas. Creo que tenemos la responsabilidad funcional de encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar para que estas cosas realmente se terminen.

Por su parte, el proyecto de ley sobre comercialización de sistemas de telefonía móvil viene a llenar un vacío legal. Como bien se dijo esta tarde, actualmente existen más aparatos de telefonía móvil que aparatos de telefonía fija, lo cual genera una nueva tipología de delitos, como es el robo de celulares y su uso por parte de delincuentes, o la venta impune de celulares por las calles sin ningún tipo de registro ni de control. Este problema, que es muy preocupante para mí, me llevó a reunirme con el presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el señor Fulvio Madaro, para expresarle mi preocupación, porque si realmente se venden teléfonos celulares robados es porque la empresa de telefonía celular los activa nuevamente, pese a que fueron denunciados por las víctimas de esos robos. En líneas generales, este proyecto viene a cubrir un vacío legal generado por un avance tecnológico que se ha dado en nuestro país con la incorporación de la telefonía celular.

Habría que analizar las observaciones planteadas por la senadora por la Capital, de que, por esta facultad que se otorga a las fuerzas policiales de poder incautar aparatos de dudosa procedencia, esos aparatos no terminen en manos de policías que integran redes delictivas con vendedores de drogas, juego clandestino o explotadores de prostitución. Lamento que no esté el miembro informante.

En los fundamentos del proyecto del senador Agúndez sobre juego clandestino se planteaban tres interrogantes, sobre si estas conductas comprendidas en el juego clandestino pueden ser objeto de reproche por el derecho penal. En la misma fundamentación se responde afirmativamente, por cuanto —dice— el bien jurídico tutelado, que es la fe pública, es lo suficientemente gravoso como para habilitar el ingreso de estas conductas dentro del derecho penal.

Por otro lado se plantea el interrogante acerca de si los tipos penales deben contener todas las conductas descriptas en el proyecto. Ahí se hace un detalle de las conductas contenidas, con la salvedad que planteó el presidente de la comisión, el miembro informante, de que no se podía detener la actividad de los quinieleros ya que, por más que se los descubra y que existan medidas firmes para actuar sobre ellos, van a seguir haciendo lo mismo, porque es su medio de vida.

El tercer interrogante se refería a aspectos constitucionales. De acuerdo con la opinión de constitucionalistas que se citan en los fundamentos, es viable transformar las contravenciones en delitos por medio de una ley nacional, quedando en resguardo el poder de policía de otros actos en manos de los estados provinciales.

Por estos argumentos nosotros vamos a acompañar estos proyectos...

Sr. López Arias. — Una interrupción.

Sr. Presidente. — El senador López Arias le pide una interrupción, senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador López Arias.

Sr. López Arias. — Señor presidente: no quise pedir la interrupción antes para no romper la ilación de las palabras de la senadora.

Voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones mi posición sobre temas muy caros

para mí, como vocación de vida, de principios. Como se volvió a tocar el tema del garantismo, y sé que la senadora comparte una posición que tengo, y el abolicionismo, que también fue mencionado por el senador Menem, quiero decir que las sociedades que han alcanzado un mejor nivel de convivencia y un mayor margen de seguridad no son aquellas autoritarias que conceden poderes arbitrarios o que pasan por encima de normas generales de convivencia. Por el contrario, las sociedades que tienen un mayor margen de seguridad son aquellas que convierten el respeto y el cumplimiento de la ley en un valor defendido por todos los sectores de la sociedad, incluidas, por supuesto, las instituciones responsables.

Esto es fundamental, porque el cumplimiento estricto de la ley es no sólo el castigo, como corresponde, muy firme, sólido, sin claudicaciones, de aquellos que cometen delitos —y con esto queda claro que no soy abolicionista ni mucho menos—, sino también el castigo de aquellos policías que no están a la altura de sus funciones y que delinquen. A su vez, el cumplimiento estricto de la ley es el respeto total a las garantías individuales. Este es el marco en el que realmente tiene que analizarse esta problemática porque acá, bien se decía, no es cuestión de mano fuerte, de mano débil, ni mucho menos. Se trata de cumplir la ley, y la ley se cumple cuando se la aplica por igual a todos los sectores de la sociedad y cuando se logra, a través de su cumplimiento, el estricto respeto de los derechos constitucionales.

Sr. Presidente. — Continúa en uso de la palabra la senadora Colombo.

Sra. Colombo. — No se puede quejar al senador López Arias, porque más que una interrupción ha sido todo un alegato.

Le aclaro que no sé si estamos coincidiendo, porque yo no olvido que el punto de partida de todo esto fue el terrorismo de Estado, que dejó una policía con prácticas autoritarias. A partir de allí, lo que se ha vivido durante estas dos décadas, con la incorporación a nuestro derecho interno del derecho internacional sobre derechos humanos, nos parece que es un gran avance. Y es tan espasmódica la discusión en este Senado, que hace una semana estábamos destacando aquello y hoy parece que ya tiene menos importancia de la que le dábamos el miércoles pasado.

Por eso, cuando hablo del campo de fuerzas en el que se neutralizan posiciones antagónicas, creo que esto es lo que impide avanzar en el planteo de las soluciones sistémicas de las que habla Capitanich, en las que —con todos los matices ideológicos que como demócratas que se supone somos, sabremos aceptar y acordar— deberemos adoptar las medidas de fondo, porque no podemos seguir poniéndole parches al Código Penal ante las cosas que vienen sucediendo. Acá, por ejemplo, se olvidó un caso muy triste: el de Marela. Era una niña de un barrio humilde de Avellaneda, que murió y de la que hoy nadie se acuerda. Ella no tenía capacidad de *lobby*. Y con esto no estoy haciendo un juicio de valor de ninguna naturaleza. Pero Marela fue víctima de un violador que la mató y que antes había cometido el mismo delito y había salido en libertad condicional. Entonces, la portación de padre —porque su papá, por eso de la exclusión social, tal vez se dedicaba a comercializar autopartes de desarmaderos— hizo el caso menos dramático.

Acá no hay muertos que tengan más derechos que otros. Todos nuestros muertos a manos de la inseguridad tienen exactamente los mismos derechos, y nosotros debemos, como Congreso, saldar estos debates, esta dialéctica entre garantistas y no garantistas, o entre halcones y palomas, para encontrar las soluciones de fondo: reformar el Código Penal —como se ha planteado—, reformar el sistema penitenciario nacional y poner en vigencia las leyes.

Realmente hago un gran esfuerzo para no decir todo lo que pienso, pero no puedo dejar de expresar que tenemos —como también se dijo acá— un 60 por ciento de población que vive por debajo de la línea de pobreza y 27 por ciento de indigentes. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Vivir en un paraíso? Es claro que la Argentina no vive en un paraíso. ¿O ustedes creen que los *countries* en el conurbano o en los grandes aglomerados urbanos han proliferado porque sí? A la vuelta de cada uno de ellos hay villas de emergencia al por mayor. Esa es la realidad de la República Argentina de hoy. Y en este marco tenemos que abordar este debate, en lo posible con una visión laica del problema que nos permita ayudar a resolverlo.

Por otro lado, el senador Capitanich, con datos que siempre resultan muy ilustrativos, plan-

teó que hay 12 mil millones de pesos en el presupuesto consolidado de Nación y provincias para financiar las acciones vinculadas con la seguridad.

Ahora bien, si nosotros dividimos esos 12 mil millones de pesos por los 35 millones de habitantes nos da un monto de 342,87 pesos per cápita; es decir que eso es lo que invierte el Estado dentro del presupuesto consolidado de la Nación y las provincias para atender la seguridad de un país que tiene todos estos problemas.

Creo entonces francamente que este problema no va a resolverse solamente sancionando leyes sino también con un mejor presupuesto. Conozco las limitaciones que existen para acceder a estos planteos, pero la verdad es que si seguimos teniendo policías que ganan 400 pesos va a ser muy difícil que no caigan en las redes del juego clandestino, del narcotráfico, de la prostitución, de la trata de blancas, etcétera.

Para finalizar, quiero manifestar que también hay leyes que no se cumplen, como la Ley de Seguridad Interior.

Considero que en este momento el gobierno nacional deberá estar tomando las decisiones que se van a adoptar en esta materia, pero me parece que es muy necesario que se la derogue o modifique, pero que la Ley de Seguridad Interior, que prevé la participación de los gobernadores, de las policías provinciales, del presidente de la República —por supuesto—, de los responsables de las fuerzas de seguridad, del Comité de Crisis, del Consejo de Seguridad Interior; en fin, de todas estas instancias que forman parte de un cuerpo legal votado por este mismo Congreso, sea realmente funcional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Tierra del Fuego.

Sra. Caparrós. — En honor al tiempo de debate trataré de ser lo más breve posible.

Quisiera emitir algunas opiniones sobre las manifestaciones vertidas por algunos senadores.

Creo que no es cierto que el Congreso, y particularmente la Cámara de Senadores, haya estado detrás de los problemas, porque en esta materia existió un trabajo intenso durante los años 2002 y 2003, sancionando leyes y tratando de buscar un marco jurídico adecuado ante la complejidad y la gravedad de los delitos que está padeciendo todo el país, algunos de mayor mag-

nitud, como pueden suceder en los grandes centros urbanos, y otros quizá de menor magnitud, como tal vez suceden en el interior del país.

Tampoco es cierto que el gobierno nacional no haya manifestado preocupación por esta problemática. Nosotros nos hemos reunido con el ministro Beliz y con el doctor Quantín en más de una oportunidad y hasta en el marco de otras comisiones que están vinculadas al ámbito de los municipios —en las que me toca participar— buscando alternativas de solución a la gravedad de este tema.

Es cierto que estamos sesionando en el marco de una presentación de más de 200 mil personas que vinieron al Congreso de la Nación a hacer un reclamo legítimo encabezado por el ingeniero Blumberg, quien con una generosidad increíble está trabajando para que mejore la seguridad en toda la Nación y está trabajando para los demás, porque a su hijo no lo va a recuperar. Pero no se trata esta de una manifestación solamente por Axel sino por tantos muertos y desaparecidos que hubo en la Argentina durante el período democrático. Entre ellos, me gustaría nombrar a Marela —a quien mencionó la senadora Avelín—, a Natalia Melmann, a Lucila, a Diego Peralta, a Leandro De Negrís, a las chicas de Cipolletti —que no son de la provincia de Buenos Aires ni de la Capital Federal—, a Sebastián Bordón, a José Luis Cabezas, a Miguel Bru, a Walter Bulacio, a Víctor Choque —de mi provincia—, a Teresa Rodríguez y a una larguísima lista de gente joven que ha muerto como consecuencia del delito.

El hecho de haber leído en algún medio las declaraciones que hizo la señora Hebe de Bonafini, en el sentido de que la manifestación del jueves fue del fascismo y de la derecha, me dolió particularmente, porque quizá me unen más lazos a ella de los que ella misma debe imaginar o conocer. Digo esto porque la respeto mucho por considerarla una luchadora por los muertos que tuvimos durante todo un proceso en el que no existían los derechos civiles, pero estos muertos también tienen valor, porque cada vida vale.

Desde 1996 en la Ciudad de Mar del Plata hubo, entre muertas y desaparecidas, más de veintiséis mujeres.

Cada muerte y cada vida vale, tanto en procesos democráticos como en procesos milita-

res, y tenemos que defenderlas y trabajar en ese sentido.

Ahora, me preguntó para qué sirvió esta manifestación. ¿Fue solamente para que sesionemos los congresales?

Sólo para que sigamos dando sanción a leyes que van a ir conformando, seguramente, una estructura jurídica más dura y distinta; en algunos casos, como se decía recién, de manera espasmódica, con errores o sin ellos. Yo creo que no debe ser así, sino que esto debe servir para que el reclamo sea escuchado por todos los poderes del Estado; más aún, esto debe servir para trabajar en la elaboración de políticas de seguridad que nos trasciendan y en las que estén inmersos los tres poderes del Estado y estén involucrados los gobiernos y las legislaturas provinciales. Porque la lucha no es fácil: el delito es de una complejidad absoluta y salta a la vista cuando es aberrante y seguido de muerte. Pero no debemos olvidarnos de que todos los días se registran abusos y hasta situaciones de violencia doméstica.

Más allá de hablar sobre el contenido de las leyes, debemos pensar y reflexionar sobre todo esto para tratar de lograr continuidad en la aplicación de políticas. Debemos seguir trabajando —como se ha venido haciéndolo en los dos años que me tocó estar en el Congreso de la Nación— contra los bolsones de corrupción que habitan en todos los poderes del Estado. Debemos tratar de salir juntos de la profunda crisis en que estamos sumidos, porque esto nos debilita y no nos permite cohesionar acciones y trabajar con firmeza hacia adelante a fin de luchar contra la inseguridad que vive actualmente nuestro país.

El delito es hoy mucho más complejo. Por lo tanto, debemos preparar a nuestras fuerzas de seguridad para afrontarlo. Las policías deben recuperar el prestigio que supieron tener. No puede ser que nos dé miedo que un policía nos pare en la calle. No puede pasarnos esto. Deben recuperar el prestigio y, para ello, debe trabajarse adentro de la policía para su capacitación y para expulsar a los corruptos que anidan dentro de ella. No creo que todos los agentes de la Policía, a pesar de sus sueldos bajísimos, sean corruptos. Reitero: debemos trabajar profundamente sobre los bolsones de corrupción.

Y todo ello lo vamos a poder hacer sólo si contamos con instituciones fuertes. Actualmente, todas las instituciones –incluyendo el Congreso de la Nación– están absolutamente debilitadas; ésa es la opinión de la gente.

También debemos trabajar en el sistema penitenciario, que debe ser un lugar de contención para quienes delinquen. Al respecto, el papá de Axel pedía que se pusiera a trabajar a los detenidos. Es cierto: debe existir un sistema que permita la reinserción social de un porcentaje –por lo menos– de aquellos que delinquen; por supuesto, no de aquellos que presentan una patología severa, de los psicópatas o de los que no tienen retorno del ámbito delictivo en el que están inmersos. Me refiero a la inserción social de aquellos que por distintas razones han llegado a cometer delitos y que tienen la posibilidad o la oportunidad de insertarse nuevamente en la sociedad.

Asimismo, debemos trabajar en la instrumentación de políticas de prevención. Yo vengo de otro ámbito y, tal vez por ello, a veces me cuesta entender que sólo se hable de prevenir el delito a través de la policía. Creo que debemos hablar de políticas sociales de prevención, que es un ámbito distinto. De lo contrario, no sé qué vamos a hacer con otros problemas que tenemos una vez que salgamos, aunque sea mínimamente, de la crisis que estamos atravesando. El domingo próximo pasado el diario “Clarín” publicó un informe donde se afirma que uno de cada cuatro chicos trabaja para poder comer.

La respuesta a ese flagelo se puede encontrar en un buen uso y en una adecuada distribución de los recursos públicos, particularmente de parte de los estados provinciales y del Gobierno de la Ciudad. No alcanza con que hagamos publicidad en tal sentido: hace pocos días fui al cine y allí observé una publicidad que decía “deserción escolar cero”. Yo me pregunto cuánta gente que no manda a sus chicos a la escuela porque está fuera del sistema laboral, y en el cual merece vivir cualquier ciudadano de nuestro país, tiene acceso a esa publicidad para decir: “¡Ah, lo voy a mandar a la escuela!”. Cuando hablo de la optimización de los recursos públicos me refiero a estos detalles que no son menores; en lugar de gastar recursos en este tipo de cosas, me parece que sería mejor sacar a la calle a un batallón de asistentes sociales para buscar a esos chicos y reinsertarlos

en la escuela. El Estado debe empezar a hacerse cargo de aquello de lo que las familias no pueden hacerse cargo. Y no se trata de que las familias no quieran hacerse cargo de determinadas cosas, sino que muchas veces –y por distintas razones– no se pueden hacer cargo de ellas.

Entonces, hoy tenemos menores que trabajan, que son abusados y que son violentados desde todo punto de vista. Ninguno de los que estamos aquí sentados –particularmente los que venimos del interior– podríamos llegar a creer que alguno de estos chicos o de estas chiquitas de ocho o nueve años, que todos miramos con indiferencia y que a lo sumo se les da una limosna o un sandwich, van a ser bailarinas del Teatro Colón en un futuro cuando sean adolescentes.

No podemos minimizar el tema de la seguridad reduciéndolo solamente al tratamiento de leyes. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber pero aquí el hombro lo tienen que poner todos: la Justicia, y el Poder Ejecutivo Nacional así como también los distintos gobiernos y las legislaturas provinciales.

Hoy, el senador Yoma hablaba respecto de quién controla los recursos. Bueno, en un sistema federal tenemos Legislaturas provinciales que deben ocuparse de eso. En un sistema federal tenemos gobiernos municipales, auditorías y tribunales de cuentas. O sea, tenemos que empezar a actuar en serio, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Tienen que haber denuncias cuando los recursos son mal utilizados porque hoy somos un país que no tiene plata, estamos saliendo de una crisis de las más graves que vivimos en nuestra historia, que fue la que ocurrió en el 2001. Por lo tanto, no podemos pedir milagros.

Por otra parte, sí creo que esta manifestación tiene que ser una bisagra para empezar a mirar hacia el futuro y trabajar juntos en este tema aunque discutamos respecto del resto de los temas. Y debemos hacerlo desde el respeto ideológico. No creo en eso de los garantistas, de los represores, de la derecha o de la izquierda: hay problemas sociales comunes que con el aporte de todos los sectores, a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener, pueden salir las propuestas más ricas. Simplemente, quería aportar eso.

Respecto de los tres temas que se están tratando, probablemente tengamos alguna diferen-

cia que a lo mejor puede ser trabajada desde la reglamentación de la norma por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pero vamos a acompañar estas iniciativas y a seguir trabajando en ese sentido. Ojalá que esto sirva para que no haya más muertos injustamente en la Argentina.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Salta.

Sra. Escudero. – Señor presidente: llevo en mi ánimo la impresión y el estímulo de los miles de ciudadanos que el jueves vinieron a la puerta de nuestra casa con sus justos reclamos y reivindicaciones. El miembro informante de mi banca dio las estadísticas del aumento del delito y el pueblo argentino salió a la calle y dijo: ¡basta!

Quiero sumarme a este profundo debate que va llegando a su final, que trata de desentrañar cuáles son las causas de la existencia del delito estructural en la Argentina, porque si no hacemos un diagnóstico adecuado de causas y el efectos, difícilmente vamos a poder controlarlo y muchos menos erradicarlo.

Mi análisis no va a ser histórico porque no ha pasado tal vez suficiente tiempo, pero sí va a ser político. Creo que las causas hay que buscarlas en esos oscuros años del siglo 20 para los argentinos, esos años signados por la persecución ideológica, los golpes de Estado, la eliminación del adversario y la endeblez de las instituciones de la República.

La historia enseña que la recuperación de la democracia necesita de mucho tiempo para erradicar los efectos perniciosos, mucho más que el tiempo de la recuperación o la continuidad institucional. Y a eso estamos asistiendo en este caso.

Las fuerzas armadas y las de seguridad son usadas cada vez que se interrumpe la democracia, desaparecen la política, la ley, y el respeto por la Constitución, como punta de lanza para el ejercicio arbitrario del poder. Lamentablemente, por su estructura cerrada y verticalista, recuperada la democracia todavía quedan nichos que no se adaptan al respeto de las libertades, de la Constitución y de las leyes.

El pueblo argentino salió y dijo: ¡basta! Y nos está exigiendo estar a la altura de las circunstancias. Entonces no será suficiente aprobar estas leyes como las que vamos a aprobar hoy, como las que venimos aprobando en estos dos

años pasados, sino que, al mismo tiempo, tendremos que ir debatiendo de cara a la sociedad, sin tapar nada, estos vestigios totalitarios que existen replegados en nuestras instituciones, especialmente en algunas fuerzas de seguridad.

Quiero decir que durante estos años de la dictadura se inocularon en las fuerzas perversiones que nos dieron el triste resultado de ingresar en la lengua castellana palabras como “desaparecido” y “zona liberada”. “Desaparecido” espero que haya pasado a la historia. Pero obviamente las “zonas liberadas” todavía existen en la realidad de la Argentina democrática de hoy. Y el pueblo argentino salió valientemente y dijo: “Basta de zonas liberadas”. Y ésta es la responsabilidad del ahora.

Si queremos realmente afianzar las instituciones de la democracia, si queremos realmente avanzar en contra del delito hay que depurar las fuerzas. Hay que recuperar la buena policía, las buenas fuerzas armadas, la credibilidad de la sociedad en las instituciones. Si no hay una buena relación entre la sociedad civil, una relación de credibilidad entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad, no va a poder actuarse en prevención. No habrá recursos que alcancen para hacer tareas de prevención. Porque la prevención del delito se basa en información y en investigación. Y para eso necesitamos que la comunidad confíe en sus fuerzas, dé la información, recuperar el rol del buen vecino, el ojo despierto que protege y así evita que las mafias actúen y evita los delitos. Eso ha faltado en el caso de Axel y en todos los casos que fueron mencionados esta noche.

Por eso creo que hace falta una política criminal con un fuerte vértice en el Poder Ejecutivo nacional, con un enorme sostén de parte de este Congreso, con una muy buena articulación con todos los gobiernos provinciales y con los gobiernos de la región. Porque la lucha contra el crimen organizado y el crimen transnacional exige el esfuerzo de todos.

Vamos a continuar trabajando en todos aquellos aspectos que aumentan la violencia: el tema de las drogas, de las armas y de la corrupción. Porque también vamos a seguir trabajando –y hay que seguir trabajando– en transparentar los recursos de las campañas políticas. Porque muchas veces esas campañas políticas son sustentadas con esos “dineros negros” del crimen

transnacional. Y después hay compromisos de los que tienen la obligación de investigar y por eso los resultados no llegan a un buen fin.

Quiero rescatar el rol del buen gobierno, el rol de mirar al pasado como enseñanza y no como revancha. Porque de lo contrario estaremos reproduciendo las causas de nuestra decadencia institucional.

Vamos a apoyar en general los tres proyectos que vamos a aprobar esta noche.

La modificación del artículo 13 del Código Penal se sustenta en los graves índices de reincidencia de delitos. Pero estoy segura de que no va a funcionar si no trabajamos simultáneamente en las políticas carcelarias. Si no hay políticas carcelarias, si no trabajamos en la recuperación de los reclusos, lamentablemente no servirá de nada aumentar o endurecer la libertad condicional.

En cuanto a los otros dos proyectos, son muy buenas iniciativas. Tenemos algunas dudas desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las competencias, pero creo que hay que avanzar.

En el tema de la telefonía haremos modificaciones en particular. Pero es el resultado de esta nueva tecnología que está al servicio tantas veces del delito y que tenemos que aprender a controlar.

Y finalmente, el tema del juego, que va junto con la lucha por la depuración de nuestras fuerzas de seguridad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Perceval. – Señor presidente: quiero ser fiel, no dogmática, con lo que pienso y creo.

Pretendo no ser reiterativa sino brevemente integradora de los fundamentos y motivos que nos han llevado a encontrar consensos básicos para tener la voluntad de acompañar estos tres proyectos.

Y quiero empezar mi reflexión con una pregunta, que es el título de un libro que encontramos en las librerías: *Y mañana qué*, de Derrida, Jacques y Elisabeth Roudinesco, que en su prólogo retoma la pregunta de Víctor Hugo: “¿De qué estará hecho el mañana?”.

¿Y mañana qué? Mañana, ninguno de los senadores y senadoras queremos quedarnos con una conciencia falsa, pseudotranquilos, con

medias verdades y creyendo que con lo que estamos haciendo hoy basta.

• En verdad, queremos decir con sinceridad y autenticidad que el problema es grave, que la realidad de la inseguridad es complicada, que se trata de problemas estructurales, que la seguridad humana requiere de miradas e intervenciones complejas, de respuestas integrales y sistémicas y de una decidida lucha no sólo de las instituciones públicas sino desde el conjunto social. Se trata de una decidida lucha contra la impunidad, la corrupción, las mafias del poderío así como la comprensión de las nuevas modalidades de las mafias transnacionales y también del modo de operar en nuestro país del crimen organizado.

Digo esto porque cuando preguntemos: “¿Y mañana qué?”, espero sinceramente que no digamos que fue demasiado tarde; no para reconocer todo el trabajo que venimos haciendo sino para no asumir el que debemos hacer. Y como no puedo adelantarme a hablar de algo que aún no sucedió sino simplemente desear que no sea demasiado tarde, espero que en este recinto también tratemos un nuevo rostro de las mafias transnacionales y del crimen organizado que actúan en nuestro país y que hoy significan una industria que está compitiendo con las drogas –con el narcotráfico– y con el tráfico de armas: el tráfico de niños y niñas, bajo las cínicas y sutiles formas de las nuevas violencias como son el turismo sexual infantil o la pornografía infantil en internet.

Este asunto nos compromete no sólo en lo personal y familiar. Y digo esto porque muchas veces nos ponen en el lugar de los no ciudadanos o ciudadanas; algo absolutamente erróneo. Nosotros y nosotras también tenemos hijos e hijas que salen a recrearse y a divertirse. Y también nosotros y nosotras tenemos miedo de que no vuelvan o de que vuelvan heridos. Y también nosotros y nosotras no somos de otro planeta: los senadores y las senadoras también tenemos incertidumbre, desasosiego y miedo. Y desde nuestra responsabilidad política e institucional debemos entender y comprender el estado de vulnerabilidad, desasosiego y sufrimiento social que sufren, sobre todo, los más débiles.

Por otro lado, las estadísticas surgidas de los informes del Instituto Nacional de Estadística y Reincidencia Criminal del Ministerio de Justicia

de la Nación mencionan y comprueban que desde 1982 a 2002 se incrementaron la violencia y la cantidad de delitos --crecieron sin parar--; mientras tanto, bajó la cantidad de sentencias. Si bien en 2002 se cuadruplicó el número de delitos en todo el país --según este informe--, respecto de los denunciados 20 años atrás, en ese mismo período la proporción de sentencias bajó casi un tercio. Cambió el perfil del condenado. Los varones siguen siendo mayoría sobre las mujeres y el aumento más notorio se dio entre jóvenes de dieciocho a veinte años.

Un senador preopinante hacía referencia a que hay más delincuentes solteros que casados. Existen menos analfabetos o personas con bajo nivel de instrucción que los que había hace veinte años y más condenados con estudios secundarios.

Es llamativo: creció la cantidad de condenados sin antecedentes penales, pero a la vez aumentó el número de detenidos reincidentes.

En veinte años también se duplicó la población carcelaria: pasó de 22.651 detenidos en 1982 a 44.969 en 2002.

En 2002, los delitos denunciados en todo el país fueron 1.340.529, mientras que en 1982 fueron 313.315; y sabemos que los delitos denunciados representan apenas alrededor de un 30 por ciento de los cometidos realmente.

Pero los sociólogos, los antropólogos, los expertos en criminalidad nos marcan que no hay que pensar respuestas lineales; que este crecimiento del delito y la violencia no tiene un único factor desencadenante. Al respecto, ya han dicho anteriormente senadores y senadoras que algunos de los factores más importantes son el desempleo, la pobreza, la ruptura de los vínculos familiares y comunitarios, la formación de subculturas delictivas, la ineficiencia del sistema judicial y penal y la desconfianza que genera la corrupción y la impunidad. Y a esto se suma --y no hay que distraerse-- la aparición de los mercados paralelos que facilitan el acceso a las armas, a las drogas y al tráfico de personas.

Hicimos mención en este debate de las más de doce leyes que hemos sancionado, entre las que se encuentra el registro de menores extraviados, en el ámbito del Ministerio de Justicia. Yo fui autora del régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. Agravamos penas. Incluimos nuevos delitos.

Más de seis proyectos esperan ser aprobados por la Cámara de Diputados; entre otros, el referido al registro de armas secuestradas e incautadas. Todas estas leyes se aprobaron en este Senado. Pero el delito siguió aumentando. ¿Es porque no sirven? No; es porque no alcanzan. Si el sistema penal no funciona no es sólo por el agravamiento de las penas o no; es por la ineficacia del sistema integral de seguridad humana. ¿De qué nos sirve agravar penas si del total de delitos cometidos sólo detenemos al 4 por ciento de sus autores?

Ayer, el gobernador de mi provincia, el ingeniero Julio Cobos, logró el apoyo del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, a efectos de poner en marcha en forma urgente políticas y acciones que tiendan a recrear condiciones de seguridad en nuestra convivencia. Carmelo Angulo Barturen, el representante de este organismo internacional en la Argentina, decía ayer en Mendoza que no hay fórmulas mágicas sino que el esfuerzo consiste en unir a todos los actores trabajando no sólo en la represión sino también en la prevención. La seguridad humana es un tema estructural y de largo plazo. La seguridad humana no consiste solamente en fortalecer a la policía sino en contar y desarrollar capacidades vecinales, barriales, comunitarias, sociales, derechos.

Esta mañana dieciocho obispos bonaerenses decían lo mismo. Manifestaban que debemos multiplicar los esfuerzos para atacar las causas de fondo: la corrupción, las mafias organizadas, los malos policías, la pobreza, la marginación, las drogas. Decían los obispos que la solución no está en endurecer las penas sino en erradicar las causas de los problemas, salvar la institución policial, mejorar la relación con la comunidad, acrecentar el control social, luchar contra las zonas liberadas fortaleciendo la acción del Estado. Terminaron diciendo los obispos: "Y no demorar más la reforma política".

Pido incorporar mis fundamentos para no abusar del tiempo que me han concedido.

Sr. Presidente. -- Al finalizar el tratamiento de este tema se votarán las inserciones solicitadas.

Le pido si puede ir redondeando.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval.— Señor presidente: traje un artículo de Mariano Ciafardini que dice que la pregunta de Hobbes acerca de por qué los hombres obedecen las normas de la sociedad, fue respondida por el mismo Hobbes: por el miedo.

Es cierto que Hobbes no escribía en la democracia para mejor democracia o prevenir el delito sino para justificar el poder de una monarquía absoluta. No es desde el miedo, desde las relaciones de confianza y mejores condiciones de vida

En estos días, distintos especialistas nos han dicho: “¿Y mañana qué?”. Las leyes no alcanzan. Tenemos que trabajar en la eficientización, profesionalización y democratización de las fuerzas de la seguridad, de la Justicia, del sistema penitenciario, en prevención y en sistemas de inteligencia eficaces y confiables. Porque en realidad, más allá de las leyes que ya votamos, de las que estamos hoy por votar o de las que votaremos, el mejor manual de seguridad humana es nuestra Constitución.

Y quiero terminar con una apelación, porque mi formación es filosófica: ante el crimen debemos pensar y decidir. En estos casos donde uno tiene que vérselas con la incertidumbre, el sufrimiento y el dolor, hay que mantener la idea de que todo hombre —cualesquiera sean sus actos— forma parte del orden de lo humano y no tiene que ser expulsado de él como no humano.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: considero que el debate de hoy amerita lo que denomino un triple abordaje. En primer lugar, una caracterización de este problema de la seguridad. En segundo lugar, un análisis profundo de la complejidad de las causas. Y, en tercer lugar, una ubicación temporal-espacial del problema que hoy estamos abordando.

El primer abordaje —el de la caracterización— me parece que no consiste sólo en una disquisición semántica o un ejercicio intelectual. Esta presunta contradicción entre garantistas y los partidarios de la mano dura me hace acordar a unos meses —o años— atrás cuando discutíamos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. En aquella oportunidad voté esa nulidad desde esta misma banca y sostuve que no se trataba de una cuestión de la derecha o de la izquierda, como se quería pretender, sino

que era algo mucho más simple y sencillo, que era una cuestión de derechos humanos conectada con la vida.

De esa misma manera, la seguridad —al igual que los derechos humanos— se conecta con la vida. Por eso creo que esta presunta contradicción entre partidarios de la mano dura y garantistas merece que la ubiquemos en su exacto lugar.

¿Y saben para qué? Para no ceder a la tentación de creer que se puede tener orden y seguridad perdiendo libertad y justicia. Ambos estados hacen a la condición humana y a la dignidad. Cada vez que en función de un discurso ordenancista se suspendieron el ejercicio de las libertades y garantías individuales, terminamos mucho peor de lo que empezamos. Y éste no es un ejercicio meramente analítico; la trágica y terrible historia de los argentinos está allí como testigo implacable de lo que estoy diciendo.

Entonces, no ya como legisladora sino como ciudadana, quiero vivir en orden y seguridad, pero con libertad y justicia, porque lo uno no me sirve sin lo otro; tarde o temprano se ve afectado cuando me faltan la libertad y la justicia.

Por lo tanto, quiero ubicar en su exacta dimensión este problema: derechos humanos y seguridad conectan con la vida.

Así, en este segundo abordaje que proponía, ¿cuáles son hoy las causales de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia, de esta violencia diferente de la que tiñó en los años sesenta a toda América Latina, vinculada más con el ejercicio de las libertades frente a gobiernos antidemocráticos, dictatoriales? Hoy pareciera ser que la violencia es de carácter individual, selectiva, vinculada a los derechos individuales, de propiedad, de los ciudadanos.

Y hay un escenario común. En efecto, si uno se para en Buenos Aires y mira el escenario latinoamericano, el paisaje que observa en los grandes centros urbanos de América Latina, con numeros e indicadores sociales y económicos similares, no es diferente. Es más, si uno recorre algunas ciudades de América Latina, capitales importantes, escucha decir que después de la hora 20 no se puede salir a la calle. Quienes viajan o tienen la oportunidad de hacerlo saben lo que estoy diciendo.

Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que solamente podemos ubicar en la cuestión social y

económica la causalidad de la delincuencia? No; estaríamos viendo solamente una visión del problema, porque no podemos dejar de observar que en las grandes ciudades donde el ingreso per cápita es de más de 25 mil dólares, los índices de la delincuencia no tienen nada que ver con los de nuestras pobres sociedades latinoamericanas. Y no solamente en Nueva York hay menos delincuencia porque tuvieron al alcalde Giuliani, como nos quieren hacer creer; quienes tuvimos la oportunidad de conocer Nueva York, ver el ingreso, ver el *boom* económico de consumo, etcétera, podemos advertir que en poco se parece al escenario latinoamericano. Y lo mismo podríamos decir de otras grandes urbes en el mundo, aunque tal vez ellos hoy tengan algunos otros graves problemas vinculados más con la política internacional que con un conflicto de seguridad interna.

Entonces, descreo de que únicamente el problema o la interpretación sociológica —como se la ha dado en llamar, la cuestión socioeconómica— sea la única causal. Podríamos hablar de la creciente urbanización, de la aparición de delitos complejos, como los vinculados a la drogadicción, etcétera, pero considero que en la Argentina existe además otro tema que es central en la complejidad de las causas de la delincuencia, como es la impunidad.

Estoy absolutamente segura de que uno de los principales problemas que tiene la República Argentina —y no es la primera vez que lo sostengo en esta banca— es la impunidad, porque lo que ha fundamentado la coerción del derecho penal moderno ha sido el temor a la pena y al castigo.

¿Y saben cuándo no funciona el derecho penal moderno? Cuando no hay temor al castigo, porque saben que éste no llega. Por eso, me parece que la discusión acerca de si más o menos penas es posterior, porque primero, para aplicarlas, hay que agarrar a los delincuentes y que estos vayan presos, que es el otro grave drama que tenemos en la República Argentina.

En este sentido, en nuestro país, existe mucha impunidad. Hay impunidades que tienen que ver con lo institucional, porque muchas veces las instituciones han dado hasta cobertura legal a esa impunidad. En la República Argentina, créase o no, existió la impunidad legal. Díganme que son, por ejemplo, las leyes de Obedien-

cia Debida y de Punto Final sancionadas por el Parlamento y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino la eximición de las penas a quienes ejecutaron crímenes aberrantes. Esta es una impunidad de carácter legal.

A su vez, hay otras impunidades que tienen que ver con el funcionamiento de aquellos organismos de seguridad que son los que tienen que dar cobertura a los ciudadanos. Y también permitaseme decir —y esto como autocrítica, como parte de la sociedad argentina— que existe una suerte de impunidad social.

Creo que somos una sociedad poco afecta al respeto de las normas, con algo de hipocresía también. El robo de automotores y los desarmaderos han sido, hasta hace pocos días, el eje central de las políticas de seguridad. De hecho, aquí agravamos las penas vinculadas con esos delitos. Ahora bien, yo me pregunto: los argentinos que iban a esa popular calle de Buenos Aires, donde proliferan las casas de repuestos usados, ¿de dónde piensan que provenían la mayor parte de ellos? ¿Creen que los importamos de Suecia? ¿Que nos los dan los franceses? ¿De dónde vendrán? Y vengamos un poco más cerca, a pocas cuadras del Congreso, a la calle Libertad, donde hasta hace poco tiempo el comercio de pasacasetes era moneda corriente, pero luego inventaron los pasacasetes que se extraen y entonces se acabó la venta, porque dejó de ser negocio. Allí no iban maricianos a comprar; iban argentinos que tal vez después se horrorizan con justa razón frente a las cosas que pasan. Pero, por favor, ¡que cada uno observe el comportamiento que ha tenido! ¡Que cada uno de nosotros, y me incluyo, observe el comportamiento que ha tenido respecto de estas conductas!

No estoy diciendo cosas extrañas. Me contaba un ministro del Poder Ejecutivo, que cuando fue titular de la Superintendencia de Seguros tuvo que prohibir que se aseguraran los pasacasetes, porque una de las principales fábricas de estos aparatos, radicada en la Tierra del Fuego, compraba en el mercado los pasacasetes, que ya se sabe dónde se obtenían, cambiaba su numeración y los seguía vendiendo.

Esto es lo que somos los argentinos, con sus más y sus menos. Pretender que esto solamente es una cuestión que emerge como por arte de magia es una equivocación. Creo que este

cóctel explosivo es producto de la degradación social y económica que se disparó a partir de los 90 en la República Argentina, sumada a la impunidad que venía de antes. Porque si yo fui policía o miembro de las fuerzas armadas, cometí crímenes horribles y terribles y después una ley me exculpó, ¿por qué voy a pensar que no voy a poder seguir haciendo lo mismo? La impunidad no es una figura penal; es, por sobre todas las cosas, una cultura.

Entonces, creo que analizar esto nos va a permitir, ubicados en la tercera cuestión que yo propongo, que es la ubicación temporal-espacial, advertir si estamos en el camino correcto. Porque ya no vale la pena ver en qué idea se encasilla cada uno o qué convicciones defiende, sino pensar en términos de eficacia. En definitiva, uno sanciona una norma no para salirse con la idea de uno sino para que ella tenga eficacia. Yo, por lo menos, cuando hago las cosas —no solamente en materia legislativa sino en cualquier orden de la vida—, busco la eficacia. Nadie hace algo pensando que no va a servir absolutamente para nada, a no ser que sea un cinico; y la verdad es que el cinismo no ha sido nunca una profesión que haya ejercido.

En cuanto a la ubicación temporal-espacial de los temas que estamos tratando hoy y que se ha disparado a partir de los desgraciados sucesos que le tocó vivir a una familia argentina —y recién se mencionaba el caso de la chiquita de Avellaneda, un caso espeluznante—, descubrimos que el epicentro de este determinado tipo de delitos, como secuestros y violaciones seguidos de muerte —pero fundamentalmente el primero—, está en la provincia de Buenos Aires y con una protagonista —la voy a nombrar con todas las letras, porque nunca hablé con eufemismos, siempre dije lo que pensaba exactamente, más allá de los costos que esto podía acarrear— que es la policía de la provincia de Buenos Aires, llamada la Bonaerense.

Este es un tema que no puede ser soslayado. En el caso puntual que ha ocupado la primera plana de los diarios, que ha sido la muerte del chico de Blumberg, se han comprobado —y no es ninguna novedad— los llamados a la policía.

Asimismo, en el caso de la chica Marela, que mencionaron algunas senadoras, resulta ser que en ese barrio había desaparecido una adolescente que vivía al lado de un violador de meno-

res con condena cumplida, pero la policía nunca había ido allí. ¿Impericia, ineficacia, porque les pagan poco? No; no era un problema de eficacia ni de impericia por lo que les pagan sino porque en esa casa se llevaban a cabo actividades relacionadas con la piratería del asfalto y, entonces, había protección policial.

Esta es otra cuestión. La inseguridad que hoy tienen los ciudadanos no se debe a las normas del Código Penal sino a que las instituciones responsables de custodiar sus vidas y patrimonios están severamente sospechadas de tener complicidad con quienes delinquen, que es el caso puntual de instituciones policiales y también de la Justicia, porque la policía no depende de los marciales, de extraterrestres, sino del Poder Judicial, por lo menos en la organización institucional que hoy tiene la República Argentina.

Y con relación a la organización institucional que tiene la República Argentina, es cierto lo que la gente percibe en el sentido de que la General Paz, que divide la competencia federal, del gobierno nacional, de la provincia, es un límite inexistente, delgado. En efecto, en lo visual o geográfico ese límite no existe, pero hay una montaña institucional, de constituciones, leyes y organizaciones judiciales que no nos permiten que determinados organismos intervengan. Voy a dar un ejemplo: en el marco de la ley de seguridad interior, que es un instrumento muy importante —lo mencionó una senadora—, solamente se puede colaborar con otra fuerza, y no sobre ella, a solicitud de los gobiernos provinciales.

Entonces, hay que ir más allá de esto. El presidente lo ha dicho con todas las letras y palabras: hay que tomar la decisión de ir a fondo en el tema de la Policía Bonaerense. Por lo tanto, hay que tomar la decisión de ir a fondo. Hoy tuvieron que suspender al titular de la comisaría de la zona donde estaba secuestrado el chico de Blumberg y mañana van a tener que suspender a otro.

En este sentido, el gobierno nacional está dispuesto a acompañar las medidas que sean necesarias, y lo ha demostrado. Yo creo que hay que ir a fondo, rompiendo los laberintos de intereses, que no sólo están vinculados con la política, como algunos quieren hacer aparecer, como si fuera patrimonio de un solo color político par-

tidario, porque en el conurbano bonaerense también hay intendentes y concejales de diversos partidos. Hay que decidirse a ir a fondo, cueste lo que cueste. Esto no significa concebir como responsables a todos los agentes, desde el primero al último; como en todas partes y en todas las instituciones, seguramente habrá gente muy valorable y buena, y también muy mala. El problema es que aparecen sospechados quienes conducen, entonces, si los conductores son malos, por más que los de abajo sean buenos, se torna muy difícil.

Hace pocos días nos hemos enterado de que el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense —varios señores legisladores hablaron de la mala calidad de los servicios penitenciarios— fue denunciado como uno de los principales torturadores de la Unidad Carcelaria N° 9 durante la dictadura. En el mismo artículo se denunciaba la preparación de delitos, la tercerización de la mano de obra de presos o de delincuentes en libertad para utilizarla en asaltos y otros hechos delictivos.

Ahora bien, ¿alguien que tenga una mínima experiencia en materia de seguridad puede pensar en que es factible armar la logística para secuestrar a una persona, mantenerla en cautiverio en lugares absolutamente precarios —fácil y absolutamente controlables— sin cierto grado de aquiescencia o complicidad institucional? Parece que va a haber que situar las cosas en su exacta medida y dimensión.

Cualquier ciudadano hoy tiene miedo no solamente de los delincuentes sino también de la policía que los tienen que cuidar.

Y dígame, si no, por qué, cuando ese vecino llama a la comisaría de Moreno para avisar que le están pegando a un chico y de la comisaría le piden que dé nombre y apellido, cuelga y no dice nada. Esta es la verdad, esto es lo que está pasando en la República Argentina.

Entonces, me parece que nosotros tendríamos que plantearnos como legisladores no ya una cuestión dogmática e ideológica sino una cuestión de eficacia. Hagamos una revisión, por ejemplo, de las modificaciones de la década del 90. Creo que hay más de quince o veinte leyes por las que se agravaron penas. Las hay de los años 91, 94, 96, 99 y hasta de hace muy pocos días, donde terminamos efectuando modificaciones vinculadas con automotores.

Además, en la ubicación temporal-espacial de los hechos delictivos, uno observa cómo se van corriendo las modalidades delictivas de un hecho a otro.

Fijense que cuando se entró fuerte con los operativos de Gendarmería y Prefectura en la provincia de Buenos Aires, en el tema desarmaderos, bajó absolutamente el delito de automotores y recrudeció el de secuestros. Hubo una especie de corrimiento a partir de actos de prevención que efectuó el gobierno nacional a través de la Prefectura y de la Gendarmería en la jurisdicción del conurbano bonaerense...

Sr. Presidente. — Senadora: el senador Losada le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Fernández de Kirchner. — No...

Sr. Losada. — Me la va a tener que autorizar, ya que voy a pedir que la autorizemos a que siga hablando. Porque, si no, acá no se cumple el Reglamento para algunos...

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: yo he escuchado a todos.

Sr. Presidente. — En algunos minutos se cedieron otros senadores.

Sr. Losada. — Digo esto para que nadie tome por su propia decisión la autorización...

Sr. Presidente. — Adelante, senadora.

Sra. Fernández de Kirchner. — Entonces, señor presidente, creo que es importante ubicar el problema en su exacta dimensión. Porque si no, difícilmente podamos dar una respuesta.

Pero además, el tema de la seguridad —muchos aludieron a un problema de recursos— tiene que ver con otras posturas y con otras políticas.

Escucho decir a algunos que éste es un problema vinculado con que la policía tendría que tener más recursos, más patrulleros, y casualmente muchos de los que dicen eso son los que, por ejemplo, cuando se negocia la deuda externa o se negocia con el Fondo Monetario Internacional, critican que no acordemos pagar lo que nos piden.

Cuando uno tiene una política que, en definitiva, radica en abordar los problemas internos como prioritarios en lo que hace a la calidad de los ciudadanos que vivimos aquí, en la República Argentina, todo tiene que ver con todo.

Por lo tanto, en este tema de la seguridad, también la política de recursos tiene que ver con

contar con esos recursos. Y los recursos no son elásticos.

Pero, reitero, señor presidente, que no creo que sea un problema de dos o tres patrulleros más porque si quienes van adentro de los patrulleros son los que tercerizaron para obtener ganancias, los que cobran protección o cometen cualquier otro tipo de modalidad delictiva y no reprimen ni hacen prevención, de nada valdrán todas las modificaciones que se hagan al Código Penal.

Creo tal vez que debemos comenzar a mirar un poco más la Ley de Seguridad Interior, que es la que prevé la actuación federal ante situaciones desbordadas. Tal vez, allí debamos hacer un poco más de hincapié para, entonces sí, reclamar a quien debe garantizar la seguridad interior.

Convengamos en que la decisión de ir a fondo —y todo el mundo sabe lo que estoy diciendo cuando afirmo esto— en el tema de la Policía Bonaerense y en el de la Justicia es un aspecto que no puede ser soslayado por quienes tienen responsabilidades institucionales otorgadas por el voto y la Constitución.

Porque, en definitiva, estamos en un país con una organización entre veinticuatro provincias, una Constitución Nacional, Constituciones provinciales y normativas.

Por eso, digo que, tal vez, deberemos comenzar a contemplar el tema de la Ley de Seguridad Interior para prever situaciones que, muchas veces, desbordan a las propias autoridades provinciales. Y no sé si por impericia o porque no quieren; pero no importa, las motivaciones las deberán valorar los ciudadanos que viven en esa provincia y que son quienes deberán evaluar la conducta de sus autoridades. En definitiva, creo que lo que debemos hacer es ver cómo logramos ser eficaces.

Quiero formular una reflexión y llevar adelante el ejercicio de una convicción.

Yo, que hoy estoy sentada en esta banca, he sido militante política desde muy joven y pude sobrevivir a la etapa de la dictadura, suerte que no tuvieron miles de argentinos. Luego, con el retorno a la vida democrática, nuevamente comencé a militar en el partido en el que he hecho toda mi vida.

Siempre he visto a la militancia política como un compromiso muy fuerte con lo que uno pien-

sa y con sus ideales. Podría haberme quedado trabajando en mi exitoso estudio de abogacía durante los años 80, pero tengo esta vocación política; así como otros tienen una vocación social o profesional de dedicarse a lo que es específicamente suyo.

Desde esta banca, con mis errores y aciertos —seguramente mis errores serán muchos más que mis aciertos—, siempre he tenido la coherencia de defender una línea de pensamiento cuando, tal vez, era muy difícil hacerlo. Por ejemplo, podría citar los años 90, cuando era muy difícil criticar cosas que muchos callaban y también gozaban, mientras el país se derrumbaba y la miseria se hacía dueña y señora. Sin embargo, puedo decir que desde esta banca he defendido mis convicciones teniendo en cuenta la responsabilidad que me correspondía como representante de una provincia.

Aclaro que me refiero a una provincia que, afortunadamente, no tiene los indicadores económicos que tienen las zonas más pobres de este país, y no solamente por una cuestión de recursos petroleros, porque hay otras provincias que tienen mucho más petróleo y gas que Santa Cruz y, sin embargo, están horriblemente mal y terriblemente endeudadas.

Creo que hemos demostrado responsabilidad en la gestión, responsabilidad concreta de gobierno y responsabilidad institucional. Además, pienso que hicimos valer lo que nosotros pensábamos.

No estoy sentada acá por una cuestión de hobby o de irresponsabilidad sino que creo profundamente en lo que hago y, mal o bien, he dado testimonio de ello.

Me gusta escuchar a muchos señores senadores y señoras senadoras que cuando nosotros promovíamos la caducidad de los mandatos, allá por el año 2001 y también cuando miles de hombres y mujeres de la Capital Federal y de las clases medias urbanas se volcaban a la calle, hablaban despectivamente de los “caccroleros”. Pero en ese momento creía que la sociedad estaba reclamando cambios.

Algunos hablan de las clases medias urbanas como si ello fuera estigmatizante o como si fuera un disvalor, pero forman parte de la sociedad argentina y tienen derecho a expresarse con sus valores, necesidades y demandas. Ahora tengo la misma visualización de ellos que tenía en el

2003, y por eso digo que es necesario que debatamos en serio y sin hipocresías qué Argentina queremos y cómo la vamos a construir entre todos.

Finalmente, en ejercicio de esta convicción, les digo que los crímenes son siempre crímenes, ya sea los que se hayan cometido hace veinte años o en el día de ayer, los hayan cometido civiles o uniformados. Es que el valor de la vida no reconoce clases sociales; vale lo mismo la vida de alguien que pertenece a una clase acomodada como la de alguien humilde, la de quien vive en la Capital Federal o en la última provincia de la República Argentina, y lo digo desde mi orgullo y pertenencia provinciana.

Entonces, señor presidente, con esta visualización y esta caracterización, sostengo que debemos abordar el problema.

Reitero que no es un problema de ideologías o de derecha o izquierda sino de eficacia. Ahí están, como mudas testigos, la veintena de leyes que hemos sancionado, inclusive algunas casi en un ejercicio de esquizofrenia.

En el año 2002, cuando se produce la muerte del jefe de custodias del entonces gobernador Ruckauf, el oficial de la Policía Federal Faldutto, modificamos el Código Penal castigando a quienes mataban a un agente de Policía.

Luego, cuando se produce el asesinato del joven Demonti, que es tirado al Riachuelo por agentes de la Policía Federal, ¡fijense qué es lo que ocurre! En el primer caso, como habían matado a un agente de la Policía Federal, se estableció el agravamiento de las penas para aquellos que mataran a policías; después, cuando dos agentes de la Policía Federal tiraron al joven Demonti al Riachuelo —todos recuerdan ese caso terrible y horrendo, donde aquellos que deben cuidar la vida lo tiraron allí para que se ahogara—, provocamos la otra modificación, casi a *contrario sensu*, como decimos los abogados. Algo está pasando aquí. En algo estamos fallando no solamente quienes estamos sentados en estas bancas, sino también los que muchas veces, sin gestos espasmódicos —como se ha dicho aquí en reiteradas intervenciones—, por la desesperación —porque hay mucha desesperación—, por el dolor —porque hay mucho dolor— o por la tragedia —porque hay mucha tragedia—, creemos con muy buena fe y con muy buenas intenciones estar atravesando lo cierto. Pero yo les

pido que hagamos un ejercicio de racionalidad y de examen, porque somos los únicos en la escala animal que tropezamos dos veces con la misma piedra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Misiones, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Losada. — Señor presidente: creo que la mejor respuesta que podemos dar a quienes están reclamando la sanción de estos proyectos de ley es votarlos, motivo por el cual voy a ser muy breve.

En primer término, quiero agradecer profundamente a los miembros de mi bloque porque estando absolutamente todos presentes quisieron hacer su mayor aporte no haciendo discursos y acompañando este reclamo de la sociedad. Por ello, queda a mi cargo, como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, expresar nuestra posición.

A todos nos conmovió profundamente el episodio de la muerte del joven Axel. Nos impactó como impacta toda muerte. Posteriormente, esa sensación se trasladó a un sentimiento colectivo, protagonista y movilizador de una sociedad que se convocó para acompañar el enorme dolor de un padre que, lejos de resignarse, salió a pedir justicia, ya no para él sino que lo hizo solidariamente para evitar que otros padres sufrieran en el futuro su mismo dolor. La grandeza de salir a luchar por los hijos de otros padres hace que tomemos este hecho como un punto de inflexión, porque esa movilización tuvo el sentido de la construcción.

Algunos pueden querer cabalgar sobre esa movilización con un comportamiento perverso y otros quisieron o querrán buscar algún otro sesgo que no sea el del legítimo reclamo. Pero en esa manifestación existió la voluntad mayoritaria de reconocer que el camino para ese reclamo era, precisamente, el de las instituciones de la República. Y así lo expresó claramente quien es el mayor agredido: el padre del joven asesinado, que dijo que la democracia y las instituciones son el camino.

Por ello, señor presidente, la pelota está de este lado, y no solamente del Congreso porque, en ese caso, también nos estaríamos equivocando; esto es responsabilidad de todas las instituciones de la República: del Poder Ejecutivo, de los legisladores y del Poder Judicial. Acá no

hay salvamentos individuales y si alguno cree que tiene menos culpa que otro se equivoca. La gente está harta de que se discuta quiénes tienen menos responsabilidades; la gente quiere encontrar soluciones.

Por ello, insisto en que hoy deberíamos contar aquí con la presencia de los ministros responsables. Porque si el pueblo democrático vino al Congreso, no entiendo por qué los ministros de un gobierno democrático no transitaron ese mismo camino.

Lo dije la semana pasada cuando se trató la intervención a la provincia de Santiago del Estero: esperaba que en la hoja de ruta de los ministros también estuviera prevista una visita al Congreso. Y hoy vuelve a ocurrir lo mismo.

Igualmente, no quiero seguir en esa línea porque pareciera que quisiéramos esconder nuestras propias responsabilidades. Simplemente, apelamos como fuerzas democráticas, a que entre todos los responsables institucionales encontremos la respuesta. Respuesta que no se va a alcanzar con estas normas —ya se ha dicho sobradamente— ni se va a encontrar en los discursos sino que estará en la eficacia de las medidas que se tomen y en la ejecución de las decisiones y leyes que se dicten.

Señor presidente y estimados colegas: nuestra obligación es enorme. La gente ha perdido credibilidad en sus instituciones, pero hubo una movilización que nos ha dado la oportunidad de volver a creer. Por eso es que, como nunca, tenemos que tomar los caminos adecuados; caminos que serán abordados en conjunto con el Poder Ejecutivo, las provincias y sus respectivos sistemas judiciales.

Nadie es más iluminado que otro, todos somos absolutamente responsables porque están en juego la fuerza y las convicciones del sistema democrático.

No es poca cosa lo que se está decidiendo en este tipo de comportamientos. Nosotros vamos a pedir que se voten rápidamente la constitución de los juzgados que se reclaman. Quere-mos expresar nuestra solidaridad con los proyectos de nuestras colegas, las senadoras Curletti y Lescano. Entendemos que son aportes y no soluciones definitivas.

Por eso, en nombre de nuestro bloque, dejo expresado el apoyo a los proyectos de ley en consideración.

En particular, se harán ciertas sugerencias por parte de algunos colegas. Pero la mayor urgencia es, precisamente, dar las leyes al país y a la sociedad que las está esperando.

Sr. Presidente. — Por favor, la Presidencia solicita que se preparen las tarjetas para votar.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: estamos concluyendo en esta tarde un debate importante, continuidad de otros que el Senado ha dado a partir del 2002.

Siempre hay un fuerte compromiso con la culpa. Es indudable que en esta sociedad hay graves dramas y muchas demandas insatisfechas, y también hay problemas de información.

El Senado abordó la problemática de la seguridad desde el año 2002 y así como hemos sido responsables de otros males, este tema lo hemos tratado.

Quiero rescatar además la crónica de los medios de comunicación. Lo dijo el senador Terragno “a la pasada” y tal vez no quedó lo suficientemente instalado. Apenas asumió el presidente Kirchner, el primer proyecto de ley que envió al Congreso entró por la Cámara de Senadores. Fue la Ley Antisecuestros, un trabajo realizado por una comisión de especialistas en la que tuvimos participación por el Senado el senador Agúndez y quien les habla. Fue un muy buen instrumento para la investigación de este grave delito que hay en la Argentina, por el que se endurecieron las penas. Llevamos la pena del secuestro extorsivo seguido de muerte a la figura de la reclusión perpetua. También incorporamos las figuras del arrepentido, del informante y de la recompensa, métodos que realmente los países modernos utilizan para la investigación de este tipo de delitos de carácter organizacional.

El diario “La Nación” dice: “La norma sancionada por el Congreso aumenta las penas para casos de secuestros y crea la figura del arrepentido. Importante avance en esta materia”.

En el diario “Clarín” el cuerpo de la noticia indicaba: “Desde hoy los secuestradores deberán enfrentar penas más duras cuando sean condenados. Eso es lo que ordena la ley votada anoche por el Senado, que se convirtió en la primera ley sancionada desde que el presidente Néstor Kirchner asumiera la presidencia. La norma legisla sobre uno de los temas más sen-

sibles a la sociedad e intenta limitar los secuestros mediante la amenaza de castigos más duros”.

Después sancionamos la ley de armas. Hubo un reclamo mediante una plaza que se armó frente al Congreso por las víctimas de delitos. Recuerdo que en ese momento los recibimos con el presidente del Senado y modificamos el sistema de portación y tenencia de armas de fuego.

También aquí fijamos el criterio de la excarcelación, que quedó a la valoración del magistrado para evaluar la peligrosidad del sujeto. Esto aún está pendiente y creo que se estaba tratando en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, agravamos las penas para los que maten policías y también para los policías que cometan delitos. Es decir, hubo una tarea que hoy continúa. También es cierto que en el medio hubo un reclamo ciudadano importantísimo porque la gente cansada y hastiada. Hay que entender lo que significa vivir en el escenario del conurbano bonaerense, donde la vida no vale nada, donde se roba y se mata a cada rato y a cualquier hora. Esa es la sensación que hoy tienen los ciudadanos. Un escenario altamente explosivo, donde están concentrados casi catorce millones de argentinos. Pero este reclamo de la ciudadanía fortalece la convicción de seguir avanzando.

Por eso, quiero decir que hoy vamos a dar un paso más y que aquí no se termina. Los temas van a continuar en las semanas que vienen. Además, en materia penal hay que analizar con detenimiento cada una de las iniciativas. No vamos a votar nada ligeramente. Vamos a actuar con responsabilidad.

Hoy avanzaremos en tres aspectos que han sido desarrollados por los senadores que hablaron anteriormente.

Uno trata sobre el juego clandestino, que significa una fuerte evasión al Estado nacional y a los organismos de acción social ya que el juego legal sirve para canalizar los recursos hacia la acción social. Es decir que esa iniciativa, que había iniciado en su momento el entonces diputado Daniel Scioli en la Cámara de Diputados —fue sancionada por esa Cámara—, significa, además, romper uno de los financiamientos ilegales de la mala policía. Porque el juego clandestino era una de las primeras actividades que significa-

ba financiamiento ilegal.

Y alguien dijo muy bien que no es lo mismo levantarse al quinielero de la esquina que al capitalista que pasaba después a buscar la recaudación. Precisamente, la norma en cuestión apunta fundamentalmente a terminar con el capitalista.

La otra iniciativa tiende a limitar el derecho a la libertad condicional.

En realidad, creo que los parlamentarios tenemos que empezar a hacer un ejercicio doctrinario e incorporar al debate de la academia y de la universidad un nuevo criterio sobre las penas. La pena es la respuesta civilizada del Estado. Antes existía el mecanismo primario de la venganza, la venganza de la sangre.

La pena es el instrumento y la respuesta del Estado; una respuesta que se ejerce desde la institucionalidad, desde la acción de la justicia. Esto no se hace en beneficio de la víctima ni como sanción al victimario. Hay que observar la pena también desde la mirada ejemplificadora de la sociedad. Cuando una sociedad ve que un asesino —autor de delitos como el secuestro extorsivo o la violación seguida de muerte, o al que mata para ocultar el propio delito— cumple 10 o 12 años de condena y sale alegremente a la calle, sin dudas percibe una gran labilidad y flexibilidad, porque ésa no es la pena esperada para ese delito. En la Argentina la pena tiene que ser cumplida integralmente; y, en especial, en el caso de los delitos graves, para que la sociedad pierda este concepto de impunidad que muy bien desarrolló la senadora Fernández de Kirchner.

La pena significa el cumplimiento integral de la condena. No es lo mismo el delito de aquel que roba una bicicleta o que roba en una verdulería para comer. No es lo mismo el delito que comete un primario al que cometen organizaciones delictivas y secuestradores extorsivos que, además, a veces, ofrendan un cadáver a la sociedad para seguir manteniendo la industria del secuestro; porque si la gente denuncia, no paga rescates, el sistema se torna eficaz, la policía es honesta y los jueces y fiscales trabajan con inteligencia y con capacidad resolutive, se termina esa industria. Por eso, de vez en cuando tiran un cadáver para decir que están detrás y que si no pagan, la víctima va a correr esa suerte. Son señales que se envían desde las or-

organizaciones delictivas poderosas. ¿O alguien va a hacernos creer que la autora del crimen de Axel Blumberg es esa pareja de jóvenes que lo cuidaban en Moreno? ¡Vamos...! Aquí hay una organización que tiene logística y, que además, realiza una tarea previa de inteligencia.

Como bien se ha mencionado aquí, generalmente las víctimas de los secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires son ciudadanos que viven en los barrios económicamente poderosos, en especial en la zona Norte. Allí se desarrolla una tarea de logística, de inteligencia previa, para saber a quién secuestrar. Luego, se lo contiene en estos lugares marginales, de mucho desamparo y soledad. Los que conocen la zona de La Reja o Moreno saben que son barriadas donde hay muy pocas viviendas. Entonces, hacia allí los llevan y los "guardan". Es decir, hacen tareas de inteligencia para determinar en qué barrios van a secuestrar a la gente.

Ahora bien, aquí hay una organización que funciona muy bien. Y creo que no me equivoco en nada si digo que esta organización tiene relación directa con la policía: porque no existe situación que ocurra en el territorio bonaerense y del "conurbano" que no conozca la policía bonaerense.

Por eso, señor presidente, limitar la libertad condicional para este tipo de delitos nos parece fundamental. Creemos que es una medida que la sociedad tiene que tomar como ejemplar, para que esos sujetos, esas bandas y esas organizaciones sean desmantelados. Sin dudas, hay que profundizar la investigación hasta el hueso. Debemos llevarla al seno de la propia policía, porque cuando uno se entera de que un comisario de Punta Alta o de un pueblito cercano a Bahía Blanca tiene depositados en su cuenta o en la caja de seguridad de un banco de la provincia de Buenos Aires la exorbitante suma de dos millones o de novecientos mil dólares —si mal no recuerdo—, realmente sería interesante analizar la capacidad de ahorro o si nos tenemos que preguntar si ésa no es la recaudación de la sexta zona, que tiene como cabecera la ciudad de Bahía Blanca, con más de quinientos mil habitantes.

Fíjese, señor presidente, que uno de los crímenes más graves que han ocurrido en esa región de la provincia es la muerte de una parejita —él, hijo de un comisario y ella, la novia—, jóve-

nes de 19 años. Hoy la madre y el padre están haciendo todavía fuertes reclamos. De hecho, la madre sospecha que fue un crimen donde hubo participación policial. Les robaron un Chevrolet Corsa. Es una de las marcas más robadas, junto con el Fiat Palio y el Peugeot chico —el 206—. Se trata de vehículos que rápidamente van al desarmadero. Después voy a dedicar un párrafo al desarmadero.

Yo escucho a algunos comentaristas y periodistas en la Argentina que realmente carecen de una adecuada información —el problema en la Argentina es la información— porque hablan de desarmaderos ilícitos. Hablan de desarmaderos lícitos e ilícitos; y yo digo que son todos ilícitos, todos, absolutamente todos. Creo que todos se nutren de repuestos desarmados de autos robados. De hecho, esta Argentina también tiene una gran capacidad para convertir negocios legales en absolutamente ilegales. Son todos ilegales. Forman parte de la Argentina "trucha"; la que vemos cotidianamente en la calle.

Yo vengo caminando al Congreso —vivo en este barrio— y en la calle Rivadavia, en cada esquina, me paran chicas que reparten tarjetas que dicen: "Vendo celulares usados". ¡Es increíble la capacidad y el ingenio de los argentinos! ¡No hay ningún lugar en el mundo donde se vendan celulares usados! Acá se reciclan y se venden, lo cual da lugar a la actividad ilícita del robo de celulares.

En la calle Libertad se venden Rolex y pasacasetes, senadora Kirchner. Se siguen vendiendo alegremente. Si usted pasa por la calle Libertad verá que hay negocios que tienen apilados los pasacasetes. Por supuesto que cuestan un 20 por ciento de lo que vale un pasacasete nuevo.

También está el tema del repuesto manchado de sangre, del repuesto de muchos autos robados en la Argentina cuyos dueños terminan con una bala en el pecho. La estadística indica que aumentó la cantidad de crímenes como consecuencia del robo de automotores. De hecho, cambió el perfil del robo de automotores. Antes, en la Argentina que crecía, los que robaban autos eran especialistas que, además, abrían al auto con ganzúa. Eran escruciantes. Eran profesionales y lo hacían limpiamente. Nunca tocaban al chofer del auto. En general lo hacían de noche. No estaba bien, por supuesto; pero hoy los muchachos salen armados a punta de

revólver y, si el chofer tiene la desgracia de cometer algún gesto, se "come" una bala, señor presidente. ¿Y saben cuánto se paga ese auto en el desarmadero? Se paga entre 700 y 900 pesos. Eso es lo que paga el dueño de un desarmadero al que se roba el auto a punta de pistola, "de caño", le dicen los muchachos en la jerga. "Salen de caño", levantan autos y de vez en cuando se "cargan" a alguno también. Lo mandan al cementerio. O le roban al hombre que estaciona al auto con su familia y, de paso, se meten adentro de la casa y hacen otras tropelías.

Esta es la Argentina que estamos viviendo, con una cobertura de negocios lícitos, presidente. Porque los desarmaderos tienen habilitación municipal. Están habilitados: va el inspector y los habilita. De hecho, van y compran en los remates un auto chocado. Tienen los papeles de ese auto. Después lo desarman y dicen: "una puerta, un capó, la tapa de la rueda de auxilio". Claro; después tienen sucesivos autos robados y siguen teniendo esa documentación. Entonces, es una documentación para gilés, para tontos; consentida, presidente: consentida. El modelo funciona con autorización municipal y con conocimiento policial, porque nada de lo que se mueve en Buenos Aires lo desconoce la policía, presidente. Los desarmaderos están a la luz del día.

Y le voy a decir algo más interesante, producto de una experiencia personal. A mi hermana le robaron el auto en Lomas de Zamora a las 6 de la tarde, a punta de revólver. Hizo la denuncia pero, por supuesto, el auto no apareció nunca. Se lo robaron en el centro de esa localidad. Hablé con el jefe de la departamental y le dije que si no aparecía en pocas horas seguramente iría a parar a los desarmaderos de Camino Negro, y que no aparecería más. Por supuesto que no apareció nunca.

Pero lo interesante es lo que sucedió después. En el diario La Nación, a dos meses de ocurrido este hecho, que tuvo lugar el año pasado, se publicó una estadística de los robos de automotores en la provincia de Buenos Aires. El departamento de Lomas de Zamora estaba a la cabeza del robo de automotores. Si en Lomas de Zamora se robaban 100, en Avellaneda se robaban 50 y en Quilmes, 30.

Yo, que conozco la provincia de Buenos Aires -viví hasta los veinticuatro años y luego me mudé a Río Negro- les puedo decir que el escenario urbano, social y económico de Quilmes,

Avellaneda y Banfield no es tan disímil; es más, considero que es bastante parejo. No había ninguna razón para que Lomas de Zamora estuviese a la cabeza del robo de automotores si no operara una zona liberada. En realidad, Lomas de Zamora tenía zona liberada para el robo de automotores, los partidos de San Isidro y de Moreno para el secuestro extorsivo, y en Avellaneda... no sé, jugarían a otro juego, narcotráfico, qué se yo, u a otra actividad ilícita.

Este es el escenario. Y este análisis descartado de la provincia de Buenos Aires no quita que no analicemos la problemática de la Capital -que deja mucho que desear-, donde también se requieren de reformas de parte de la Legislatura, porque muchos delitos menores que se cometen en la calle se deben a la flexibilidad de las normas, consecuencia del Código de Convivencia urbana. Ese será otro debate. Simplemente quiero advertir que el tema también se da acá.

Señor presidente: estoy convencido de que hay que prohibir la venta de celulares usados e identificar con claridad a los titulares de celulares. Es necesario que las empresas que fabrican celulares cambien el sistema de comercialización. Tenemos que ir a un esquema de legalidad integral en donde el celular de una persona esté a su nombre -identificado- y en el que la persona jurídica que compra celulares diga quiénes son los responsables. Esto es así porque en la logística del crimen organizado, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, los que compran y venden drogas tienen celulares truchos. Ninguno se comunicará desde un celular a su nombre o desde un teléfono fijo. Los que venden y compran repuestos y autos robados en desarmaderos también tienen celulares truchos. El secuestro extorsivo tiene una logística armada por los bolseros. Lo primero que se hace es determinar el lugar de guarda y tener la logística de los celulares para poder comunicarse con la familia de la víctima a los efectos de cobrar el rescate. Estos mecanismos funcionan así.

En consecuencia, tenemos que desarmar la Argentina que funciona de manera ilegal, a la luz del día y en la cara de todos los argentinos. Además, debemos terminar también con esa actitud que muchas veces nos hace cómplices de estos actos. Recién la senadora Fernández de Kirchner describió muy bien la cadena de

comercialización de estos elementos. Si no hubiera comercialización, tampoco habría delito.

Por eso, como agenda de este tema —y porque lo estuve conversando además con muchos senadores—, avanzaremos con el cierre de todos los desarmaderos de la Argentina. Buscaremos alentar la producción y fabricación de repuestos nuevos, y conversaremos con el Poder Ejecutivo y con el ministro de Economía para lograr incentivos fiscales y abaratar los precios. Hay que terminar con lo que produce la mayor cantidad de crímenes y de actos delictivos en la Argentina, que constituye la recaudación ilegal para las fuerzas policiales. Si vamos a terminar con los teléfonos “truchos”, también tenemos que terminar con los desarmaderos “truchos”.

No quiero prolongar esto. Nosotros vamos a seguir trabajando. Además, vamos a estar a la espera de la definición del Poder Ejecutivo. Sabemos que hay una gran preocupación del presidente que está analizando una propuesta que le ha alcanzado el ministro de Justicia. Esperamos también que en la provincia de Buenos Aires haya una respuesta institucional. El problema no es solamente del gobernador, sino de todos los representantes institucionales, de los intendentes, que conocen y saben lo que pasa en cada uno de los ejidos municipales; de la Justicia, que muchas veces produce decisiones incomprensibles.

Puse el ejemplo Puccio, una verdadera burla al sistema judicial argentino, a la sociedad; el personaje más nefasto, más siniestro, que secuestraba, asesinaba y que ponía a las víctimas en el sótano de la casa. Lo pongo como el ejemplo más paradigmático, más terrible, más tenebroso de la Argentina delictiva: el clan Puccio. Hoy los dos están en libertad, el padre y el hijo. Hace menos de once años que han ocurrido estos hechos. En el 85 la Policía Federal le derrumbó el garaje de la casa y encontró a la viuda de Bollini atada, encadenada en el sótano de la casa y él conviviendo con la mujer y con los hijos, y hoy está en libertad. Esto es lo que no funciona más en la Argentina. Este sistema no puede funcionar, la pena tiene que cumplirse especialmente para determinados delitos que denominamos o calificamos como delitos aberrantes.

Señor presidente: vamos a seguir trabajando. Este debate no ha concluido; hay muchas iniciativas que estaban siendo analizadas en la

Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El senador Agúndez ha hecho un trabajo importante, lo estamos haciendo de común acuerdo, porque la seguridad es una política de Estado, no es patrimonio de un partido. Debe ser una política sostenida por todos los sectores de la sociedad y, fundamentalmente, por todos los partidos. Así que vamos a seguir trabajando con esta convicción.

Estoy convencido de que el presidente va a poner mucha energía y mucha decisión para impulsar los cambios que hagan falta y para que las provincias también inicien un proceso de saneamiento, de recambio cultural, de formación de cuadros, de cambio de doctrina, porque es lamentable que ocurran cosas como las que sucedieron en la fiesta de la promoción de la Escuela Vucetich del año 2001, ocasión en la que quienes se recibieron hicieron un escándalo y terminaron todos alcoholizados. En ese estado, rompieron todo en el lugar donde se hizo la cena de colación de grado. Acá hay que cambiar la formación y la doctrina. Hay que preparar policías honestos. Va a haber que asignar recursos a la seguridad; va a haber que aumentar salarios porque los salarios de los policías son muy magros.

Una última reflexión, va a haber que hacer cárceles en la Argentina. No se puede seguir sosteniendo un sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires o en el sistema federal con cárceles hacinadas. En la provincia de Buenos Aires hay cien mil presos; cincuenta mil están en comisarias. ¡Inviabile! Va a haber que hacer cárceles, de máxima seguridad, de mediana seguridad y cárceles abiertas que permitan que esos primarios tengan la posibilidad de reinserirse y de tener un trabajo comunitario. Además, los presos tienen que trabajar en las cárceles, deben tener una actividad que los ocupe, porque de lo contrario se dedican a traficar drogas, manda el más fuerte, se preparan para robar, organizan las bandas. Eso es lo que hacen, hoy, las cárceles argentinas. Así que bienvenido este debate o, mejor dicho, a la continuidad de este debate que viene haciendo el Senado. Vamos a seguir trabajando con mucha convicción y, seguramente, de cara al futuro, vamos a poder decirle a la sociedad que nosotros hemos cumplido con nuestra parte, la parte que nos toca, que es legislar seria y responsablemente,

pensando en el beneficio de los ciudadanos y en la seguridad de los argentinos.

Sr. Presidente. – En primer lugar, vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en los expedientes S.-40/04 y S.-793/04, que hace referencia a la limitación de la libertad condicional.

Sra. Gallego. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero plantear una observación al inciso 2 del artículo 1º, porque creo que no es menor. Si me lo permite la Cámara, lo voy a hacer.

– Murmullos en el recinto.

Sr. Mayans. – Corresponde votar en general.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general. Después, cuando entremos en la consideración en particular, podrá hacer su planteo.

Sra. Gallego. – De acuerdo.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 58 votos afirmativos, uno por la negativa y ninguna abstención.

La votación resulta afirmativa en general.

– El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – En consideración en particular.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo que primero escuchemos las objeciones de los senadores y luego votemos en forma conjunta los artículos 1º y 2º porque no vamos a aceptar modificaciones. De todas maneras, escuchamos la objeciones que se quieran formular.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente: en el inciso 2 del artículo 1º, donde dice: “Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, es-

pecialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.”, se debería agregar: “...y cualquier otro tipo de sustancias tóxicas, legales o no”. De lo contrario, pareciera ser que no puede beber, pero sí drogarse. Todos sabemos lo que implica la droga en las conductas delictivas. Simplemente es una sugerencia, que no sé si va a ser aceptada o no, pero tiene que ver con la modalidad de los delitos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Conti.

Sra. Conti. – Señor presidente: aclaro que no es que no esté contemplado que la persona pueda intoxicarse. Lo que pasa es que si lo hace es una contravención, un delito. En cambio si bebe alcohol, no.

Sr. Presidente. – ¿Qué dice la comisión?

Sr. Agúndez. – No se acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente. – Entonces, no se acepta la modificación.

Si hay acuerdo, se van votar los artículos 1º y 2º en forma conjunta.

– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se van a votar los artículos 1º y 2º.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 58 votos afirmativos, uno por la negativa y ninguna abstención.

– El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – Como el artículo 3º es de forma, quedado sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

A continuación, corresponde someter a votación el dictamen de comisión en el proyecto de ley sobre regulación y venta de telefonía celular móvil, contenido en el expediente S.-2.979.

Se va a votar en general.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

¹ Ver el Apéndice.

Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Han votado 59 señores senadores por la afirmativa, ninguno por la negativa y no se han registrado abstenciones.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa en general por unanimidad.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – En consideración en particular los dieciséis artículos.

Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: solamente quiero hacer una referencia general, sin entrar en la discusión en particular, a pesar de que tengo diferencias –incluso filosóficas– respecto de este proyecto.

Soy consciente de la gravedad del problema. Debo recordar que el tema estaba incluido en el temario de la semana anterior, porque realmente en el Senado venimos trabajando con relación a estos temas. Se iba a discutir un proyecto que luego ~~excluimos del orden del día ante~~ legítimas observaciones que nos hicieron llegar para efectuarle algunas correcciones.

En este tiempo que se había tomado me puse a elaborar un proyecto, que entendía que era mucho más simple, pero no voy a pedir una modificación ahora. Sé que no hay tiempo y que no se va a modificar el despacho en consideración. Pero sí quiero hacer un aporte para mejorar incluso este mecanismo.

Soy consciente de que el tema de los celulares “truchos” es uno de los instrumentos del delito que hay que combatir.

Pero mi propuesta era mucho más simple. Se refería, sencillamente, a obligar a las empresas prestadoras del servicio telefónico a que sean ellas las que lleven los registros con todos los datos acerca de sus titulares. Y en aquellos casos en que esto no se verificara, sencillamente, se le quitaba el servicio.

Yo entendía que éste era un mecanismo práctico que nos evitaba el riesgo de meternos en normas penales que realmente pueden tener efectos no queridos, como bien señalaban algunos senadores.

Dejo esto como un aporte para una futura discusión. Y como no hay alternativas, he votado favorablemente en general y lo voy a hacer, en particular, porque sería peor que no existiera una punición de este hecho, aun cuando no comparta muchas de las normas que estamos votando.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso, luego el senador Daniele, la senadora Ibarra, el senador Morales y el senador Capitanich.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el artículo 1º está contemplando las empresas legalmente autorizadas y no contempla los canales oficiales que tales licenciatarias designen de acuerdo con la reglamentación.

En ese sentido quiero proponer la siguiente redacción: “La comercialización de servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas legalmente autorizadas para ello, por medio de los canales oficiales que tales licenciatarias designen, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la presente, quedando prohibida la actividad de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona que no revista ese carácter”.

Porque las licenciatarias tienen facultades de nombrar canales oficiales a través de los cuales ellas activan los servicios.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Daniele.

Sr. Daniele. – Señor presidente: quiero hacer una observación al artículo 6º, teniendo en cuenta la objeción planteada por la señora senadora por La Pampa, Gallego y el señor senador Yoma.

Creo que el objetivo que nosotros buscamos, que es el registro de los celulares, está contemplado perfectamente en el artículo 2º. Y de ninguna manera pretendemos regular la venta de tarjetas para el uso de celulares.

Por lo tanto, yo dejaría en el artículo 6º que el Poder Ejecutivo reglamentará la venta de las tarjetas telefónicas. Y, por supuesto, en el resto de los artículos voy a votar en forma afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: quiero referirme a algo que fue manifestado por el senador Capitanich. Dado que el artículo 4º está planteando la prohibición de la venta, cesión y/o transferencia, la importación y la exportación

¹ Ver el Apéndice.

de las terminales o equipos usados, me parece que el artículo 5º es totalmente contradictorio, porque desvirtúa el concepto que plantea el artículo 4º.

Es decir, si se prohíbe la venta, cesión y/o transferencia, no se puede establecer, en el artículo 5º, cuál es el mecanismo que tienen que seguir los que hagan transferencia de equipos o terminales.

Lo que planteo, concretamente, es la eliminación lisa y llana del artículo 5º. No me parece que la modificación a establecerse sea la que había sugerido el senador Capitanich en cuanto a la eliminación del concepto de transferencia en el artículo 4º. Salvo que los autores del proyecto me indiquen cuál es el caso de transferencia en que no se trate de usados —en cuyo caso yo lo aceptaría—, me parece que hay que eliminar, lisa y llanamente, el artículo 5º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — En primer lugar, quiero hacerle una consulta al miembro informante, para saber si se va a aceptar algún tipo de modificación. De lo contrario, hacemos todas las propuestas de modificaciones y pasamos a la votación directamente. Es decir, quiero saber si desde la comisión existe la vocación de aceptar propuestas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Sí, en este tema vamos a aceptar algunas modificaciones. Quiero decir que la comisión cabecera es la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Por una razón de práctica tuvimos que hacer rápido las cosas el viernes pero, de todas maneras, si además los autores del proyecto, a los efectos de enriquecerlo, aceptan las modificaciones, como segunda comisión nosotros no tenemos inconveniente en hacerlo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich, para ampliar la propuesta.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: esta comisión acepta la eliminación del artículo 5º, porque perfecciona la normativa. Fuera de eso, no aceptará ninguna modificación adicional.

Hemos estado soportando permanentemente acciones o lobbies de carácter directo o indirecto y no hay voluntad ni de las empresas

licenciatarias ni de las comercializadoras de generar, motu proprio, ningún mecanismo de flexibilización.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Estaba en uso de la palabra la señora senadora Vilma Ibarra...

Sra. Fernández de Kirchner. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la interrupción, señora senadora?

Sra. Ibarra. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — Coincido con que no sea modificado, porque creo que la expresión “a través de las empresas legalmente autorizadas para ello” resulta omnicomprendiva de todos aquellos que están autorizados para comercializar este tipo de servicio, ya se trate de una integración de carácter vertical u horizontal de las empresas. No obstante, creo que hay que hacer algunas modificaciones porque entiendo que existen algunos errores de redacción.

Así, por ejemplo, en el artículo 4º se hace referencia a la importación y la exportación temporaria. No sé cuál es el concepto de importación y exportación “temporaria”. Les pido a los autores que me expliquen qué significa la adjetivación “temporaria”.

Por otra parte, el artículo 7º hace referencia a las condenas firmes dictadas en su contra por delitos dolosos graves; me gustaría saber, en ese sentido, cuáles son los delitos dolosos graves a los cuales se hace referencia.

Son cuestiones formales de redacción, pero si se remite el proyecto a la Cámara de Diputados, tal vez vuelva con modificaciones justamente por estas cuestiones.

Reitero; no entiendo la figura de la exportación o importación temporaria; no sé lo que es.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Ibarra. Luego responderá el señor senador Capitanich.

Sra. Ibarra. — Quiero hacer referencia a dos temas, además de los recién manifestados.

Yo había hecho una mención con respecto al antiguo artículo 8º, que ahora es 9º. Dicho ar-

tículo dice así: "Facúltase a las fuerzas policiales y de seguridad a verificar la condición de usuario o cliente del servicio de comunicación móvil y en caso de comprobarse la tenencia irregular, proceder al secuestro del equipo", y ahora se agregó "...dando debida intervención a la autoridad judicial o al Ministerio Público competente".

En esta norma encuentro un problema. La tenencia irregular, según surge del propio texto de la ley, es aquella en la que el poseedor del aparato no es el cliente titular del servicio ni un usuario autorizado, como podría ser el caso de una persona jurídica que determina qué usuario va a utilizarlo. Sería, por ejemplo, el caso de una persona que le prestó su teléfono celular a otra. La persona que lo está utilizando porque se lo han prestado sería, según esta norma, un tenedor irregular.

Mi pregunta es la siguiente: si la tenencia irregular no está tipificada como delito ni es una contravención, cuando se comprueba la tenencia irregular se secuestra el aparato y se le da intervención a la autoridad judicial o al Ministerio Público competente en función de qué causa o qué delito.

Entiendo que haya que buscar algún tipo de control, porque creo que es muy malo dejar en manos de la Policía la posibilidad de contar con una innumerable cantidad de celulares pero, si la tenencia irregular no es un delito...

Sra. Fernández de Kirchner. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la interrupción, señora senadora?

Sra. Ibarra. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — El objeto de esta ley es prohibir la venta de teléfonos celulares usados.

Con la aprobación de los primeros artículos, en los que se considera ilegal la venta de teléfonos celulares usados, pasa a ser tenencia irregular el tener un celular que no haya sido adquirido de primera mano y a nombre propio.

El artículo 7º de esta ley convierte en tenencia irregular el hecho de tener un teléfono celular usado.

Creo que la inteligencia de los autores de la norma ha sido la de considerar a una persona que no puede acreditar que es titular "cero kilómetro" —por así decirlo— u originario —si se me permite el término— de ese teléfono celular nuevo; sería considerado como irregular; esto sería así justamente por la propia redacción de los primeros artículos.

Tal vez pueda lograrse una mejor redacción o formulación —no lo descarto—, pero entiendo que ésa ha sido la inteligencia de los autores del proyecto.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Entiendo el concepto, pero creo que no es lo que está formulado, porque en realidad las causas penales y las intervenciones judiciales y fiscales se realizan a través de la investigación de delitos. Y lo que acá se penaliza es la comercialización de quien no reviste calidad de licenciatario, y la conducta de quien realizare la activación o reactivación, reemplazarlo, duplicarlo o alterar un servicio de comunicaciones móviles; no el que lo tiene, por ejemplo, porque se lo prestaron. Porque no está penalizada la simple tenencia de algo que no es mío. Un ejemplo sería el siguiente: yo le presto el teléfono celular a mi tío, a quien se lo secuestran porque lo tenía en su mano cuando lo requisaron. En ese caso, mi tío no estaba cometiendo ningún delito, por lo cual no se puede iniciar una causa penal. Pues bien, ¿cómo interviene un juez o un fiscal? Dejo planteada esta pregunta.

En lo que se refiere a los artículos 10, 11, 12 y 13, existe un problema con las penas que he conversado con el señor senador Terragno. Si bien él se va a referir a esa cuestión, yo digo que personalmente también creo en la desproporción de las penas que allí se establecen. De cualquier manera, el señor senador Terragno se va a referir a ese aspecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — Creo que estamos legislando sobre figuras novedosas. De cualquier modo, me parece que el ejemplo que acaba de citar la señora senadora Ibarra podría asimilarse al caso de los vehículos. A mí también me pueden prestar un automóvil, pero resulta que si cuando lo estoy manejando me para

la Policía y no puedo acreditar su titularidad no sé si me llevarán detenida pero; por lo menos, me demorarán hasta que pueda acreditar esa titularidad. Esto es lo que sucederá ante cualquier control policial. De hecho, el vehículo puede ser prestado por algún pariente o amigo, pero si no puedo acreditar tal circunstancia y quién me autorizó para su uso y si no exhibo las correspondientes autorizaciones, la Policía me detendrá hasta que se aclare de quién es ese automóvil.

Lo que pasa es que estamos creando y legislando sobre figuras novedosas, del mismo modo que debe haber ocurrido en la época de irrupción de los automotores. Pero se me ocurre que el ejemplo que mencionó la señora senadora Ibarra es absolutamente asimilable al caso de los automotores. ¿A quién no le han prestado alguna vez un vehículo? ¿A quién no lo han parado alguna vez en un control policial? Pues bien, si a partir de la normativa vigente en cuanto a la cédula de identificación del vehículo y al robo de automotores, etcétera, uno no puede acreditar que está utilizando ese automóvil porque se lo han prestado, para lo cual tiene autorización de su dueño, será detenido por parte de la Policía, que es la encargada de hacer este tipo de controles.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — A mí me parece que nos estamos confundiendo; o sea, con el afán de esclarecer las cosas nos estamos confundiendo.

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? El primer objetivo es prohibir la venta de teléfonos celulares usados. ¿Cuál es el otro objetivo? Que las empresas que se dedican al negocio de venta de teléfonos celulares tengan un sistema de comercialización claro y transparente que signifique que cada persona que tiene un celular lo posea porque es su titular y porque, además, para adquirirlo acreditó dónde vivía con la exhibición de alguna boleta de impuesto. Cuando uno solicita la conexión del sistema de televisión por cable nos preguntan dónde vivimos y cómo lo acreditamos. A tal efecto, nos piden que presentemos una boleta de impuesto y el documento de identidad.

Actualmente, los teléfonos celulares en la Argentina se compran alegremente en cualquier supermercado y no se sabe quién, ni se sabe

dónde, como dicen los españoles. No se sabe quién lo tiene, quién es el dueño, ni a dónde va ese teléfono celular. Entonces, el espíritu de este proyecto de ley tiende —tal vez, con incorrecciones que podrán ser subsanadas en el desarrollo del correspondiente debate en la Cámara de Diputados— a implementar un sistema de comercialización legal y transparente que permita saber quién es el dueño de ese teléfono celular. Y si alguien lo tiene ilegítimamente, porque no es el dueño, tendrá que acreditar que lo tiene en su poder porque se lo prestaron y, tal vez, para ello tendrá que aparecer su dueño; de lo contrario, puede estar inmerso en los actos preparatorios de la comisión de un delito o puede estar armando una red de celulares “truchos” para hacer un secuestro extorsivo. Precisamente, esa teoría de los actos preparatorios habrá que incorporarla también como mecánica de la investigación de los delitos en la Argentina.

Sr. Presidente. — La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Pichetto. — Sí.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — En el derecho civil y comercial argentino están determinadas las características de los bienes registrables y no registrables. Hasta ahora los bienes registrables son, por ejemplo, los automotores y los inmuebles. Ahora les estaríamos dando a los teléfonos celulares la calificación de bien registrable, con lo cual se exigiría un régimen especial, tal como tienen todos los bienes registrables en la República Argentina; o sea, como lo tienen los inmuebles y los automotores. En este caso, estaríamos agregando en la categoría de bienes registrables del sistema jurídico los teléfonos celulares, que aparecerían como un nuevo bien registrable en nuestro país.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: en aras de avanzar en algunas observaciones podemos hacer un *racconto* de algunas cuestiones básicas del proyecto de ley. Con respecto al artículo 1º, hay una observación de la señora senadora Negre de Alonso que está más o menos encuadrada en dicho artículo. Acerca de los ar-

tículos 2º y 3º no existe ninguna observación. El artículo 4º merece una corrección, así como dijimos que el artículo 5º debe ser eliminado. Y en el artículo 6º podríamos sustituir el último párrafo.

Entonces, con respecto al artículo 4º la redacción podría quedar de la siguiente manera: "Prohíbase, la venta, cesión y/o transferencia, la importación y la exportación de equipos o terminales móviles usadas". Es decir, se elimina la palabra "temporaria", que era lo que distorsionaba la redacción.

Respecto del artículo 6º, podría ser una redacción adecuada la siguiente: "La venta de tarjetas de telefonía destinada al uso de equipos o terminales móviles se hará sólo a través de las bocas de expendio autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional". Y ahí ponemos el punto final.

Sr. Massoni. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente. — Senador Capitanich, ¿usted terminó?

Sr. Capitanich. — Sí.

Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. — Señor presidente: el artículo 6º debe definir claramente si es el Poder Ejecutivo el que decide quiénes van a ser los titulares del negocio de venta de tarjetas o simplemente si fija las condiciones para ser comerciante de dichas tarjetas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Urquía.

Sra. Gallego. — Usted me había dado la palabra.

Sr. Presidente. — Después, senadora Gallego.

Sr. Urquía. — Señor presidente: no quiero plantear una modificación al proyecto de ley sino un agregado que entiendo que lo perfecciona y va a dar respuesta ágilmente a la problemática de los delitos.

Propongo crear un artículo 6º bis por el que quede prohibido el bloqueo del servicio de identificación de llamadas o la utilización de mecanismos similares para tal fin. Las empresas licenciatarias deberán implementar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho artículo, tanto en la telefonía pública como en la privada. Considero que esto va a dar una respuesta muy rápida en los casos de secuestros.

Pero aquí el problema no es el aparato, porque nosotros podemos comprar uno afuera o adentro del país, sino quién da la línea. ¡Tenemos que registrar la línea, no el aparato! No tiene sentido que trabajemos sobre el aparato si alguien no activa la línea. Le pregunto a los amigos senadores, ¿qué pasa con los teléfonos satelitales? ¿Dónde están registrados?

Creo que estamos hablando de un tema serio, con sustento. Por favor, pensemos que esto puede ser mejorado y que estamos aquí para eso. Tengo muy poco tiempo en este cuerpo, pero mientras los escuchaba hablar pensaba que éste es un proyecto de ley que abarca parcialmente a la telefonía. ¿Qué pasa con el equipo Nextel, mediante el que uno no se conecta a través de una onda de telefonía sino de radio y no conoce el origen del llamado? ¿Dónde está contemplado ese caso?

Yo propongo introducir un artículo 6º bis y quiero una respuesta a mis preguntas.

Sr. Presidente. — ¿Senador Mayans, usted pide la palabra para una interrupción?

Sr. Mayans. — Sí, señor presidente. ¿Qué pasa con los teléfonos públicos, por ejemplo?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego, es su turno.

Sr. Capitanich. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sr. Presidente. — El senador Capitanich le solicita una interrupción.

Sra. Gallego. — ¡No se la voy a dar porque no me dejó intervenir! Ahora me va a tener que escuchar.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. — Señor presidente: si aquí alguien puede hablar o sospechar de lobby es el que pone la venta de los celulares solamente en manos de las compañías que tienen las licencias de la telefonía celular. Así que le pido encarecidamente a mi compañero de bancada el senador Capitanich que rectifique sus expresiones, porque no ejerzo ningún lobby. Y no le voy a permitir que deje la duda sentada de que acá estamos ejerciendo algún lobby; estamos tratando de que esta iniciativa, que viene a legislar sobre un tema relativamente nuevo en la Argentina, sea equitativa y no un mamarracho.

Por lo tanto, basándome en mi anterior intervención, cuando me referí a los temas globales, quiero decir que no creo que acá el delito sea la venta del celular. Hemos estado hablando tres horas de la baja en la calidad de vida de los ciudadanos en la Argentina y producto de ella la gente, así como compra y vende bienes registrables como los automotores, hace lo mismo con los celulares. El que tiene acceso a una tecnología más nueva entrega su viejo celular; y esto no puede constituir un delito.

Lo que debemos modificar son los artículos 4º, 5º y 6º. Primero, para no entorpecer la posibilidad de comunicación de la gente que utiliza el sistema de tarjetas versus el sistema de abonos mensuales. Y éste no es un tema menor. Yo quiero hablar –y reitero lo que dije hoy– en nombre de las pequeñas poblaciones y de la gente que tiene menos recursos, que no puede acceder a un abono mensual y, entonces, compra una tarjeta de dos, cinco o diez pesos cuando cobra y la hace durar todo el mes, para tener la llamada de emergencia. Y reitero que éste no es un tema menor.

En consecuencia, propongo concretamente que se sustituya el artículo 4º del proyecto por el siguiente: “Prohíbese la importación y la exportación de equipos terminales móviles usados”. Esto lo planteo debido al tráfico de terminales móviles que tiene lugar desde países fronterizos, que luego son clonadas y sus numeraciones cambiadas acá en la Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires.

Para el artículo 5º propongo la siguiente redacción: “La venta, cesión y/o transferencia de los equipos o terminales móviles usados se hará en las condiciones establecidas en el artículo 2º de la presente ley”.

Si nosotros tomamos los mismos recaudos no puede haber negocio ilícito porque se transfieren, se cedan o se vendan teléfonos usados de menor valor.

Y respecto del artículo 6º quiero ser muy precisa, para garantizar justamente el acceso al servicio telefónico de los particulares. Porque no nos olvidemos de que en algunos sistemas las tarjetas también son válidas para los teléfonos públicos fijos o los semifijos.

Entonces, el artículo 6º debiera decir: “La venta de tarjetas de telefonía destinadas al uso de equipos o terminales móviles se hará en las con-

diciones que fije el Poder Ejecutivo nacional para asegurar la identificación personal, filiatoria o domiciliaria de los adquirentes, si ésta fuera la voluntad de tener un registro de quien maneja las tarjetas”. Me parece realmente excesivo que el Poder Ejecutivo defina quién vende en cada pueblo del país una tarjeta de telefonía.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Terragno y luego el senador Yoma.

Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero hacer una observación en los artículos 10 a 13.

En estos cuatro artículos se incriminan la venta ilegal, la reactivación de celulares hurtados o perdidos, la alteración de sus números y la adulteración de tarjetas a los fines de utilizar créditos.

En ninguno de estos casos se establece que la pena corresponde a cuando esas conductas se desarrollan para preparar o consumir un delito de determinada clase. Es decir, son tipos de mero peligro.

Ahora bien, considero que la pena que se establece para estos cuatro delitos de mero peligro implica una hipertrofia penal considerable. Digo esto porque uno a seis años de condena equiparan la pena a la de la sedición, a la de la estafa, a la del cohecho, a las de las negociaciones incompatibles con los deberes del funcionario público, a la de enriquecimiento ilícito y a la de la difusión de los secretos militares. En este punto, le pediría al señor senador Agúndez que tome la palabra, porque creo que es quien nos puede dar la clave sobre esta cuestión.

Reitero, uno a seis años de condena se equiparan con la pena de los delitos que se tipifican para la sedición, la estafa, el cohecho, las negociaciones incompatibles con los deberes del funcionario público, el enriquecimiento ilícito, la difusión de secretos militares y el hecho de armar una provincia contra otra. A su vez, es una pena mayor a la que corresponde al robo, a la usura, a la usurpación, a la apología del crimen, a la usurpación de títulos, al abuso de autoridad, a la malversación, a las exacciones ilegales, a la denegación de justicia y al falso testimonio.

Por lo tanto, me parece que existe un desequilibrio entre estos tipos de mero peligro que se crean y las penas que se establecen para los delitos que he mencionado.

En consecuencia, si hay acuerdo en la modificación de la redacción y de las penas, podría-

mos trabajar con la comisión; en caso contrario, no podría votar a favor.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: seamos más prácticos.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales va a aceptar algunas modificaciones. Por lo tanto, sugeriría que avancemos en el tratamiento de cada uno de los artículos; de lo contrario, no podemos contestar todo junto.

En cuanto a lo manifestado por el senador Terragno debo decir que no se establecieron de manera caprichosa los seis años, ya que se trata de una forma de estafa u otras defraudaciones; y aquí lo importante es el registro y la transparencia en esta cuestión.

Ahora bien, si se quiere llevar la pena a cuatro años, no hay problema de parte de la comisión. Pero lo importante es la parte medular de este asunto, es decir, ubicar quién es el usuario y quién es el cliente, como recién se manifestó acá.

Por ello, solicito que se vote artículo por artículo y en cada uno iremos determinando las propuestas de modificación.

Sr. Presidente. — ¿Está de acuerdo senador Capitanich?

Sr. Capitanich. — Sí. Simplemente quería hacer varias observaciones. En primer lugar...

Sr. Yoma. — Señor presidente: que se conteste todo al final.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Hay una propuesta del señor senador Agúndez de votar artículo por artículo e ir proponiendo las modificaciones pertinentes.

Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: quiero evitar que cada artículo sea una discusión eterna, porque cada uno lo interpreta de la manera que mejor le parece.

Como bien mencionaron los señores senadores Fernández de Kirchner, Gallego, Daniele y Urquía, entre otros, el espíritu de este proyecto de ley es la registración de la telefonía celular. Y les quiero dar un ejemplo: el celular

que utilizo no está a mi nombre. ¿Por qué? Porque me lo regalaron en un programa de televisión, con la línea, y se usa con tarjeta. Lo que la norma busca es que yo registre a mi nombre el celular que uso. Creo que ése es el espíritu de la iniciativa.

Ahora, si nosotros comenzamos a establecer distintos mecanismos de prohibiciones corremos un riesgo; primero, encarecer el costo a los sectores de bajos ingresos, en los cuales la telefonía celular con tarjeta es lo que permitió masificar su uso; y segundo, generar un mercado negro de tarjetas y de celulares, lo que posiblemente sea peor.

Esto no lo podemos resolver votando artículo por artículo de acuerdo con la interpretación que cada uno le dé, porque realmente uno no sabe cuál es el sentido que los jueces le pueden llegar a dar a la aplicación de esta ley. Por eso lo que yo propongo, en el sentido que plantearon los señores senadores Daniele, Urquía —y los compañeros que lo hicieron recién—, es que haya un último artículo en el cual se supedite la vigencia de esta ley a la reglamentación del Poder Ejecutivo, quien en consulta con la CNC verá de qué manera lo hace, siguiendo con el espíritu de la ley, que si bien establece un mecanismo de control para evitar la utilización de la telefonía celular en la comisión de los delitos, intenta que no se produzcan efectos no deseados, como por ejemplo encarecer el costo de la telefonía a los sectores de bajos ingresos.

Por eso, para evitar que artículo por artículo se hagan propuestas distintas, dejemos sujeta a la reglamentación del decreto que dicte el Poder Ejecutivo toda la ley. Creo que a partir de interpretar cuál es el espíritu de la ley se va a legislar bien. Si no, vamos a estar acá toda la noche debatiendo e interpretando cada uno como mejor le parezca, libremente, lo que quiere decir la iniciativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: en primer lugar, quiero solicitar mil disculpas si mi interpretación ha generado ofensas para alguien. De ningún modo quise plantear acusaciones de naturaleza alguna; simplemente pretendí manifestar que muchas de estas cuestiones que se están discutiendo aquí deberían haber sido instrumentadas por las empresas licenciatarias;

estableciendo determinado tipo de registros; cosa que nunca han hecho.

Por eso estoy planteando que cualquier medida restrictiva o que genere obligatoriedad para este tipo de identificación y registro no será bien vista, porque naturalmente las empresas tendrán que utilizar sistemas de comercialización diferentes de los que actualmente usan. Por lo tanto, quiero dejar eso expresamente aclarado.

La segunda cuestión que quiero plantear es que aceptamos ciertas cuestiones para perfeccionar la norma, pero tenemos que clarificar exactamente su sentido. El objetivo de la iniciativa es, en primer lugar, la prohibición expresa de la comercialización de celulares usados; en segundo término, que los servicios de comunicaciones móviles estén perfectamente registrados; y en tercer lugar, tener identificación expresa respecto del bien que se comercializa y, sobre todo, del usuario, que debe estar perfectamente identificado.

En este contexto, aquí se han planteado algunas observaciones. Quiero decir que la ley 25.873 es una norma vigente, que recién ahora ha reglamentado el Poder Ejecutivo respecto de la identificación de las líneas correspondientes.

En cuanto al bloqueo que planteaba el senador Urquía está la resolución 897/04, que es de reciente dictado, que otorga noventa días de plazo y que exige a los prestadores de servicios de comunicaciones la implementación de un sistema de bloqueo automático. Por eso está perfectamente legislado y reglamentado.

En consecuencia, me parece que, atento a toda esta cuestión, podríamos avanzar efectivamente en el tratamiento de cada artículo en particular, votarlo y, en función de eso, dar la correspondiente sanción.

Sr. Pichetto. – Vamos a votar artículo por artículo.

Lo que podamos ir mejorando o corrigiendo, lo hacemos artículo por artículo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Urquía.

Sr. Urquía. – Simplemente quiero decir que quizá yo no me expresé bien en dos oportunidades con mi querido amigo el senador Capitanich.

Yo planteaba el bloqueo en los visores, porque la mitad de las llamadas ya ingresan como privadas –quiero clarificar que también en par-

ticular voy a votar afirmativamente el proyecto de ley– y si bien se puede conocer en pocas horas el número del que se llama, recurriendo a la empresa telefónica, en un caso de secuestro seis horas pueden salvar una vida. Esa era simplemente la introducción de mi artículo propuesto, no por el bloqueo de la línea por robo, sino el bloqueo que aparece en el visor, cuando uno marca asterisco, 31 y numeral, que todos usamos y por el cual ya no sabemos quién nos llama, pero si la empresa telefónica.

Como no tengo facilidad de explicación, pido disculpas si a lo mejor no me hice entender.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.

Sra. Caparrós. – Señor presidente: simplemente para agregar que coincido con lo manifestado por el señor senador Yoma en el sentido de que seguramente a través de la reglamentación se irán adecuando algunas cuestiones.

Pero vamos a tener que seguir legislando sobre este tema, porque tenemos otro problema. No en todos los distritos del país hay bocas de atención al público de las empresas licenciatarias. Al efecto he presentado un proyecto hace ya varios meses, porque por ejemplo alguien de mi provincia –Tierra del Fuego– para hacer un trámite tiene que trasladarse al Neuquén, Mendoza o cualquier otro lugar del país, o hacerlo vía telefónica y desde el anonimato de ambos lados, es decir, del que llama y del que recibe el llamado.

Por lo tanto, considero que deberemos seguir trabajando en este sentido a los efectos de darle complemento y un marco más adecuado a la realidad a esta iniciativa que hoy estamos tratando.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: votaré todo afirmativamente, pero como aquí se dijo que a los celulares les vamos a dar el mismo régimen que a los bienes registrables y teniendo en cuenta que éstos pueden ser objeto de compra y venta, pero sujetos a un registro, entiendo que en el caso de los teléfonos móviles esta registración tendría que ser la habilitación de la línea por parte de la licenciataria.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: en última instancia también votaré a favor, aunque no me guste la norma en su totalidad. Simplemente quiero decir que el artículo 4º no sólo convierte al celular en un bien registrable sino que además lo saca del comercio, a pesar de que yo no veo qué peligro social radica en la venta de estos elementos usados, siempre y cuando se haga con todos los resguardos de la ley y la totalidad de las inscripciones y registros.

Expreso esto a los efectos de no terminar sacando del comercio un bien que fue legítimamente adquirido por su propietario y que entiendo que podría venderse con todos los resguardos legales.

A pesar de estas observaciones, como sé que el tema tiene que ser encarado de forma urgente, porque se cometen delitos con estos celulares, votaré a favor aunque no esté de acuerdo ni convencido con algunos de sus artículos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay que aclarar que en diciembre –y también para fortalecer la lucha contra el secuestro extorsivo– sancionamos una ley que llevó el número 25.873, la cual establece en su artículo 2º que los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes, los registros del tráfico de comunicaciones cursadas, etcétera.

O sea que esto ya se estableció en el artículo de esta ley que acabo de mencionar y que está en vigencia. Entonces, esta norma que hoy se propone viene a complementar la que acabo de nombrar.

Y cuando hablamos de celulares no nos subestimen la inteligencia, hacemos referencia a la línea y no al aparato.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Terragno.

Sr. Terragno. – Señor presidente: solamente en la misma línea que los señores senadores Negre de Alonso y López Arias, creo que se puede mantener la prohibición de reventa por revendedores y mayoristas. Pero no veo razón para que un bien registrable no sea transferible por el titular a otra persona que quede registrada.

Considero que esta situación habría que te-

nerla en cuenta para que después no tengamos que legislar sobre desarmaderos de celulares.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Giri.

Sra. Giri. – Señor presidente: para hablar con precisión, la norma hace referencia a “equipos o terminales” y no a “líneas”. No quiero insultar la inteligencia de nadie, pero considero que si estamos de acuerdo en hablar de líneas, se diga “líneas”, caso contrario estaríamos hablando de “equipos”. Y “equipo” quiere decir una cosa y “línea” otra. Yo quiero tener la seguridad de qué le va a pasar a mi secretaria que anda todo el día con mi celular, el cual está a mi nombre.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se enuncia el artículo 1º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 52 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – No se registró el voto de la senadora Bar. Vamos a prorrogar el tiempo. Manifieste su voto, senadora.

–La senadora Bar manifiesta su voto afirmativo.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el artículo 2º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 54 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.²

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el artículo 3°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 53 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el artículo 4° con las modificaciones aceptadas por la comisión.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: he recogido las inquietudes de los señores senadores y propongo la siguiente redacción: “Prohíbese la importación y la exportación de equipos o terminales móviles usados. La venta, cesión y/o transferencia se efectuará en las condiciones que establezca la reglamentación”.

De ese modo salvamos la cuestión constitucional, porque una vez que uno adquiere un bien entra dentro de su propiedad.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4° con la modificación propuesta.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 54 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.²

Sr. Presidente. – No está computado el voto del senador Castillo. Si puede manifestar su voto a viva voz.

–El senador Castillo manifiesta su voto afirmativo.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. – Se propuso la eliminación del artículo 5°, pero en función de lo que se estuvo planteando hace un momento, en el sentido de que a través de este proyecto de ley se les otorga el carácter de bienes registrables a los aparatos celulares y que por lo tanto pueden ser objeto de transacción, no veo por qué haya que eliminar el artículo 5°.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – El artículo 5° sería sobreabundante, porque ya votamos en el artículo 4° la delegación al Poder Ejecutivo para que efectúe la reglamentación de las estrictas condiciones de la venta o transferencia, que será como bien registrable una vez que se concrete esa transferencia.

Sr. Presidente. – Se elimina el artículo 5°. El artículo 6° pasa a ser 5°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6°, que pasa a ser el 5°.

Tiene la palabra el senador Massoni.

Sr. Massoni. – Quisiera precisar y definir claramente cuál es el modo de asigar o adjudicar la posibilidad de venta de las tarjetas.

La senadora Gallego planteó con claridad una solución legal y constitucional. La redacción del artículo no es lógica en el marco de lo que se ha desarrollado en la propia norma.

Propongo, en este caso, que el planteo de la senadora Gallego sea puesto a consideración. De lo contrario, si se mantiene la actual redacción, evidentemente algunos vamos a tener que retacear nuestro apoyo.

Sr. Presidente. – ¿Qué dice el miembro informante de la Comisión?

Sr. Capitanich. – Que reitere la propuesta la senadora, por favor.

Sra. Gallego. – El artículo quedaría redactado: “La venta de tarjetas de telefonía destinadas al uso de equipos o terminales móviles se hará sólo en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional para asegurar la identificación personal, filiatoria y domiciliaria de los adquirentes”. La reglamentación luego lo define.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. — ¿Se aprueba?

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º, ex 6º del proyecto.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. — Se extenderá el plazo porque hubo tres senadores que no votaron. Entre tanto, tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. — Creo que los tres últimos artículos van camino directo al veto del Poder Ejecutivo. Y el último artículo, tal cual está redactado, va a generar muchísimos problemas en los sectores que tienen menos ingresos.

Se legisla y contempla la situación de la utilización de esta clase de elementos para un tipo delictivo y en una zona determinada del país. En los dos tercios del territorio del país, la telefonía celular con tarjeta es absolutamente masiva entre los sectores más humildes. De modo que creo que estamos votando estos tres últimos artículos de manera irreflexiva.

Sugeriría que revisemos bien la redacción o que los dejemos abiertos para la reglamentación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Daniele.

Sr. Daniele. — Señor presidente: a título informativo, quiero decir que en la reunión que tuvimos con las compañías telefónicas —esto sucedió hace aproximadamente diez días—, nos dimos cuenta de que el 80 por ciento de quienes utilizan telefonía celular están adheridos al sistema de tarjeta. Así que me parece que nos vamos a meter en un problema si queremos reglamentar la venta. Tenemos que dejar al Poder Ejecutivo la posibilidad de que reglamente de qué manera se van a vender las tarjetas.

Varios señores senadores. — ¡Así se ha votado!

Sr. Daniele. — No, no...

Sr. López Arias. — Aclaremos qué votamos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Gallego.

Sra. Gallego. — Con respecto a lo que está planteando mi compañero de bancada, el senador Daniele, creo que el texto quedaría completo si estuviese redactado de la siguiente manera: “La venta de tarjetas de telefonía destinada al uso de equipos o terminales móviles se hará sólo en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional”. Habría que cortar allí la redacción a fin de que el Poder Ejecutivo determine cómo en función de la red de reventa de tarjetas en todo el país.

De lo contrario, va a ser muy difícil que el Poder Ejecutivo pueda determinar si es el quiosquero, la farmacia del pueblo o si son los comisionistas los autorizados, porque lo cierto es que se va a generar un tránsito secundario de tarjetas. Esa sería la propuesta.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Massoni.

Sr. Massoni. — La propuesta modificada por la senadora Gallego mantiene el régimen del artículo 6º, actualmente 5º.

La propuesta de mi parte, que pediría que se someta a votación, es la siguiente: “La venta de tarjetas de telefonía destinadas al uso de equipos o terminales móviles se hará a través de las bocas de expendio autorizadas. El Poder Ejecutivo deberá fijar las condiciones de los vendedores a inscribirse para asegurar la identificación personal, filiatoria y domiciliaria de los adquirentes”.

En un caso, que es la actual redacción, queda en manos del Poder Ejecutivo la designación de los vendedores. En el otro caso, fija condiciones objetivas que garantizan el acceso a cualquier vendedor que cumplimente la norma reglamentaria.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — El artículo 6º, que pasa a ser 5º, ya lo votamos. Por lo tanto, si vamos a modificarlo en virtud de la propuesta de la senadora Gallego, en un caso, o del senador Massoni, en el otro, hay que plantear una revisión de la votación.

Sr. Presidente. — La votación no se proclamó. Por eso, se va a proponer una nueva votación del artículo 5º.

Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: más allá de compartir la redacción que propuso la senadora por La Pampa, hay que tener en cuenta las dificultades que va a tener esta reglamentación.

Quiero recordarles que acá hay muchos abogados al igual que en la Casa Rosada. Allá no hay magos que puedan reglamentar situaciones que no hayamos articulado nosotros en este recinto. No es que me cure en salud, pero ya hemos pasado al tema de las tarjetas. O sea, salimos de las líneas y de los aparatos en sí para pasar a un nuevo registro, que, en este caso, sería el registro de vendedores de tarjetas. Quiero que advirtamos algunas de las dificultades de implementación técnica que pueda haber con esa cuestión.

Reitero, en la Casa Rosada hay abogados al igual que acá, no hay gente que pueda imaginar cosas demasiado diferentes a las que podemos pergeñar aquí.

Con esta salvedad, dejo planteado que en todo caso sería bueno que todos las senadores y senadores que han intervenido en la formulación de los proyectos o que forman parte de las comisiones tomen contacto con el Poder Ejecutivo para poder articular una reglamentación viable y posible que finalmente no desarticule la intencionalidad de la ley.

Sr. Presidente. – Se va a votar nuevamente el artículo que pasó a ser 5º, ex 6º, con la redacción propuesta por la senadora Gallego, que la Comisión ha aceptado.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 56 por la afirmativa, uno por la negativa y ninguna abstención.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 6º, ex 7º.

Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: tenía una pregunta que formulé a los autores del proyecto acerca de la denominación de "...condena firme dictada en su contra por delitos dolosos graves...". ¿No va a haber ninguna especificación en cuanto a punibilidad o tipo de delito? Lo pregunto al titular de la comisión o a los autores.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Me parece que no tienen que ser graves. Estamos hablando de delitos dolosos.

–No se alcanza a percibir palabras del senador Capitanich.

Sr. Presidente. – ¿Qué dice, senador Capitanich?

Sr. Capitanich. – Señor presidente: la redacción específicamente que estamos planteando nosotros era para prohibir expresamente la comercialización de telefonía celular a aquellos ciudadanos que tengan delitos dolosos graves y que obviamente no puedan formar parte de esa transacción... O delitos dolosos. Sería por delitos dolosos.

Sr. Presidente. – ¿Cómo quedaría la redacción?

Sr. Capitanich. – La redacción sería la siguiente: "Créase en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación el Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles, en donde se consignarán los datos personales, filiatorios, domiciliarios de los usuarios y clientes, y se dejará constancia de las condenas firmes dictadas en su contra por delitos dolosos, si las hubiera. El mismo será permanentemente actualizado por las altas y bajas que se produjeran en cada uno de los servicios".

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Massoni.

Sr. Massoni. – Señor presidente: normalmente, cuando se fija una obligación, se debe determinar una sanción en caso de incumplimiento. ¿Qué ocurriría si el personal del Registro no tomara nota de la información que se le está dando?

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: creo que habíamos hablado de la dispersión por la modificación en su momento de tantas leyes.

¹ Ver el Apéndice.

En este artículo se trataría, precisamente, ante estas circunstancias, de la aplicación con sentido común de las facultades que, a partir del artículo 10, empezarían a funcionar de acuerdo con cuál sea la falta que ha ocurrido, en este caso, por parte del personal de la licenciataria.

No podemos poner todo en una ley. Esto es claro. Además está la reglamentación. Si le estamos diciendo al Poder Ejecutivo que reglamente cosas más importantes, que también reglamente este aspecto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – No puede estar incluida en la ley la omisión de algún dato. Acá el espíritu es que estén los datos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Como se hace referencia a que estaría incumpliendo personal de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, sería incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Terragno.

Sr. Terragno. – En el mismo sentido.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 6º –7º en la redacción original–, con las modificaciones propuestas.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 56 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 7º –8º en la redacción original–.

Tiene la palabra el senador Massoni.

Sr. Massoni. – Señor presidente: comparto el criterio anterior, de que se le aplican las normas porque pertenece al Estado. Pero en el 8º son particulares.

En el supuesto caso de que no haya la información correspondiente, ¿qué norma se aplica teniendo en cuenta que ninguno de los artículos.

a partir del 10, tipifica la acción de incumplimiento por parte de lo que determina el artículo 8º? ¿Me explico?

Alguien señaló que se debía aplicar el delito que se hubiera receptado a partir del 10. La figura típica del 8º no está receptada; hay que definirla.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Con respecto a la obligación de las empresas de servicios de comunicaciones móviles, obviamente, el incumplimiento de parte de las empresas de informar al Registro las hará pasibles de sanciones administrativas que están perfectamente contempladas en el marco regulatorio.

Sr. Massoni. – ¿Solamente son sanciones administrativas?

Sr. Capitanich. – Sí, sí.

Sr. Presidente. – Muy bien.

Entonces se va a votar el artículo 7º –8º en la redacción original–.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 57 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 8º –9º en la redacción original–.

Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Con relación a la facultad que se está dando a las fuerzas policiales y de seguridad, quiero dejar sentado que ello se está haciendo en el marco de razonabilidad. Es decir, en el marco de la investigación de delitos. De ninguna manera va a poder interpretarse que las fuerzas de seguridad van a poder andar por las calles requisando o decomisando celulares de resultados de la averiguación de antecedentes de los usuarios.

Ese es el espíritu de la norma y por el cual se da esta facultad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Massoni.

¹ Ver el Apéndice.

¹ Ver el Apéndice.

Sra. Fernández de Kirchner. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Massoni. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Entiendo la inteligencia que le quiere dar la señora preopinante, pero me parece que de la interpretación literal del artículo 9º surge que no debería requerirse de parte de la Policía que esté investigando la comisión de ningún delito para poder hacer uso de esta facultad, por lo menos en los términos en los cuales está redactado dicho artículo.

Para que tengamos claro de qué estoy hablando daré lectura al artículo: “Facúltase a las fuerzas policiales y de seguridad a verificar la condición de usuario o cliente del servicio de comunicación móvil y en caso de comprobarse la tenencia irregular, proceder al secuestro del equipo, dando debida intervención a la autoridad judicial o al ministerio público competente”.

Quiero decirles que en esta norma, tal como hemos dicho, estamos creando un bien registrable, y no lo estamos haciendo en el marco de ninguna intervención. Estamos dándole calidad de bien registrable a un nuevo bien mueble –en este caso un teléfono celular con su línea incluida– y dando facultades especiales a la Policía para actuar del mismo modo que lo hace cuando detiene un auto en cualquier control caminero y no hace falta que esté investigando la comisión de ningún delito.

Tal como está redactada la norma eso es lo que sucedería, pero no solamente por la redacción de esta norma en particular sino por la totalidad de la ley, porque no podemos forzar una norma que sea incongruente con el resto del texto.

Tal como está formulada la norma, y por el contexto legal del resto del articulado en el que se crean las figuras, no resultaría muy forzada la interpretación que se acaba de querer formular; por lo tanto, deberíamos decidir qué tipo de facultad se le quiere dar a la Policía.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – Comparto el criterio de la señora senadora y, al respecto, propongo la siguiente redacción: “Facúltase a las fuerzas policiales y de seguridad a verificar la condición de usuario o cliente del servicio de comunicación móvil. En caso de comprobarse la tenencia irregular, proceder al secuestro del equipo dando debida intervención a la autoridad judicial o al ministerio público competente”. No hay ninguna autorización para secuestrar pero sí para investigar.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Estamos trabajando sobre algo que ya ha sido sancionado en este país, ya que la facultad de requisa la hemos dado como ampliación de las facultades policiales hace aproximadamente tres años, durante el gobierno del doctor De la Rúa.

La requisa es un operativo que hace la Policía en cualquier lugar y momento frente a la presunción de la existencia o comisión de delitos; es una tarea de prevención. Por lo tanto, no nos rasguemos las vestiduras porque no estamos haciendo nada inconstitucional.

Estamos planteando el criterio de que la Policía puede preguntarle a alguien si el teléfono celular es suyo y pedirle que acredite si es así. Sin duda también puede requisarlo, porque puede requisar cualquier tema que tenga que ver con un presunto ilícito.

Pero en aras de buscar mecanismos de consenso para avanzar, lo que me parece importante es la posibilidad de que la Policía pueda verificar la titularidad del teléfono celular, que pueda averiguar quién lo tiene y de quién es, porque de esa manera puede actuar preventivamente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.

Sra. Mastandrea. – Sugiero el siguiente agregado: “Ante sospechas fundadas, facúltase a las fuerzas policiales...” y que continúe la redacción tal como está. Esto sería a los efectos de que nos quedemos más tranquilos en el sentido de que no será en cualquier ocasión.

Sr. Presidente. – ¿Qué dice el miembro informante de la comisión?

Sr. Pichetto. – No.

Sr. Capitanich. – No, señor presidente.

Sr. Presidente. – No se acepta esa sugerencia.

Entonces, ¿se aceptarían solamente las modificaciones propuestas por el senador Massoni?

Sr. Pichetto. – Así es.

Sr. Presidente. – Entonces, con las modificaciones propuestas por el senador Massoni, que fueron aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 8º, ex artículo 9º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario. – Resultan 54 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

En consideración el artículo 9º, ex 10.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Lo que queda son las sanciones de carácter penal. En realidad, yo planteaba la idea de la participación necesaria, pero el señor senador Agúndez elaboró con buen criterio un sistema de sanciones frente a cada figura que me parece más razonable.

Así que yo voy a pedir que se vote en bloque porque no vamos a aceptar modificaciones.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Terragno.

Sr. Terragno. – Había hecho una observación y el señor senador Agúndez había ofrecido una posibilidad al respecto, razón por la cual quiero saber cuál sería la redacción definitiva de estos cuatro artículos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – En primer lugar, es una forma de estafa.

Si se lee bien el artículo se observará que la penalidad es de uno a seis años. Pero, de todas maneras, si son delitos nuevos la tipificación es totalmente nueva. Yo no tenía ningún problema en que se colocara de uno a cuatro años, pero nosotros necesitamos que hoy se sancione este pro-

yecto de ley para que pase a la Cámara de Diputados y me parece que estos artículos no son tan contradictorios ni han recibido muchas críticas.

Por ello, me parecería bien que se los votara en bloque. Yo hablé de la modificación de la pena, siempre y cuando lo aceptara la Comisión cabecera.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Nosotros hemos modificando el artículo 4º, otorgando cierta flexibilidad, pero en el artículo 9º, ex 10, se impone una pena a todo aquel que comercialice sin revestir la calidad de licenciario. Sería un poco más amplio en el sentido de decir que no reviste el carácter de sujeto autorizado por la ley o por la reglamentación. Si no, se restringe demasiado su aplicación y, por vía de la interpretación, se va a terminar diciendo que sólo pueden vender teléfonos celulares las empresas de telecomunicaciones, y me parece que ése no es el objetivo del proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Simplemente, una observación.

Estoy de acuerdo con que se le dé la categoría de delito a este tipo de situaciones, pero quiero advertir que en algún momento habrá que hacer un trabajo de equilibrio en la relación que guarden las penas respecto de las conductas.

Fijense que el robo con arma tiene una pena de cuatro a doce años y el que activa una línea extraviada tiene una pena de hasta seis años de prisión. Lo mismo ocurre con el que comercialice un aparato sin tener licencia, donde se prevé como máximo de la pena más que el mínimo de la violación de menores.

En verdad, creo que habrá que hacer algún estudio de equilibrio en el sistema de penas porque estamos bastante desbalanceados.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Terragno.

Sr. Terragno. – Me permito insistir en algo porque, como se estaban discutiendo otros aspectos, probablemente no se prestó atención a la observación formulada.

Coincido con el señor senador por La Rioja en cuanto a que hay que evitar los desequilibrios, pero me parece que cuando estamos por crear

¹ Ver el Apéndice.

cuatro tipos penales deberíamos empezar por prevenir un desequilibrio.

Si bien es cierto que la adulteración de tarjeta a los fines de aprovechar un crédito es asimilable a la estafa, y hasta podría decirse que es ocioso el tipo penal nuevo porque ya está comprendido en la estafa, quiero insistir en que el hecho de que reactivar un celular o alterar un número tenga la misma pena que la sedición, el cohecho, las negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, el enriquecimiento ilícito, la difusión de secretos militares, el armado de una provincia contra otra, y mayor pena que el robo, la usura, la usurpación, la apología del crimen, la usurpación de títulos, el abuso de autoridad, la malversación, las exacciones ilegales, la denegación de justicia y el falso testimonio me parece una hipertrofia penal que deberíamos prevenir.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – En el artículo 9º, ex 10, se estaría tipificando el artículo 3º. Pero ocurre lo siguiente: le está faltando algo a la última parte del artículo 9º, ex 10. El artículo 3º dice: “Prohíbese la activación o reactivación de equipos de servicios que fueran reportados como extraviados o denunciados por robo o hurto ante las empresas licenciatarias, sin expresa autorización de sus propietarios”. Pero el artículo 10 no dice: “sin expresa autorización de sus propietarios”. Es decir, sanciona al que realiza la activación o reactivación de un servicio. Por lo tanto, hay que agregar algo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: es atinada –obviamente respetando el trabajo de la comisión– la propuesta del senador Pichetto en el sentido de vincular estos tipos delictivos a la participación. Me gustaría que él lo explique o que lea el artículo que propuso originalmente para ver si por ese lado podemos encontrar algún mecanismo más racional que nos permita penalizar este tipo de conductas, pero sin caer en excesos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – “Modifícase el artículo 45 del Código Penal, quedando redactado como sigue: ‘Artículo 45. – Los que tomaren parte en la eje-

cución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Se aplicarán asimismo las penas previstas para los partícipes a quienes, en forma injustificada, o debiendo sospechar, por las circunstancias del caso, acerca de su aptitud para contribuir a un resultado dañoso, introdujeran en el país, portaren, comercializaren, volcaren al mercado interno, acopiaren, proveyeren, suministraren o conservaren en su poder, bienes, materiales, instrumentos o cualquier otra clase de elementos conocida o públicamente destinados o utilizados para cometer alguno de los delitos previstos en este Código, posibilitando o facilitando su ejecución, aunque no tomaren parte en la ejecución del hecho”.

Esta iniciativa tendía fundamentalmente a enganchar al bolsero, aquel que le brinda toda la logística al secuestrador o al vendedor de drogas. Al facilitar todos los teléfonos se convierte en un partícipe necesario de la comisión final del delito. Por lo tanto, tiene una pena equivalente a la de la participación. Esto reemplazaría a los tres o cuatro artículos que había planteado el presidente de la comisión.

Sr. Presidente. – Son cuatro artículos, el 10, 11, 12 y 13 del proyecto original.

Sr. Massoni. – ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – Lo único que señalo es que está faltando en el artículo 10 agregar simplemente “sin expresa autorización de sus propietarios”. Es lo único que se requiere, porque en caso contrario se estaría sancionando al que realice un acto autorizado por el artículo 3º, nada más.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: vuelvo a repetir, la comisión cabecera es la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el senador Pichetto es el autor del proyecto y yo simplemente contribuí en esto. Y cuando empezamos dije que íbamos a conceder todas las situaciones de modificación que los autores y la comisión de cabecera aceptaran. Por lo tan-

to, acepto todo lo que dicen los autores y la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Senador Pichetto: lo que usted leyó recién, ¿es lo que responde a la modificación del artículo 45 del Código Penal que figura en su proyecto S.-2.979/03?

Sr. Pichetto. — Es la última parte del proyecto de ley.

Sr. Presidente. — Entonces, la propuesta de votación es para este artículo...

Sr. Agúndez. — Señor presidente: esto reemplaza los actuales artículos 9º, 10, 11 y 12 según la nueva numeración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Entiendo que reemplaza al resto porque todos los otros artículos hacen referencia a los delitos que establecen los anteriores.

Sr. Presidente. — Senador Pichetto, ¿reemplaza a todos?

Sr. Pichetto. — Por supuesto, reemplaza a todo el sistema de penas que fue cuestionado y duramente criticado en función de las escalas. Aquí se apunta a la participación. Si los teléfonos sirvieron para la comisión de un delito y además él conocía que con esos teléfonos se iba a hacer la logística del delito, es partícipe necesario. Eso es lo que estamos calificando.

Sr. Presidente. — Sería el último artículo de la ley, ya que se convertiría en el artículo 9º y el 10 sería de forma.

Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. — Me sentiría mucho más tranquilo si las propuestas de modificación del Código Penal fueran aceptadas por la comisión de Justicia y Asuntos Penales y no por la de Comunicaciones, con todo afecto por mi colega Capitanich.

Sr. Presidente. — Acaba de aceptarlas.

Sr. Yoma. — Sí, sí. Y en segundo lugar, creo que sería el anteúltimo artículo. Porque el último, antes del de forma, sería el vinculado con dejar sujeta la ley a la reglamentación del Ejecutivo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Quiero hacer también un reconocimiento al esfuerzo que hizo el presidente de la Comisión. Creo que estamos dando una solución que era la originaria. Pero reconozco que él tuvo que llevar adelante un debate en el ámbito de la Comisión. Así que quiero reconocer su trabajo. Definí un sistema penal para determinadas circunstancias o cada uno de los hechos y también lo consensuó. Ahora, me parece que en el debate la mejor solución es la del 45. Avancemos con la participación necesaria, reconociendo el trabajo del presidente de la Comisión, doctor Agúndez.

Sr. Presidente. — Entonces votamos éste como último artículo. Porque el artículo 2º, inciso 99, de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para reglamentarlo.

Sr. Yoma. — No. Esta es una ley penal, por lo cual el último artículo antes del de forma debería ser: "Esta ley entrará en vigencia a partir de su reglamentación".

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 9º y 10, con las modificaciones que se acordaron.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario. — Han votado 57 señores senadores por la afirmativa, ninguno por la negativa y ninguna abstención.

—El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

—El artículo 11 es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley.² Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

A continuación corresponde votar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el último proyecto de ley sobre penalización del juego clandestino.

Varios senadores. — Quedan las preferencias.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Solicito que se vote en forma conjunta en general y en particular. Se tra-

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

ta de un proyecto de cuatro artículos respecto del cual no vamos a aceptar ninguna modificación.

Sr. Presidente. – Si están de acuerdo se procederá de la manera solicitada por el senador Agúndez.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario. – Han votado 57 señores senadores por la afirmativa, ninguno por la negativa y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

–El artículo 5º es de forma.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.² Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

4

INSERCIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: antes de avanzar con los otros temas, deberían votarse las inserciones solicitadas para estos tres proyectos que hemos debatido.

Asimismo, ratifico mi pedido de inserción del expediente P.-22/04, con el petitorio que se recibió por Presidencia.

Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas. Se procederá en consecuencia.³

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

5

PATRONATO DE LIBERADOS (MOCIONES DE PREFERENCIA)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a votar una preferencia para la próxima semana con dictamen de comisión –que se reunirá el martes– para el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por el que se solicitan informes acerca del Patronato de Liberados de la Capital Federal, y para los otros dos, el relacionado con la creación de tres juzgados de ejecución penal...

Sr. Capitanich. – Tiene que pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Pichetto. – Sí, efectivamente, porque hay que determinar los recursos.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Agúndez. – En realidad, los otros son dos proyectos: el de creación de los tres juzgados de ejecución penal y el proyecto de comunicación por el que se solicita dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 24.050 y la implementación de algunas instituciones de la ley 24.660.

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada, con dictamen de comisión, para los dos proyectos mencionados por el señor senador Agúndez.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las preferencias.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas Pascuas para todos.

–Son las 23 y 32.

RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Solicitada por el señor senador Massoni

**FUNDAMENTOS DE LA INSERCCION
DEL SENADOR MASSONI**

Modificaciones propuestas

1° - Modificar el artículo 14 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 14: La libertad condicional no se concederá:

a) A los reincidentes;

b) A los condenados por los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulo II, del presente código.

2° - Modificar el segundo párrafo del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiera corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 119, 120, 139, 139 bis y 146 del Código Penal.

3° - Modificar el artículo 1° de la ley 24.390, de Plazos de Prisión Preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1° - La prisión preventiva, no podrá ser superior a cuatro años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor.

4° - Modificar el artículo 11 de la ley 24.390, de Plazos de Prisión Preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 11: Quedan expresamente excluidos de los alcances de la presente ley:

a) Los imputados por el delito previsto en el artículo 7° de la ley 23.737, de régimen penal de estupefacientes, y aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de esa misma ley;

b) Los imputados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el libro II, título III, capítulo II, del Código Penal de la Nación.

5° - Agregar el siguiente párrafo a continuación del artículo 63 del Código Penal de la Nación:

En los delitos previstos en el libro II, título III -"Delitos contra la integridad sexual"-, cuando la víctima fuere un menor, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya, o hubiere alcanzado, en caso de fallecimiento, los dieciocho años de edad.

6° - Agregar como artículo 147 bis de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad, el siguiente:

Artículo 147 bis: A los efectos del artículo anterior, en aquellos supuestos de delitos contra la integridad sexual, el interno será asistido a través de programas de rehabilitación y tratamiento adecuados en tiempo y forma a la evolución de su trayectoria penitenciaria, incrementándose su aplicación en los momentos de cercanía a las excarcelaciones. Dichos programas contemplarán diferentes niveles, según la peligrosidad del interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de control, valoración de los aspectos sociales, psicológicos y fisiológicos, métodos de control de potenciales conductas agresivas y estrategias para evitar el riesgo de reiteración, y en técnicas de modificación de conductas, evaluándose en cada caso, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos.

7° - Agregar como artículo 124 bis del libro II, título III, capítulo II, del Código Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 124 bis: En todos los casos de condenados por delitos de este capítulo II, una vez cumplida la condena, previo diagnóstico criminológico del cuerpo de peritos que así lo aconsejen, el juez deberá imponer una medida de

seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de rehabilitación médico, psicológico y social, mediante un régimen de internación en una institución especializada, el que sólo podrá cesar por resolución judicial.

La institución donde se llevará a cabo el tratamiento será determinada por el juez a propuesta del cuerpo de peritos.

8° - Agregar como sección quinta dentro del capítulo II de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, los siguientes artículos:

SECCIÓN QUINTA

Tratamiento de los abusadores sexuales y violadores (artículo 56 bis al 56 sexies)

Cuerpo de peritos

Artículo 56 bis: Para el tratamiento de los condenados por los delitos establecidos en el libro II, título III, capítulo II del Código Penal de la Nación, se creará en cada unidad penitenciaria un cuerpo de peritos técnico-criminológico, que estará constituido por un equipo multidisciplinario conformado por:

- a) Un psiquiatra;
- b) Un psicólogo forense;
- c) Un asistente social;
- d) Un representante de la defensoría oficial;
- e) Un representante del consejo correccional del establecimiento penitenciario;

Los representantes de los incisos a) y b) deberán contar con especialización en abuso sexual, criminología o disciplinas afines.

Abusadores sexuales y violadores

Artículo 56 ter: En todos los establecimientos deberán existir instalaciones especiales para el tratamiento de los condenados por delitos contra la integridad sexual, los cuales no podrán ser alojados con el resto de los internos.

Los condenados por estos delitos, que presuntamente presenten patologías severas, serán internados en establecimientos y/o en secciones separadas especializadas del servicio penitenciario, donde, en condiciones de seguridad apropiada, se desarrollará un programa que atienda la faz asistencial específica que requiera cada caso en particular.

El movimiento y distribución y/o reubicación del procesado será dispuesto por la Jefatura del Servicio Penitenciario a propuesta del cuerpo de peritos técnico-criminológico con comunicación al juez competente.

Evaluación

Artículo 56 quáter: El informe que produzca el cuerpo de peritos técnico-criminológico será con-

feccionado con un criterio interdisciplinario que a nivel penitenciario evaluará el desempeño institucional; en los aspectos médicos atenderá las necesidades de tipo preventivo y/o asistenciales; en el área psicológica las características de personalidad y modalidad de ajuste al medio; y en lo social la influencia del contexto socio-histórico-cultural.

Artículo 56 quinquies: El cuerpo de peritos técnico-criminológico realizará evaluaciones periódicas según el requerimiento de cada caso a fin de proponer la permanencia o reubicación del interno en la modalidad que estime conveniente. El resultado de las mismas se consignará en el legajo técnico de evaluación periódica, que se iniciará con el primer informe de evaluación producido después de su admisión.

Cumplida la condena

Artículo 56 sexies: Cumplida la condena, el cuerpo de peritos técnico-criminológico realizará un dictamen sobre la evolución del interno, el cual se elevará al juez competente, quien dispondrá:

a) Si ha cesado la peligrosidad del interno, su inclusión en un régimen terapéutico de externaciones transitorias o continuación con el tratamiento específico en otros establecimientos especializados y/o su egreso con el alta definitiva;

b) Si no ha cesado la peligrosidad del interno, una medida de seguridad curativa a la que se refiere el artículo 124 bis del Código Penal de la Nación, que consistirá en un tratamiento psiquiátrico de rehabilitación dentro de una institución especializada, fijado por el cuerpo de peritos técnico-criminológico, el que dictaminará los antecedentes, diagnóstico y pronóstico del mismo, cesando éste por resolución judicial.

9° - Agregar como inciso V del artículo 17 de la ley 24.660 el siguiente:

V: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente ley, no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen salidas transitorias y semilibertad a aquellos condenados por los delitos establecidos en el libro II, título III, capítulo II, del Código Penal de la Nación.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las presentes propuestas tienen por objeto abordar la reincidencia y la reinserción de los condenados por delitos contra la integridad sexual.

Atento al tipo de delito y a que existe una altísima posibilidad de que aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes, es preciso garantizar el cumplimiento de la condena. La modificación realizada al artículo 14 del Código Penal exceptúa de la libertad condicional a todos aque-

llos que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual de las personas.

Asimismo propongo modificar el artículo 316 del Código Procesal Penal, por el cual se le niega al beneficiario de la eximición y por consecuencia de la excarcelación, si concordamos a lo dispuesto en el artículo 317, inciso a) del Código Procesal Penal. Si les negamos este beneficio a las mujeres que fingen estar embarazadas para dar a su supuesto hijo derechos que no les corresponden; a los imputados por alterar o suprimir la identidad de un menor de 10 años; a los que retienen u ocultan a un menor y a los que raptan a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de éste, considero adecuado y necesario equiparar los delitos contra la integridad sexual previstos en los artículos 119 y 120 del Código Penal con estos mencionados. En este sentido también quedan excluidos de los beneficios de la ley 24.390, de plazos de prisión preventiva.

Las reformas propuestas no hacen más que incluir un nuevo supuesto de excepción a los ya establecidos previamente. A los efectos de comprender claramente los alcances de la modificación debemos recordar algunas definiciones:

– Libertad condicional: toda posibilidad de que un condenado a la pena privativa de la libertad pueda recuperarla antes de la finalización del efectivo cumplimiento de la condena, luego de haber cumplido una serie de requisitos. La libertad condicional esta regulada en el artículo 14 del Código Penal.

– Prisión preventiva: es la medida coercitiva más severa, aplicada contra los imputados durante el proceso, y consiste en su encarcelamiento. Se encuentra regulada por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación y los plazos se encuentran establecidos en la ley 24.390.

La prisión preventiva sólo puede ser dispuesta por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, basado en su convicción de que la sentencia habrá de condenar al imputado a pena privativa de la libertad:

– Exención de prisión: se concede desde el momento de la imputación hasta el dictado de la prisión preventiva.

– Excarcelación: se concede desde el momento del dictado de la prisión preventiva.

CUADRO 1:

Momento del proceso: Detención y prisión preventiva.

Condena: Plazo máximo 2 años excepto estupefacientes.

Qué se puede pedir: Exención de prisión, excarcelación y libertad condicional.

En el caso de la reforma del artículo 1º de la ley 24.390, en relación con los plazos de prisión pre-

ventiva, destacamos que el Pacto de San José de Costa Rica dice en su artículo 7º, "Derecho a la libertad personal, inciso 5º": "Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable..."

El "plazo razonable" debe ser analizado en el contexto de la situación social de la comunidad, la mínima capacidad jurisdiccional y aun policial de Estado, que pone en peligro no sólo al detenido sino a toda la comunidad.

Debe quedar claro que el acceso de la libertad de un detenido con graves problemas psicológicos y aun intelectuales, sin darle al mismo resguardos mínimos (psicológicos, educativos, culturales, etcétera), genera situaciones de alto riesgo para todas las partes involucradas con el delito, en especial el propio autor.

No debe perderse de vista que la acumulación actual de difíciles investigaciones judiciales, la inexistencia de tecnología y aun la fragilidad de los procedimientos instrumentados, abren caminos peligrosos que no pueden ser superados. Por ello, se ha propuesto un plazo mayor de cuatro años, por ser razonable en el marco fáctico señalado supra.

La razonabilidad del Pacto de San José de Costa Rica no es un elemento conceptual numérico y abstracto, sino concreto y determinable en relación con la situación pública de los Estados comprendidos en los procesos judiciales. Es tan cierto lo dicho, que la razonabilidad pedida, no fue fijada cuantitativamente sino sujeta a aspectos sociológicos a tener en cuenta en cada caso. Ejemplo concreto de lo dicho es el contenido de propio artículo analizado.

Es posible que los dos años fijados en el año 1994, fueran la consecuencia de la realidad social del país. Ese marco señalado se ha modificado tan gravemente en el país, que obliga a un análisis particular que recepte las realidades del delito, sus autores y los sujetos pasivos de dichos hechos.

Debe señalarse, asimismo, que el autor del delito no sólo genera un perjuicio a la sociedad sino a sí mismo. El sujeto activo requiere seguridad para sí mismo, que es el elemento exigido por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Entendemos que la razonabilidad se encuentra en un incremento del plazo llevándolo hasta cuatro años, a fin de que el Estado viabilice la seguridad, la educación y el tratamiento de los sujetos activos del delito, con cárceles que resguarden a sus habitantes y con tribunales que sistematicen y agilicen los trámites procesales. Sería dramático pensar en libertades irresponsables anticipadas, por necesidades de espacios físicos.

El bien jurídico protegido a través del artículo 4º del presente proyecto de ley, esto es, la protección de los menores de edad y el interés superior de todo

niño, intenta extender el término de prescripción de la acción que establece el artículo 63 de nuestro Código Penal, posibilitando la persecución e investigación de aquellos delitos contra la integridad sexual, perpetrados contra menores de edad, más allá de los términos comunes que ofrece dicho artículo, con la clara intención de que esta clase de crímenes no permanezcan impunes. En este sentido el Código Penal español contiene, en su artículo 132.1, idéntica previsión.

Por lo regular, las personas que sufrieron algún tipo de violencia sexual no cuentan a nadie lo que les sucede. Esto se debe a que se sienten amenazadas o erróneamente culpables de lo que les pasa. Cuando la violación es cometida por un familiar cercano, la víctima se encierra todavía más en sí misma, debido a que su lealtad a la unión familiar le impide decirlo, pues teme que, al enterarse, la familia se separe. Así como cuando hay un homicidio se sabe que ninguna acción podrá devolver la vida a la víctima, los abusados piensan a veces que nada podrá reparar el daño sufrido.

Es necesario incorporar en la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, un artículo 147 bis que contemple un período indeterminado de reclusión para su tratamiento psicológico en un establecimiento especial para ese tipo de conductas. Los agresores son personas que, a diferencia de las víctimas, necesitan tratamiento siempre, y teniendo en cuenta factores como el alto grado de reincidentes en este tipo de prácticas pese a que los especialistas coinciden, en relación al tratamiento, que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento no es fácil y se fracasa por varios factores. Entre otros, porque el tratamiento no suele ser voluntario y presenta dificultades técnicas muy graves. No hay protocolos, los agresores son muy distintos unos de otros.

En cuanto al tema de la medida de seguridad, el objetivo fundamental es complementar la condena por este tipo de delitos, y además establecer el efectivo tratamiento clínico como complemento de la sanción aplicada por la Justicia.

La violación es un problema de seguridad pública que involucra una perspectiva multidisciplinaria: médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica, sociológica (de trabajo social y asistencia social) y política; demanda un tratamiento asistencial, ya que este, tipo de agresión sexual produce efectos psicológicos negativos a corto y largo plazo en las víctimas de este tipo de delitos.

Los informes de especialistas con larga experiencia en el tratamiento de estos temas sostienen que los violadores y abusadores sexuales reinciden y tienen pocas posibilidades de recuperarse. Debemos tener en cuenta el antecedente del artículo 1º del presente proyecto, inspirado en el artículo 16 del régimen penal de estupefacientes de la Nación (ley

23.737), el que establece una medida de seguridad curativa a los condenados que dependen física o psíquicamente de estupefacientes, obligándolos a seguir con un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario.

El Código de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires (ley 12.246) en su artículo 100 establece que "no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias a aquellos condenados por los [...] delitos: b) Delitos contra la integridad sexual, en sus formas agravadas (artículo 119, párrafo 4, incisos a), b), c), d), e) y f) del Código Penal y c) Violación seguida de muerte (artículo 124 del Código Penal)", el cual es un derecho antecedente para el artículo 3º del presente proyecto.

Lo que esta propuesta busca es que quienes cometan estos delitos, no sólo cumplan la totalidad de su condena, sino en los casos en los que se considere necesario se les imponga una medida de seguridad, no dejando dudas en la interpretación de los jueces, en cuanto a la no posibilidad de que los condenados puedan beneficiarse con: salidas transitorias; prisión domiciliaria; prisión discontinua; semi-detención y libertad asistida.

Es hora de atender la importancia de la extensión del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo de enfermos sociales en institutos especializados, poniendo especial atención en que la mayoría de los violadores han sido sujetos pasivos de un delito similar al que ahora cometen. Las estadísticas son claras, el 90% de los violadores y abusadores sexuales reinciden en el delito, por ello, los especialistas propician "un control permanente" y anticipan que no conocen casos de "recuperación total".

Todos saben qué es lo que ocurre dentro del sistema penitenciario con los imputados por delitos sexuales. Cuando ingresan son violados por todos, agravándose en consecuencia el estado espiritual de los condenados.

Graciela Dubrez, integrante del Observatorio Internacional de Prisiones Argentinas, sostiene que "las cárceles no socializan, ya nadie lo niega. Es más, tal como están las cosas, no sorprende que quienes deban garantizar la seguridad de los internos y la de la población en general terminan utilizándolos para delitos de la más variada gama, como todos nos enteramos. Presa del impacto emocional por las revelaciones de delitos tan aberrantes como lo es el de violación, queda poco margen para la reflexión... Los violadores no deben mezclarse con los demás internos. Razón por la cual deberá habilitarse un establecimiento especial para su alojamiento y quedara a cargo del equipo al salud cuando y, en qué condiciones obtienen su libertad".

El abordaje terapéutico debe realizarse en contextos correccionales necesariamente institucionales. En el país, el trabajo terapéutico al que hago men-

ción se hace en condiciones deficitarias en las unidades penitenciarias o no se realiza. Los requerimientos para el tratamiento son básicos y de bajo costo. Los condenados por delitos contra la integridad sexual de las personas deben estar separados del resto de los internos, y tratados por especialistas hasta remediar su malestar psicológico.

No se conocen casos de recuperación total y eso nos obliga a pensar en medidas de protección para la sociedad y en asegurar el adecuado y firme control del individuo. En cuanto al tratamiento de los agresores, los especialistas coinciden en que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento no es fácil y se fracasa por varios actores. Entre otros, porque el tratamiento no suele ser voluntario y presenta dificultades técnicas muy graves. No hay protocolos, los agresores son muy distintos unos de otros.

Asimismo, se observa que los condenados por estos delitos poseen una conducta ejemplar dentro de las penitenciarias, debido en gran medida a que consideran en su faz interna que no han cometido un delito.

Resulta ya un hecho comprobado la tendencia hacia la reiteración delictiva que evidencian los ofensores sexuales, y así numerosas opiniones profesionales indican que existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo, aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que en los casos que se consideren necesarios, los violadores deberán seguir un tratamiento psicológico y cumplir con una medida de seguridad en pos de una mejor reinserción social.

Finalmente, y en cuanto a este punto, la propuesta tiende a rescatar la necesidad de la comunidad de contar con mecanismos de defensa que permitan adoptar actitudes preventivas de protección y limitar las posibilidades de que se repitan, haciendo especial énfasis en un cuidadoso tratamiento y control sobre los victimarios del presente tipo de delitos. Todos debemos estar preocupados por el futuro, atento a que serán los últimos años de nuestras vidas.

Norberto Massoni.

2

Solicitada por el señor senador Massoni

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SENADOR MASSONI

El dictamen traído a consideración posee una serie de imprecisiones que conspiran negativamente a la protección del bien jurídico que se pretende tutelar.

Artículo 2º y 5º: Como principio se establecen en el artículo 2º, las condiciones que deberán respetar las licenciatarias al momento de la comercialización de equipos celulares.

Equipos que han de entenderse nuevos, puesto que en el artículo 4º se prohíbe de manera expresa la venta, cesión y/o transferencia de equipos celulares usados.

Ahora bien, el artículo 5º dispone el cumplimiento de los requisitos del artículo 2º para la transferencia de los equipos.

Aquí es donde la redacción se vuelve confusa, o esta disposición debe estar dentro del artículo 2º volviéndolo redundante, puesto que la compraventa implica transferencia (artículo 1.323 Código Civil), o bien, lo que se regula es una nueva situación jurídica.

Para el Diccionario de la Real Academia Española la transferencia implica ceder a otra persona el derecho, dominio o adquisición que se tiene sobre algo.

Sin quererlo la figura del artículo 5º permitirá la posibilidad que una persona transfiera su teléfono celular, y esta acción importaría la venta de un equipo usado, cuestión expresamente prohibida en el artículo 4º.

Se propone eliminar el artículo 5º, y en su caso incorporar el concepto en el artículo 2º.

Artículo 3º: En cuanto al artículo 3º propongo el agregado del siguiente párrafo.

“Adjuntando la autorización correspondiente y fotocopia autenticada del documento del usuario fiscal.”

Esta propuesta tiene como finalidad que la autorización sea fehaciente a los efectos de evitar posibles reactivaciones de equipos hurtados o robados de manera fraudulenta.

Artículo 6º: La disposición del artículo 6º en cuanto a que la venta de tarjetas de telefonía celular deba realizarse por medio de bocas de expendio autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, quien fijará las condiciones, nos coloca frente al ejercicio de una facultad con un alto grado de discrecionalidad y la posibilidad de creación de monopolios.

Nos encontramos frente a un exceso reglamentarista innecesario, prácticamente estaríamos en presencia de una semiestatización de la cadena de ventas similar a los registros notariales.

No debemos olvidar que lo trascendente es facilitar el control de los usuarios, que podrá lograrse con otros medios.

Lo que es peor que tanto esta disposición como las contenidas en los diversos artículos del dictamen no resuelven el problema central que nos ha llevado a esta situación, y es el ineficaz ejercicio del control por parte del organismo de control del servicio público.

La autorización del Estado nada agrega a dicho control, perjudicando a los usuarios innecesariamente.

Artículo 7º: En el artículo 7º se crea en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación un registro y se impone la obligación de informar en el artículo 8º a las empresas de servicio de telefonía, esta disposición está carente de sanción en el caso de incumplimiento de la obligación, cuestión que debería haberse previsto.

Artículo 9º: Se otorga aquí una facultad a las fuerzas policiales y de seguridad que con esta redacción puede provocar dos situaciones: un ineficaz control por parte de las mismas, atento a que se las obliga a verificar una situación sin determinar cuál es el elemento que los poseedores deberán exhibir para probar la tenencia regular o por esto mismo un ejercicio abusivo de la atribución por dichas fuerzas.

Creo que es conveniente la creación, al igual que en los automóviles, de una "tarjeta verde" para los equipos, dicho instrumento hará que lo dispuesto en este artículo no se convierta en letra muerta.

Norberto Massoni.

3

Solicitada por el señor senador López Arias
REGISTRO DE TITULARIDAD DEL SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR MOVIL

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º - Las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular móvil deberán llevar un registro de titularidad del servicio, que contendrá el nombre, apellido, número de documento nacional de identidad y domicilio del titular de la línea o número de servicio asignado, debiendo contar con la totalidad de los datos referidos en forma previa a la habilitación del servicio.

Art. 2º - Para aquellos servicios de telefonía celular habilitados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, y respecto de los cuales las empresas prestatarias del servicio de telefonía móvil celular no cuenten con los datos exigidos en el artículo 1º, sus titulares deberán concurrir a dichas empresas a informar los mismos en el plazo máximo de 6 (seis) meses a contar desde la entrada en vigencia de la presente, y en la forma que disponga su reglamentación.

Art. 3º - Pasados los 6 (seis) meses a contar desde la entrada en vigencia de la presente, las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular móvil procederán a inhabilitar y dar de baja aquellas líneas o números de servicios asignados a cuyo respecto no se contare con los datos exigidos en el artículo 1º.

Art. 4º - A aquellas empresas prestatarias del servicio de telefonía celular móvil que incumplieren las disposiciones contenidas en los artículos que an-

teceden, se les impondrá una sanción pecuniaria cuya cuantía y modalidades de ejecución serán establecidas en la reglamentación de la presente, sin perjuicio de otras responsabilidades que legalmente concurren.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcelo E. López Arias.

4

Solicitada por el señor senador Gallia

Señor presidente:

Deseo expresar en estos momentos algunas palabras a efectos de dejar bien en claro los motivos por los cuales votaré afirmativamente la sanción de los proyectos de ley que estamos tratando.

El primer proyecto, modificatorio del Código Penal, es hoy imprescindible.

Como bien expresa el autor en sus fundamentos, a partir de diciembre del 83 se ha tratado, mediante la búsqueda de soluciones resocializadoras, aliviar la situación carcelaria modificando incluso institutos como la condena condicional, la excarcelación y la reincidencia, de tal forma que hoy estamos ante un cuadro del cual es necesario salir.

No debemos permitir que los criminales no cumplan la totalidad de su pena sin que el Estado, que tiene que velar por la seguridad de la comunidad, tome los recaudos necesarios para que estos ciudadanos se reinserten en la sociedad.

No debemos permitir que la laxitud de la Justicia o las falencias carcelarias justifiquen tampoco que seres humanos que erraron el camino reincidan por el solo hecho de no saber cómo adaptarse a la sociedad o confíen que la bondad de algunos institutos alivienan sus condenas.

Es cierto que los condenados tienen derechos humanos. Y también es cierto que los miles de argentinos que están con necesidades no optan por el camino del mal para satisfacerlas, y es para éstos que debemos legislar, protegiéndolos, dándoles la seguridad que se merecen y castigando a los culpables.

Tampoco debemos caer en el garantismo mal entendido. Si tenemos un problema carcelario, arreglemos ese problema y no dejemos salir a la calle a aquellos reos que no se encuentran en situación de convertirse en ciudadanos de bien. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Pero... ¿una tercera o una cuarta?

Evaluemos médicamente, psicológicamente, a los reos. Controlemos que verdaderamente se encuentran trabajando, bajo tratamiento, con contención social del entorno.

Hasta podríamos preguntarnos qué es más barato... ¿Preparar a esas personas para su salida, controlarlas, brindarles apoyo y oportunidades? ¿O llenar las calles con miles de miembros de las fuerzas

de seguridad dándoles a los demás ciudadanos una falsa imagen de tranquilidad?

Todos quisiéramos vivir en comunidades sin delitos, pero hoy existen y están desbordando a todo régimen jurídico.

Nuestra sociedad hoy se encuentra atacada por diversas formas delictuales, las cuales, si bien se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal, necesitan de una serie de conductas que no están específicamente penadas, imposibilitando con ello el justo accionar de nuestros magistrados.

El avance tecnológico en la última década ha hecho del teléfono celular, casi podríamos decir, un cómplice necesario de actividades criminales.

Sancionar esta ley que regula la venta de telefonía celular móvil, que pena la venta de aparatos usados, la adulteración lógica y física de sus números de control y de las tarjetas de telefonía debe ser el comienzo de la concientización, por parte de nuestra ciudadanía, de la importancia de tratar a ese aparato que debería servir únicamente para comunicarnos, con el respeto y los cuidados que debe tener un arma de fuego o nuestra documentación personal. Simples y honrados ciudadanos pueden tener serios problemas por no denunciar su extravío a tiempo, por no denunciar comunicaciones que no realizaron y muchos otros ejemplos.

Cuando la telefonía celular llegó a nuestro país era un artículo suntuario e incómodo. Poco a poco pasó a ser parte de uno tanto en el ámbito privado como público, paradigma del estatus. Y más acá en el tiempo pasó a ser prácticamente una necesidad para los más de ocho millones de usuarios. Ahora bien, cabe preguntarnos por qué es necesario.

Ya no es necesario para estar al tanto de nuestros intereses o mejorar el desempeño de nuestras actividades. Ahora es necesario para saber cómo están nuestros hijos, para que nos abran la puerta del garaje al llegar a nuestro domicilio, para poder comunicarnos con el auxilio mecánico al quedarnos varados antes de que nos asalten. Para poder ir a buscar a la parada de colectivo a nuestros hijos por temor a que caminen solos las pocas cuadras hasta la falsa seguridad de su casa. Para poder llamar a la policía si los ladrones nos cortaron el acceso al teléfono fijo. Y como cada vez son más pequeños y bonitos se ostentará como símbolo de modernidad, demostrando así que somos o pertenecemos a aquel estrato social que lo puede solventar, tentando así a los delinquentes a tomarnos como víctimas posibles.

Es cierto que este problema no es de ahora. Ya hace unos años, en el asalto con toma de rehenes del Banco Nación Argentina de Ramallo, provincia de Buenos Aires, en el caso llamado "Masacre de Ramallo", se constató que los delinquentes realizaban constantes llamados a vaya a saber quién por intermedio de aparatos de telefonía celular, aparatos que las posteriores investigaciones judiciales no pudieron encontrar.

Y como éste hay cientos de ejemplos. Incluso casos con poca repercusión pública o que no la tuvieron. Secuestros, asaltos, tomas de rehenes, interceptación ilegal de llamadas a particulares como tarea de inteligencia predelictual, y hasta a los poderes del Estado que utilizan esta tecnología como auxiliar indispensable, como las comunicaciones entre jueces y policías; teniendo todos un aliado en común por así decirlo, y es el teléfono celular. Pero este sistema no es el perverso. El hombre lo ha hecho perverso.

Hoy podemos tener un aparato con más de una línea. O varios aparatos con la misma línea. Y lo que es más grave, sin enterarnos siquiera.

También nos preguntamos si técnicamente se pueden controlar estos malos manejos. Todos los consultados dijeron que sí, pero cabe preguntarnos si hay voluntad de hacerlo. Y hoy nosotros, por nuestra parte, respondemos que sí.

En las reuniones de las comisiones respectivas hemos escuchado por parte de los operadores que el control es posible y que se hace actualmente. La realidad nos marca otra cosa. Hemos escuchado también que la falta de tipificación del delito ata a los jueces al momento de sentenciar. Pues bien, con la sanción de esta ley creo que se solucionan estos problemas. Las licenciatarias deberán hacer mejor los controles y los jueces podrán castigar a los culpables con el Código Penal en mano.

Hemos escuchado que la prohibición de venta por parte de agentes no licenciarios generará desempleo, ya que de esta actividad calculan que viven unas diez mil personas. Yo me pregunto cuál será el supermercado que vende el blister con un teléfono celular que despedirá empleados o cerrará por no poder venderlos más. O qué kiosco bajará su persiana por no poder vender tarjetas prepagas, ya que si así lo desean podrán ser autorizados por el Poder Ejecutivo.

Hemos escuchado que la venta de aparatos usados y la importación de aparatos del mismo tipo abaratan los costos de los usuarios. Y también mejoran los ingresos de las licenciatarias al vender mayor cantidad de servicios que es el objeto en sí mismo de estas empresas. Por eso le estamos dando al Poder Ejecutivo la potestad de regular la venta de este tipo de equipos "...únicamente, en la satisfacción de necesidades básicas e impostergables de la población..."

Hoy, esta tecnología, escasamente regulada por el avance incontenible de sí misma, es un aliado de la criminalidad que necesitamos y debemos combatir.

Hace pocos días fuimos testigos silenciosos de una demostración pacífica de profunda ira en contra de la inseguridad. Memoriosos de los actos públicos no recordaban haber presenciado semejante demostración en los últimos años, realizada tan ordenadamente, tan correcta, tan tranquila, a pesar de que se palpaba indignación y necesidad de justicia.

Las lágrimas de Juan Carlos Blumberg en memoria de su hijo Axel, como las de tantos padres anteriormente, son fiel reflejo de un castigo que sufre nuestra sociedad y que hoy está en nuestras manos, al menos en parte, evitar para un mañana mejor.

Señor presidente, por estas breves palabras quiero dejar plenamente justificado mi voto afirmativo a la sanción de estos proyectos.

Sergio A. Gallia.

5

Solicitada por el señor senador Terragno

FUENTE: INFORME ANUAL 2002 DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL

Quiénes están entre rejas

Perfil de los presos, clasificados según distintos criterios

Por edad

Menores de 24	14.625	32,52 %
25 a 34	17.041	37,90 %
		70,42 %

35 a 44	7.878
45 a 54	3.522
55 a 64	1.206
Más de 65	288
No consta	409
Total	44.969

Por sexo

Masculino	42.593	94,72 %
Femenino	2.366	
No consta	10	
Total	44.969	

Por nacionalidad

Argentinos	42.771	95,11 %
Chilenos	452	
Bolivianos	379	
Uruguayos	373	
Peruanos	313	
Paraguayos	155	
Brasileños	58	
Espanoles	33	
Colombianos	30	
Sudafricanos	23	
Italianos	20	
Chinos	14	
Británicos	6	
Ecuatorianos	3	
Nigerianos	1	
Otras nacionalidades	323	
No consta	15	
Total	44.969	

Por educación

Primaria	20.339	45,23 %
Primaria incompleta	10.084	22,42 %
Nada	5.015	11,15 %
		78,80 %
Secundaria incompleta	6.199	
Secundaria completa	1.839	
Estudios univ. incompletos	212	
ECiB 3 incompleta	212	
Estudios terciarios incompletos	193	
Estudios terciarios completos	142	
ECiB 3 incompleta	142	
ECiB 2 incompleta	106	
Estudios univ. completos	101	
ECiB 1 incompleta	73	
ECiB 2 completa	40	
ECiB 1 completa	29	
Polimodal incompleto	29	
Polimodal completo	5	
No consta	209	
Total	44.969	

Por estado civil

Solteros	31.376	
Divorciados	633	
Viuvo	560	
Separados	419	
Subtotal (sin pareja estable)	32.988	73,36 %
Casados	5.886	
En pareja	5.939	
No consta	156	
Total	44.969	

Por situación laboral al momento de caer presos

Desocupados	15.183	33,76 %
Subocupados	12.591	28,00 %
		61,76 %
Con empleo a tiempo comp.	5.317	11,82 %
No consta	11.878	26,41 %
Total	44.969	

Por la capacitación laboral que tenían

Ni oficio ni profesión	18.615	41,40 %
Oficio	14.112	
Profesión	2.371	
No consta	9.871	21,95 %
Total	44.969	

Por el lugar donde vivían

En centros urbanos	40.663	90,42 %
En zonas rurales	2.147	
No consta	2.159	
Total	44.969	

Por la provincia donde vivían

Buenos Aires	22.671	50,41 %
Córdoba	4.991	
Ciudad de Buenos Aires	3.021	
Mendoza	2.381	
Santa Fe	2.156	
Salta	1.520	
Neuquén	966	
Entre Ríos	833	
Misiones	822	
Río Negro	774	
Tucumán	684	
San Juan	565	
Jujuy	449	
La Pampa	426	
Chubut	417	
Santiago del Estero	347	
San Luis	287	
Corrientes	282	
Formosa	279	
Catamarca	240	
Chaco	217	
Santa Cruz	170	
Tierra del Fuego	111	
La Rioja	100	
No consta	260	
Total	44.969	

Por la situación legal en la que se encuentran

Procesados que esperan la sentencia en la cárcel	26.447	58,81 %
Condenados	17.756	
Contraventores	4	
Inimputables	424	
Otras situaciones	308	
Total	44.969	

6

Solicitada por la señora senadora Avelín

Buenos Aires, 1º de abril de 2004.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, a fin de solicitarle tenga a bien impulsar la sanción, en la Honorable Cámara a nuestro cargo, de la legislación penal que contempla los siguientes puntos

1. Una ley que reprima la portación de armas con pena de prisión no excarcelable.

2. Una ley que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil, con indicación de los datos personales del titular y su documentación. Asimismo, se registren quienes venden o alquilan dichos aparatos. Prohibición de venta a quienes registren antecedentes penales.

Regular la facultad de las fuerzas de seguridad a verificar la titularidad en la vía pública y al secuestro de la tenencia irregular.

3. Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) que impidan su falsificación o adulteración, similar al implementado con los pasaportes.

4. Legislar un sensible aumento en las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y violación (mínimo 20 años) y establecer un régimen de especial severidad, cuando en el delito participen o estén involucrados funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad. Las penas sean siempre de cumplimiento efectivo y total. Sin salidas anticipadas en ningún caso. Modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores.

5. Modificar la pena en condenas por dos o más hechos. Las penas deben sumarse sin límite máximo.

6. Que la pena perpetua sea perpetua. No más 25 años máximo.

7. Legislar imponiendo para los encarcelados—sean procesados o condenados— una reeducación a través del trabajo. Establecer un mínimo de 8 horas diarias en trabajos para la comunidad, obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, se instalen talleres, industrias o manufacturas de cualquier tipo en el interior de las cárceles para el trabajo y el aprendizaje de artes y oficios.

El trabajo dignifica tanto al hombre libre como al detenido.

Todas estas medidas requieren también una verdadera reforma del sistema judicial, a los efectos de obtener una Justicia rápida, efectiva y con jueces idóneos, para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.

Por todo lo expuesto le solicito inste a la pronta sanción de las leyes solicitadas, se acompañará a la brevedad las firmas de quienes adhieran a esta solicitud, en ejercicio del derecho a peticionar que establece la Constitución Nacional.

Finalmente le recuerdo que todos merecemos vivir seguros dentro del marco de la ley. Que la ley se cumpla, hoy y siempre.

Saluda a vuestra excelencia con la mayor consideración.

Juan Carlos Blumberg.
DNI 7.755.967